

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos

Núm. 85

Afirmando la «diferencia», defendiendo el territorio: Dos casos de acción colectiva en la Guatemala posconflicto

Patrick Illmer



DeustoDigital

Instituto de Derechos
Humanos Pedro Arrupe

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos

Núm. 85

Afirmando la «diferencia»,
defendiendo el territorio:
dos casos de acción colectiva en la
Guatemala posconflicto

Patrick Illmer

Bilbao
Universidad de Deusto
2016

CONSEJO DE REDACCIÓN

Felipe Gómez Isa, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Trinidad L. Vicente, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Cristina de la Cruz, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.

CONSEJO EDITORIAL

Anja Mihr, Investigadora del Human Rights Center de la Universidad de Utrecht, Holanda.
Antoni Blanc Altemir, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Lleida.
Bartolomé Clavero, Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas.
Carlos Villán Durán, Presidente de la Asociación Española para la Promoción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Carmen Márquez, Catedrática de Derecho Internacional Público, Universidad de Sevilla.
Cristina Churrua, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Eduardo J. Ruiz Vieytez, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Fernando Fantova, consultor en temas relacionados con los servicios sociales, Bilbao.
Francisco López Bárcenas, Academia Mexicana de Derechos Humanos, México.
Gaby Oré Aguilar, consultora internacional en el campo de los derechos humanos y el género y miembro de Human Rights Ahead, Madrid.
Gloria Ramírez, Catedrática de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México.
Gorka Urrutia, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Jaume Saura, Presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya, Barcelona.
Joana Abrisketa, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Universidad de Deusto.
Jordi Bonet, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona.
José Aylwin, Director del Observatorio de Derechos Ciudadanos, Temuco, Chile.
José Luis Gómez del Prado, miembro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de Mercenarios, Ginebra, Suiza.
José Manuel Pureza, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal.
Judith Salgado, Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.
Koen de Feyter, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Amberes, Bélgica.
Manuela Mesa, Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz, CEIPAZ, Madrid.
Noé Cornago, Profesor Titular de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Leioa.
Pablo de Greiff, International Center on Transnational Justice, New York.
Víctor Toledo Llancaqueo, Centro de Políticas Públicas, Universidad ARCIS, Santiago, Chile.
Vidal Martín, investigador de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE, Madrid.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org<<http://www.cedro.org>>) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© Publicaciones de la Universidad de Deusto
Apartado 1 - 48080 Bilbao
e-mail: publicaciones@deusto.es
ISBN: 978-84-15759-97-3

Índice

1. Introducción	9
2. Conceptualizando la acción colectiva en contextos de dominación elitista y complejidad demográfica	15
2.1. Más allá de la estructura y la agencia: la relacionalidad y complejidad en el análisis de la acción colectiva.	16
2.2. Producción de significados y re-territorialización: defendiendo la diferencia ontológica a través de la acción colectiva.	24
2.3. Producción de lo «local»; producción de un espacio diferencial	30
2.4. ¿Reconciliando la democracia y la diferencia? Multiculturalismo y poder en las prácticas políticas	35
2.5. Conclusión	43
3. «Diferencia» en significados y prácticas políticas: resistencia comunitaria en el norte de Quiché	45
3.1. La modernización diseñada por élites en el norte de Quiché.	46
3.2. «Una misma situación, una misma resistencia»: estableciendo redes en defensa del territorio.	57
3.3. Significados locales y diferencia cultural en la defensa del territorio	62
3.4. «Diferencia» en la práctica política: las consultas a la comunidad en el norte de Quiché.	67
3.5. Conclusión	75
4. Resistencia Pacífica La Puya: la defensa del territorio como afirmación de la vida	77
4.1. Más allá de la capital: los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo	78

4.2. Desarrollando un discurso de oposición.	84
4.3. El «encuadre» colectivo: hacia una posición de «diferencia» . . .	92
4.4. Revelando posiciones antagónicas, desarrollando la «diferencia» interna: el diálogo con el Estado.	98
4.5. Conclusión	105
5. Conclusiones	107

1. Introducción

La historia de la acción colectiva orientada al cambio social en la Guatemala de posguerra atraviesa un nuevo momento. En la sombra de un Estado cooptado por diversas facciones de las élites ha emergido una nueva forma de acción colectiva en torno a la defensa del territorio y los recursos naturales, con características distintas a aquellas propias de expresiones anteriores de activismo revolucionario y democrático. Esta acción colectiva surge en las zonas rurales y toma una nueva forma subalterna, que es localizada y se caracteriza por diversos aspectos de lo que he definido como «diferencia», una postura basada en significados políticos, económicos y culturales enraizados a nivel local, los cuales nutren la oposición a un reordenamiento de relaciones y espacios. Dicho reordenamiento es promovido por parte de las élites en las tierras históricamente indígenas de Guatemala mientras que la «diferencia» es propagada a través de la «defensa del territorio». Ésta expresa un apego socio-político y cultural a determinados espacios físicos y ha incitado resistencias colectivas a la realización de proyectos vinculados a la explotación de los recursos naturales.

La defensa del territorio destaca las incompatibilidades a nivel de significados y prácticas entre las élites y la acción colectiva local de los miembros comunitarios. A nivel de significados, dichas incompatibilidades se hacen evidentes en los entendimientos contrastantes sobre «tierra» o «recursos» y en las visiones de desarrollo enfocadas en su entorno inmediato. En cuanto a las prácticas, dada la erosión de los mecanismos formales de participación democrática en el contexto de un Estado con un nivel elevado de cooptación, los procesos organizativos en constante evolución de los comunitarios buscan crear espacios en los cuales desarrollar sus propios entendimientos respecto a la toma de decisiones y participación. En consecuencia, el objetivo principal de estas luchas —como esta investigación señala— es la reapropiación de

los procesos de decisión y la generación de espacios en los cuales su acción colectiva y su «diferencia» puedan ser mantenidas con vida y desarrollarse.

Para entender las características de estas resistencias, así como sus implicaciones para los debates en torno al cambio social y la democratización, sostengo la importancia de analizarla a la luz del proceso particular de formación del Estado de Guatemala. Por periodos extensos las élites económicas tradicionales, han sido las que principalmente han impulsado este proceso, ajustando periódicamente los mecanismos legales, coercitivos y políticos para perpetuar su posición social privilegiada y sus procesos de acumulación. Sin embargo, no se ha articulado un proyecto de nación ni se ha emprendido un intento de integrar a la mayoría indígena y tampoco se ha tomado en cuenta la complejidad demográfica derivada de las 24 comunidades lingüísticas en Guatemala. En lugar de ello, su dominio ha estado marcado por formas autoritarias de gobernar, el uso periódico de violencia y represión y la presencia de una ideología racista, así como su promulgación a través de las políticas de Estado.

A pesar de esto, en las últimas décadas nuevos patrones de gobernabilidad se han insertado en las relaciones entre las élites y el Estado. En el contexto de la transición hacia una constitución democrática formal en 1985, se puede percibir un cambio gradual de las formas abiertamente autoritarias de gobierno hacia modelos de «cooptación estatal». Autores como Garay y Salcedo-Albarán¹, así como Gutiérrez y Méndez² me han servido de base para definir este cambio gradual de los mecanismos aplicados en el control del marco institucional del Estado. A diferencia del control abiertamente autoritario basado en una alianza con las élites militares ejercida hasta el período de transición, la «cooptación del Estado» implica el uso de una amplia gama de mecanismos legales e ilegales, formales e informales por parte de las élites para modificar, influir y reconfigurar el diseño, así como la aplicación de leyes y políticas.

¹ GARAY, Luis J. y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo (2012): De la corrupción y la Captura del Estado a la Reconfiguración Cooptada de los Estados. En: GARAY, Luis J. y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo (eds.) *Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Bogotá: Ryom House Mondadori. pp. 33-48.

² GUTIÉRREZ, Edgar y MÉNDEZ, Claudia (2012): Guatemala hoy. La Reconfiguración Cooptada sobre instituciones fallidas. En: GARAY, Luis J. y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo (eds.) *Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México*. Bogotá: Ryom House Mondadori. pp. 113-124.

En este escenario se desarrolla una dinámica bidireccional, ya que diferentes facciones de la élite establecen alianzas con funcionarios dentro del Estado o con operadores políticos con capacidad de influir en los actores claves posicionados dentro del marco institucional. El soborno, la corrupción, el intercambio de favores y estrategias coercitivas figuran entre los mecanismos utilizados por diferentes facciones de la élite para cooptar las operaciones del Estado y en algunos casos incluso reconfigurar las funciones de las instituciones como tales. A su vez, los actores formales dentro del Estado también desarrollan un interés en la continuación de estos patrones, ya que obtienen beneficios de esta interacción.³ Los beneficios obtenidos incluyen, entre otras cosas, hacer uso de las capacidades de los actores afuera del Estado para operativizar estrategias violentas.

En Guatemala, participan en la cooptación estatal, las secciones de las élites tradicionales, históricas y emergentes de las últimas décadas, algunas de ellas con una capacidad más explícita para ejercer violencia y directamente vinculadas a formas de acumulación ilícita. Usando estrategias más allá del ámbito de la legalidad, las diferentes facciones de la élite están entrampadas en relaciones de competencia y cooperación mientras las funciones institucionales y reglas formales son cooptadas o reconfiguradas para promover intereses específicos, estrategias de acumulación y capturar rentas.

El impacto social de los patrones de gobernabilidad que derivan de la cooptación y reconfiguración de las funciones del Estado se hace evidente en políticas específicas. Además, estos patrones influyen en las formas adoptadas por la acción colectiva para poner de manifiesto los antagonismos generados a nivel local. En el periodo pos-conflicto de Guatemala estas incompatibilidades han sido ejemplificadas con los antagonismos que resultan de las políticas estatales que promueven la explotación de los recursos naturales. Estas políticas se reflejan particularmente en las zonas rurales de Guatemala, para cuyos territorios han sido aprobadas licencias de minería y extracción de petróleo, así como para la instalación de hidroeléctricas, además de la expansión de redes para el transporte de energía eléctrica. Estas dinámicas están en línea con tendencias regionales y globales, de acuerdo a las cuales los gobiernos de muchos países de América Latina y el hemisferio sur aceptan su papel en la división internacional del trabajo como proveedores de energía y materias primas, tales como hidrocarburos, metales y minerales.

³ GARAY, Luis J. y SALCEDO-ALBARÁN, Eduardo (2012): *op. cit.*

En Guatemala, las diferentes facciones de la élite nacional han adherido sus propias estrategias de acumulación a esos intereses económicos. En el contexto mencionado de cooptación estatal, las élites dentro y fuera del marco institucional cooperan a nivel local y nacional para promover la realización de proyectos relacionados con la industria extractiva y la producción de energía. Los intereses y políticas relacionadas con la explotación de los recursos naturales no explican por completo el surgimiento y la proyección hacia espacios públicos de los procesos organizativos en torno a la defensa del territorio, que es el aspecto central de este trabajo. Un lente socio-histórico tiene que ser aplicado para deconstruir las múltiples capas de complejidad cultural y política e identificar otros factores que explican el surgimiento de esta nueva forma de acción colectiva entre las comunidades. Esta investigación busca demostrar que la forma en que las políticas determinadas por las élites impactan en las comunidades rurales, constituye una variable crucial que ha estimulado relaciones antagónicas y respuestas basadas en problemas y experiencias locales. En el curso de las continuas actividades locales de producción de significados, los marcos de acción colectiva han llegado a constituir un significativo permeado de significados y prácticas producidas por los integrantes de las comunidades locales.

Para ilustrar los aspectos de este argumento central, este trabajo analiza dos expresiones de agencia local que han surgido entre los diversos procesos organizativos de las zonas rurales del país. El primer proceso analizado se centra en comunidades indígenas de la región del norte de Quiché, el segundo, en la Resistencia Pacífica La Puya (en adelante RPLP) que ha surgido cerca de la ciudad capital en comunidades predominantemente no indígenas en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc.

Ambos procesos han sido impulsados por miembros de las comunidades que han participado en las estrategias para defender sus territorios, medios de vida y comunidades del impacto de los proyectos vinculados a la explotación de los recursos naturales. Las variaciones en las características demográficas y la composición de las comunidades en los dos casos me permiten explorar cómo «interactúan» entendimientos y significados de «territorio» cuando la identidad indígena entra en juego.

Los significados arraigados en las lenguas y la cosmovisión indígena, así como el sistema de prácticas y conocimientos derivado de una visión específica y cultural del mundo, juegan un papel central al acen- tuar y revitalizar una comprensión holística de aspectos relacionados con el territorio en las comunidades indígenas en el norte de Quiché. En el caso de la RPLP los significados diferenciales del «territorio» que

enmarcan su resistencia se basan en procesos colectivos de significación que son desarrollados de manera mucho más inmediata y de corto plazo. Sin embargo, haciendo uso de la complejidad demográfica y diversas formas de conocimiento —entre ellas las de la población indígena— ellos también desarrollan significados que desafían la separación entre la naturaleza y los seres humanos y entre el individuo y el colectivo, así como la comprensión del territorio promovida por parte de las élites.

Antes de abordar los dos casos específicos de articulaciones en defensa del territorio se delinearé un marco teórico para analizar los mismos y facilitar un entendimiento conceptual. Esto tiene como objetivo comprender el surgimiento de las articulaciones y las características que éstas adquieren en sociedades marcadas por una complejidad demográfica y un nivel muy elevado de cooptación del Estado por parte de diferentes facciones de las élites. Es pertinente aclarar que no se pretende presentar un marco para ser aplicado de manera generalizada a los procesos organizativos, sino se intenta delinear conceptos que siempre deben ser adecuados y contextualizados con respecto a las articulaciones específicas que se desee estudiar.

2. Conceptualizando la acción colectiva en contextos de dominación elitista y complejidad demográfica

Este capítulo tiene como objetivo proporcionar más detalles sobre los elementos conceptuales empleados en el análisis de la acción colectiva en Guatemala. Los conceptos a los que me refiero se basan en autores con diferentes enfoques teóricos, algunos más cercanos al campo de la acción colectiva y los movimientos sociales, otros vinculados a marcos teóricos pos-estructuralistas o teorías de «complejidad». Al abordar estos elementos examino conceptos de «agencia⁴ colectiva», «diferencia» y «espacio», explorando su rol para el entendimiento de procesos de democratización, así como debates alrededor del significado de democracia *per se*. Esto me permite preparar una base para el análisis de las características de los procesos de acción colectiva en curso en una sociedad marcada por niveles de complejidad cultural y patrones de cooptación del Estado muy elevados.

En este capítulo se sugiere la comprensión de las expresiones de acción colectiva como resultado de convergencias o procesos de aglomeración de elementos sociales que, a su vez, generan afinidades antagónicas en respuesta a la imposición jerárquica de significados por parte de Estados y élites.

⁴ El concepto «agencia» usado en el curso de este trabajo se deriva del término anglosajón «agency», para referirse a la capacidad de individuos de actuar. Aquí será empleado principalmente a nivel colectivo, con la «agencia colectiva» refiriéndose a una convergencia de individuos para acciones colectivas.

En el curso de estos procesos de resistencia, esta acción colectiva también puede desarrollar «propiedades emergentes»⁵ propias, las cuales se expresan a través de la afirmación de diferencia, la que se refleja en sus luchas por la reapropiación de significados. En consecuencia, procesos de agencia colectiva tales como las articulaciones en defensa del territorio, no se limitan al desarrollo de estrategias de oposición. También presentan una crítica más amplia al diseño de los procesos políticos institucionales y buscan crear espacios en los que pueden desarrollar formas y significados alternativos alrededor de la organización de interacciones políticas y procesos de toma de decisiones en el contexto de un Estado cooptado.

2.1. Más allá de la estructura y la agencia: la relacionalidad y complejidad en el análisis de la acción colectiva

Un aspecto central del debate sobre movimientos sociales y democratización ha sido desarrollado alrededor de la relación entre estructura y agencia. Dentro de las ciencias sociales este tema ha sido discutido en varios campos y diferentes disciplinas tales como la lingüística, la antropología y la economía. En su famosa afirmación en «El 18 Brumario de Luis Bonaparte» Marx analiza las restricciones a las cuales se enfrenta la actividad humana:

«Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.»⁶

En el contexto histórico del siglo XIX, Marx se inclinó hacia un enfoque de clase para subrayar el rol de las estructuras de clase al momento de determinar las características y posibilidades de la agencia social. El campo lingüístico, por otro lado, basándose en el trabajo de sociólogos como Giddens⁷ o Bourdieu⁸ avanzó en la conceptualiza-

⁵ DE LANDA, Manuel (2006): *A new philosophy of society. Assemblage Theory and Social Complexity*. London: Continuum.

⁶ MARX, Karl (1978): The eighteenth Brumaire of Louis Bonapart. En: TUCKER, R.C.: *The Marx-Engels Reader*. 2nd edition. p. 595.

⁷ GIDDENS, Anthony (1979): *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Berkley: University of California Press; GIDDENS, Anthony (1984): *The constitution of society*. Cambridge: Polity Press.

⁸ BOURDIEU, Pierre (1977): *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

ción de dicho término. La distinción introducida por Saussure⁹ entre *langue* (la regla gramatical que permite la producción de frases gramaticales) y *parole* (el proceso de producción de frases en el discurso) constituye uno de los puntos de partida. Saussure entendió el idioma no como una institución social creada por el locutor, sino sostenía que el locutor asimila pasivamente las formas idiomáticas pre-existentes, promulgando estructuras. *Parole*, por otro lado, representa la multiplicidad heterogénea de acontecimientos y significados.¹⁰ De esta manera Saussure introduce el entendimiento contingente del locutor y enfatiza sus potencialidades para articular discursos, al mismo tiempo que empieza a reducir la influencia determinante de estructuras en la teoría lingüística.

Derrida¹¹ fue más allá de lo que él percibía como una separación demasiado rígida entre *langue* y *parole*, así como entre sincronía y diacronía. Igualmente, introdujo la idea sobre la «estructuralidad de estructuras» como resultado de un infinito y continuo proceso de producción. Su marco lingüístico fue desarrollado alrededor del entendimiento de la *différance*. Esto es la idea de que los términos obtienen su significado a través de la diferenciación entre ellos, enfatizando de esta manera el diferencial en la producción de significados, es decir la diferencia entre significante y significado. Derrida¹², además, avanzó la idea de que los significados nunca están completos y de forma similar a las estructuras, se caracterizan por estar en continua evolución. De esta manera, introduce una línea temporal y un vínculo con la historia para un análisis más allá del campo de la lingüística.

Estas ideas fueron bien acogidas por Giddens en su intento de superar el rígido determinismo atribuido a las estructuras económicas dentro de la tradición marxista y así deconstruir aún más la relación determinante entre agencia y estructura. Giddens propuso usar «agencia» no en referencia a actos separados y aislados sino como un «flujo continuo de conductas.»¹³ Al mismo tiempo, indicó la importancia de identificar este flujo «como prácticas situadas...en el contexto de modos de actividades históricamente localizadas» que se caracterizan por la idea de que «el agente hubiera podido actuar de otra manera.»¹⁴

⁹ SAUSSURE, Ferdinand (1983): *Course in General Linguistics*. London: Duckworth.

¹⁰ LOYAL, Steve (2003): *The Sociology of Anthony Giddens*. London: Pluto Press.

¹¹ DERRIDA, Jacques (1978): *Writing and Difference*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

¹² *Ibid.*

¹³ GIDDENS, Anthony (1979): *op. cit.*, p. 55.

¹⁴ *Ibid.*, p. 56.

Su entendimiento en relación a las estructuras refleja una concepción de agencia más dinámica e interrelacionada, en la cual destaca el potencial de los agentes al momento de poner su conocimiento estructurado a trabajar de una manera creativa o formativa.¹⁵

Giddens no sólo da al concepto de estructura una noción limitante, sino también pone el énfasis en sus características potenciadoras, además, atribuye una existencia puramente virtual a las estructuras, mientras introduce una distinción en cuanto a su peso e impacto en términos de su persistencia temporal y amplitud espacial. Asimismo, introduce la idea de reglas y recursos con «características estructurantes» dentro de su marco conceptual con el fin de expresar un entendimiento de estructuras, es decir, enlazando espacio y tiempo en sistemas sociales donde destaca la noción constante de reproducción como algo integral a los sistemas sociales.¹⁶

Así, Giddens dibuja un entendimiento recursivo de la vida social y las estructuras para generar acciones que, al mismo tiempo, representan resultados no intencionados como consecuencia de las acciones emprendidas por los agentes. En este sentido, la dualidad y la distinción convencional entre estructura y agencia es interrumpida y en su lugar, caracterizada como interrelacionada y coevolucionando. El agente es visto como constituido y definido por una multitud de relaciones, integrando así una perspectiva relacional de la sociedad. La relación entre estructura y agencia en este modelo de «estructuración», representó definitivamente un intento de introducir un entendimiento más contingente en el análisis de la acción social y contribuyó, a su vez, a deconstruir las nociones de una sobredeterminación estructural. Sin embargo, pueden ser señaladas un número de limitaciones que ponen en duda la capacidad de este marco para representar un modelo generalizado para ilustrar y entender las relaciones sociales.

La crítica articulada por académicos cercanos a la teoría de la complejidad como Urry¹⁷ ofrece elementos importantes que resaltan las limitaciones en el marco conceptual de Giddens. Urry ha señalado que el entendimiento relacional de Giddens resulta demasiado simplista y que no logra equipar la agencia con características suficientemente contingentes para comprender adecuadamente las dinámicas de sus movimientos. En su lugar, sugiere un abordaje basado en un entendimiento de la «complejidad» social según el cual, a través de procesos de iteración, incluso los cambios a pequeña escala puedan generar transformaciones en es-

¹⁵ *Ibid, op. cit.*

¹⁶ *Ibid, op. cit.*, p. 64.

¹⁷ URRY, John (2003): *Global Complexity*. Cambridge: Polity Press.

estructuras a gran escala.¹⁸ En este sentido, Urry intenta reconceptualizar la idea de agencia como parte de una amplia gama de relaciones enredadas y circulantes que son alteradas por cambios derivados de una variedad de posiciones y distancias. Para comprender estas relaciones sociales en constante evolución, la idea de yuxtaponer estructura y agencia es reemplazada por un entendimiento no-lineal de dichas relaciones. Esta conceptualización también cuestiona la idoneidad de la forma en que los enfoques convencionales en las ciencias sociales tratan de comprender la complejidad de patrones de interacción social y formación de identidades colectivas, dados los continuos cambios en equilibrios y grados de relationalidad en medio de los cuales se mueven los agentes.

Otra de las críticas al trabajo de Giddens subraya las deficiencias epistemológicas resultantes de su incapacidad para abordar cuestiones ontológicas. Esto implica que no haya logrado profundizar suficientemente en los múltiples componentes que constituyen las relaciones sociales, así como entender los marcos conceptuales que subyacen a los agentes y sus prácticas.¹⁹

Esta falta de profundidad destaca en las obras más recientes de Giddens, donde su enfoque en relación al análisis de la agencia y la organización social —especialmente cuando es aplicada a diferentes contextos globales— resulta demasiado mecánico y homogeneizante. Escobar²⁰ describe esta limitación cuando señala que el trabajo de Giddens se basa en la suposición de que los procesos de globalización implican una «universalización de la modernidad», la cual «aunque híbrida, disputada, desigual e incluso heterogénea (...) termina siendo un reflejo de un orden social Euro-centrado.»²¹

Sumado a la escasa atención a la diversidad y complejidad ontológica, el trabajo de Giddens también opta por no centrarse en la variedad de patrones y formas que pueden caracterizar las expresiones de agen-

¹⁸ Urry propone reemplazar el concepto de recurrencia con el de iteración con el argumento de que «el cambio local mínimo a lo largo de billones de acciones repetidas, puede generar resultados inesperados, imprevisibles y caóticos, a veces opuestos a los que los agentes hayan intencionado.» *Ibid, op. cit.*, p. 47.

¹⁹ STONES, Rob (1996): *Sociological Reasoning: Towards a Post-Modern Sociology*. London: Macmillan; CHESTERS, Graeme (2012): «Social Movements y the Ethics of Knowledge Production», *Social Movement Studies: Journal of Social, Cultural y Political Protest*, 11(2), pp. 145-160.

²⁰ El argumento presentado por los autores como Stones o Chesters apuntan en una dirección similar al cuestionar la disposición de Giddens de participar en las reflexiones sobre el marco epistemológico que subyace en sus métodos. STONES, Rob (1996): *op. cit.*; CHESTERS, Graeme (2012): *op. cit.*

²¹ ESCOBAR, Arturo (2008): *Territories of Difference. Place, movements, life, redes*. London: Duke University Press, p. 167.

cia. Como sostiene Urry, prácticamente no toma en cuenta las expresiones de acción colectiva o de los movimientos sociales promoviendo procesos de cambio social.²²

Esto parece ser consecuencia nuevamente de una comprensión demasiado mecanicista de las posibilidades de acción, la cual también predomina en la literatura sobre los movimientos sociales de los países del Norte Global. De este modo, se fomenta una línea de análisis de la acción colectiva centrada en gran medida en la identificación de «correlaciones de fuerza». Igualmente, ha actuado como un filtro de investigación que pone límites a la potencialidad y las diversas formas que pueden tomar las articulaciones subalternas. Esto significa dejar de lado especialmente aquellas expresiones de acción colectiva que no se mueven o desarrollan en el terreno político e institucional convencional.

Para hacer frente a algunas de las deficiencias identificadas en el marco conceptual de Giddens e introducir al análisis de la acción colectiva en la segunda parte de este trabajo, incorporaré algunos aspectos de la teoría de ensamblajes de De Landa.²³ Su conceptualización se basa en una perspectiva Deleuziana y permite avanzar más allá de la comprensión relacional de Giddens. Al hacerlo, también supera algunas de las limitaciones de los enfoques convencionalmente usados en el análisis de los movimientos sociales.

Basándose en la crítica de Deleuze al dualismo ontológico, De Landa²⁴ ha abogado por un entendimiento apoyado en una ontología «plana» y fuertemente «relacional». En este sentido, las relaciones sociales son vistas como «contingentemente obligatorias» entre «individuos únicos, singulares, diferentes en escala espacio-temporal, pero no en condición ontológica».²⁵ Esta conceptualización se fundamenta en Deleuze y Guattari²⁶ y procura entender los ensamblajes como unidades resultantes de procesos de ensamblaje de entidades físicas, biológicas y sociales a través de dinámicas recurrentes. Esto se refiere a la idea de ensamblajes planteada como la consolidación de redes de interacciones rizomáticas entre partes individuales. A través de las interacciones,

²² URRY, John (1991): «Time y Space in Giddens» social theory. En: BRYANT, C.G.A. y Jary, D. (eds.) *Giddens» Theory of Structuration. A critical appreciation*. London: Routledge. pp. 160-174.

²³ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

²⁴ DE LANDA, Manuel (2002): *Intensive Science & Virtual Philosophy*. New York: Continuum; DE LANDA, Manuel (2006) *op. cit.*

²⁵ DE LANDA, Manuel (2006) *op. cit.*, p. 11.

²⁶ DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix (1987) *A Thousand Plateaus*. Minneapolis: University of Minnesota Press. London: Continuum.

los individuos se convierten en componentes de conjuntos sociales a diferentes escalas, como una comunidad o un Estado.

Este marco agregativo de conjuntos sociales ofrece una plataforma para integrar una noción de «relacionalidad» al análisis de la acción colectiva y rompe con la linealidad que sigue presente en el trabajo de Giddens. Al hacerlo, permite abarcar las múltiples capas de complejidad social en contextos como el guatemalteco. Dado que este trabajo se centra principalmente en la idea de ensamblajes sociales, se concentrará en cómo los individuos desarrollan relaciones y forman conjuntos a diferentes escalas, en lo comunitario, regional o nacional.

Como De Landa²⁷ afirma, siempre existen conjuntos sociales entre poblaciones estando éstos conformados por partes auto-subsistentes que se vinculan a través de «relaciones de exterioridad». Contrario a las «relaciones de interioridad», en las cuales los componentes no tienen existencia independiente, en las «relaciones de exterioridad» las partes pueden separarse y convertirse en componentes de otro ensamblaje.²⁸ A pesar de esto, las propiedades de las diferentes partes que componen el conjunto no pueden explicar totalmente sus relaciones ni sus características. La aglomeración de elementos o partes, permite que el ensamblaje desarrolle propiedades específicas constituyendo, de esta manera, «propiedades emergentes».²⁹ Aun así, es difícil definir un patrón generalizable para los conjuntos sociales al insertar este marco conceptual al análisis del contexto de Guatemala en la segunda parte de este trabajo.

La Guatemala rural está marcada por colectividades, cuya estructura e intensidad de relaciones están determinadas principalmente por su interacción social, económica y política en el ámbito local. El concepto de «comunidad» es generalmente usado para referirse a estos colectivos, que Wolf en su influyente obra había definido como unidades sociales corporativas y cerradas.³⁰ No obstante, el trabajo antropológico posterior, al menos en parte, refutó esta noción³¹ y sin negar un cierto nivel

²⁷ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

²⁸ *Ibid.*, p. 10.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ WOLF, Eric (1957): «Closed Corporate Communities in Mesoamerica and Central Java», *Southwestern Journal of Anthropology*, 13(1), pp. 1-18.

³¹ ARIAS, Arturo (1992): Changing Indian Identity: Guatemala's Violent Transition to Modernity. En: SMITH, Carol (ed.): *Guatemalan Indians and the state: 1540 to 1988*. Austin: University of Texas Press, pp. 230-257; LUTZ, Christopher H. y LOVELL, W. George (1992): Changes in the Nineteenth-Century Guatemalan State. En: SMITH, Carol (ed.): *Guatemalan Indians and the state: 1540 to 1988*. Austin: University of Texas Press, pp. 52-72; SMITH, Carol (1992): Introduction: Social Relations in Guatemala over Time and Space. En: SMITH, Carol (ed.): *Guatemalan Indians and the state: 1540 to 1988*. Austin: University of Texas Press, pp. 1-30.

de coherencia interna y unidad, estos autores han destacado las características económicas y políticas de las comunidades como evolucionando en línea con las influencias y relaciones externas.

La teoría de ensamblaje de De Landa proporciona un marco teórico para sostener y desarrollar estas perspectivas antropológicas. Así, las comunidades pueden ser vistas como cuerpos agregativos en evolución constante, compuestas por individuos que convergen en colectivos o ensamblajes. A nivel local, estos conjuntos sociales se forman con base en las relaciones familiares, vecinales y de amistad de las cuales surgen colectivos más amplios como la comunidad.³² Esto significa que, desde una perspectiva analítica, las comunidades pueden ser vistas como ensamblajes sociales que se articulan en la acción colectiva.

De la misma manera, los significados, discursos y prácticas producidas por los ensamblajes sociales o comunidades pueden ser entendidos como ejemplos de «propiedades emergentes» que, estabilizan estos cuerpos de acción colectiva a la vez que determinan su grado de cohesión. Esto fomenta una perspectiva de investigación más sensible y capaz de abordar el carácter específico de cada cuerpo de agencia colectiva y haciendo hincapié en su capacidad para desarrollar procesos organizativos inmanentes y de producción de conocimientos. Escobar y Osterweil³³ han insistido en este vínculo entre la idea de los ensamblajes y sus características inmanentes y auto-poéticas, preparando el terreno para una comprensión de la coexistencia y la co-construcción de múltiples mundos, contrastando con las ideas que tienden a asumir una sobre-codificación de colectivos y espacios por parte de procesos y actores dominantes. En su lugar, proporcionan elementos para enfatizar la capacidad de las articulaciones locales para producir sus propios significados y espacios.

Estos planteamientos se enlazan bien con el énfasis que este trabajo hace sobre las resistencias de las comunidades locales, las cuales insisten en mantener el control y tener una voz en cuanto a su entorno inmediato. Los casos estudiados ponen de relieve cómo la «comunidad» ha constituido un significante que ha sido revitalizado en el curso de las resistencias para dar paso a «propiedades emergentes» basadas en la defensa del territorio y los recursos naturales. En este contexto, también merece ser destacado el carácter de evolución constante y las

³² Usaré a menudo el término «comunidad» para referirme a las unidades o nodos organizativos en relación al análisis de los procesos de acción colectiva alrededor de la defensa del territorio.

³³ ESCOBAR, Arturo y OSTERWEIL, Michal (2009): «Movimientos sociales y la política de lo virtual. Estrategias Deleuzianas», en: *Tabula Rasa*, No.10, pp. 123-161.

tensiones dinámicas que marcan a la «comunidad». Una «comunidad» que ha sido establecida con base en determinados marcos ontológicos o alrededor de significados compartidos siempre corre el riesgo de ocultar o ensombrecer desigualdades, tensiones y diferencias en el interior del respectivo ensamblaje. A la vez, esto significa que los períodos de desintegración de la «comunidad» pueden ser seguidos por períodos de re-convergencia alrededor de determinados significados y prácticas organizativas.

Adicionalmente, al introducir una distinción entre los tipos de redes que se establecen, De Landa³⁴ avanza una idea interesante para definir las relaciones entre los diversos conjuntos o «nodos», mediante la introducción de una distinción entre los tipos de redes que establecen. Por un lado, plantea la idea de redes organizadas en «jerarquías», caracterizadas por un grado de control centralizado, rangos, una tendencia a homogenizar, así como determinados objetivos y normas de comportamiento. Además, las «jerarquías» tienden a operar según temporalidades lineales y estructuras arborescentes que son más características de organismos sociales como las fuerzas armadas, empresas capitalistas u organizaciones burocráticas. Por otro lado, De Landa avanza el concepto de «mallas», redes basadas en procesos de toma de decisiones descentralizados, la auto-organización y la heterogeneidad, así como el establecimiento de relaciones no jerárquicas que no pueden ser subordinadas a un único objetivo.

De Landa hace hincapié en el hecho de que es difícil encontrar casos puros de «jerarquías» o «mallas» en las realidades sociales ya que, los diferentes fenómenos están compuestos por una mezcla y combinación cambiante de estas dos modalidades estructurales.³⁵ Especialmente, en el curso de los estudios de caso sugiero que hay una tendencia al establecimiento de relaciones y redes más parecidas al modelo de «mallas» en los ensamblajes locales que analizo, los cuales están basados en lugares específicos. Esto es debido en parte a la escala local en la que operan, pero también está relacionado con su marco conceptual que enfatiza la libre determinación y la autonomía de las diferentes comunidades que integran los procesos organizativos.

Resumiendo, con base en los elementos presentados en esta sección, el enfoque de ensamblaje avanza dos aspectos interrelacionados para el análisis de la agencia colectiva en realidades sociales complejas.

³⁴ DE LANDA, Manuel (1998): *Meshworks, Hierarchies and Interfaces*. En: BECK-MANN, John (ed.): *The Virtual Dimension: Architecture, Representation y Crash Culture*. New York: Princeton Architectural Press, pp. 279-285.

³⁵ DE LANDA, Manuel (1998): *op. cit.*

En primer lugar, se escapa de la rigidez del marco de estructura-agencia en línea con otros enfoques, los cuales limitan el potencial de la acción colectiva a su impacto concreto en el terreno institucional. En su lugar, el enfoque de ensamblaje hace hincapié en la contingencia de la agencia colectiva, la variedad de sus formas y relaciones, así como en las características inmanentes que pueden ser desarrolladas en el curso de los procesos organizativos. En segundo lugar, mediante la invocación de una mayor sensibilidad ontológica, dicho enfoque prepara el camino hacia una mayor atención a los procesos epistemológicos y la producción continua de significados dentro de los respectivos ensamblajes. En consecuencia, proporciona una perspectiva «desde abajo» que permite explorar cómo desde una escala local, los colectivos o ensamblajes se escapan de la codificación por parte de los aparatos de poder para producir entendimientos y prácticas diferenciales. Estos aspectos serán retomados con más detalle en la siguiente sección.

2.2. **Producción de significados y re-territorialización: defendiendo la diferencia ontológica a través de la acción colectiva**

La sección anterior ha tratado de presentar una comprensión contingente y relacional de la acción colectiva, al tiempo que ha introducido la idea de cómo los ensamblajes de resistencia se conforman en los ámbitos locales. En un intento de proporcionar más detalles sobre los procesos de convergencia de subjetividades que consolidan los conjuntos de acción colectiva en torno a significados diferenciales, esta sección examina dos elementos conceptuales: «significado» y «diferencia».

El trabajo de Melucci³⁶ ha puesto de relieve el rol que la significación tiene en la convergencia de las articulaciones de acción colectiva. Melucci ha enfatizado cómo una variedad de agentes se disputan tanto la distribución de recursos económicos como los recursos culturales o simbólicos producidos por los grupos sociales dominantes. De acuerdo a ello, las posibilidades de que surjan conflictos son constantes ya que, la producción de estos recursos culturales o significados implica relaciones, símbolos, identidades y necesidades individuales.

El análisis de los significados en los trabajos de Melucci, ayuda a afrontar una de las limitaciones identificadas en el modelo estructura-

³⁶ MELUCCI, Arturo (1989): *Nomads of the Present*. London: Hutchinson Radius; MELUCCI, Arturo (1996) *Challenging codes. Collective action in the information age*. Cambridge: Cambridge University Press.

agencia presentado anteriormente. Se concentra en los aspectos cambiantes de las relaciones sociales, las afinidades y las actividades de creación de significados a partir de las cuales surgen las prácticas de acción colectiva y demuestra una mayor sensibilidad a las cuestiones relacionadas con posiciones ontológicas y los procesos epistemológicos de ellos se derivan. Como he indicado anteriormente, también rompe con otras tradiciones en los estudios de movimientos sociales como la Teoría de Movilización de Recursos, que, en cierta medida, expande los cálculos de costos y beneficios desde lo individual a un nivel colectivo. En su lugar, el marco de Melucci en relación a la producción de significados destaca el hecho de que la acción colectiva puede surgir a lo largo de una estructura de incentivos varios y que no siempre están motivados por el costo y beneficio ni por la inmediata disponibilidad de recursos.³⁷

Junto con otros autores que siguen esta línea de pensamiento «cultural»,³⁸ Melucci sostiene que la acción colectiva representa el intento de reapropiar significados para enfrentar procesos promovidos por los actores sociales dominantes con el objetivo de redefinir los objetos y las relaciones sociales y culturales. La acción colectiva tiene un papel clave al poner de manifiesto las tensiones que resultan de esta imposición de significados sociales, económicos y políticos y buscan la reconfiguración de patrones sociales y culturales de los actores subalternos.³⁹

Melucci utiliza el concepto de «acción antagónica» para definir esa relación de oposición. Esta conceptualización sigue centrándose en la relación entre los actores que participan en la producción de recursos sociales. Como señala Melucci, este proceso puede dar lugar a situaciones conflictivas que se generan por el «requisito de un sistema de enfrentar cualquier amenaza a la integridad estructural.»⁴⁰ En consecuencia, la acción colectiva puede representar un desafío fundamental a la imposición de significados

³⁷ MELUCCI, Arturo (1989): *op. cit.*

³⁸ Por ejemplo, ESCOBAR, Arturo (1992) *Culture, Economics, y Politics in Latin American Social Movements Theory and Research*. En: ESCOBAR, Arturo y ÁLVAREZ, Sonia E. (eds.) *The Making of Social Movements in Latin America. Identity, Strategy, y Democracy*. Boulder y Oxford: Westview. pp. 62-85; ÁLVAREZ, Sonia E. (1998): *Latin American Feminisms «Go Global»: Trends of the 1990s y Challenges for the New Millenium*. En: ÁLVAREZ, Sonia E., DAGNINO, Evelyn y ESCOBAR, Arturo (eds.) *Cultures of Politics, Politics of Culture. Revisioning Latin American Social Movements*. Oxford: Westview Press. pp. 293-324; DAGNINO, Evelyn (1998): *Culture, Citizenship y Democracy: Changing Discourses and Practices of the Latin American Left*. En: ÁLVAREZ, Sonia E., DAGNINO, Evelyn y ESCOBAR, Arturo (eds.): *op. cit.* ESCOBAR, Arturo (2008): *op. cit.*

³⁹ MELUCCI, Arturo (1989): *op. cit.*; MELUCCI, Arturo (1996): *op. cit.*

⁴⁰ MELUCCI, Arturo (1996): *op. cit.*, p. 52.

sociales, económicos o políticos promovida por los actores dominantes que tienen como objetivo reconfigurar pautas o relaciones sociales y culturales. En muchos casos, es en el transcurso de la participación colectiva que ciertos significados se revitalizan o adquieren un peso especial, lo que conduce a luchas que ponen en relieve los antagonismos.

Aunque el enfoque principal del trabajo de Melucci está orientado hacia las sociedades pos-industriales del occidente, considero que partes de su perspectiva sobre los significados diferenciales pueden ser ampliadas a las expresiones de agencia colectiva en el hemisferio sur. Por un lado, el carácter impersonal de las relaciones de poder asociadas a las sociedades pos-industriales del occidente tiende a estar menos camuflado en el hemisferio sur, donde muchas sociedades se caracterizan por un fuerte desequilibrio de poder y estructuras sociales jerarquizadas. Por otro lado, en estas regiones la dimensión conflictiva que rodea los significados de las palabras, los símbolos y los objetos es aún más pronunciada ya que en muchos casos se fundamenta en relaciones desiguales y coloniales de poder. La aparición de articulaciones que hacen referencia a raíces étnicas y diversos marcos culturales en muchas sociedades del hemisferio sur parecen confirmar esta hipótesis.

Al mirar hacia el Sur y sus expresiones de agencia colectiva es evidente que la articulación de significados diferenciales también está asociada con el desafío a entendimientos dominantes derivados de la hegemonía occidental y su producción de conocimientos. Santos⁴¹ es uno de los autores que ha enfatizado esta jerarquía y ha abogado por una «epistemología del Sur» para encuadrar la construcción de significados y conocimientos alternativos:

«En muchas áreas de la vida social, la ciencia moderna ha demostrado una superioridad incuestionable con relación a otras formas de conocimiento. Hay, sin embargo, otras intervenciones en el mundo real que hoy en día son valiosas para nosotros y en las cuales la ciencia moderna no ha sido parte. Está, por ejemplo, la preservación de la biodiversidad posibilitada por las formas de conocimiento rurales e indígenas las cuales, paradójicamente, se encuentran bajo amenaza desde el incremento de las intervenciones científicas.»⁴²

⁴¹ SANTOS, Boaventura de Sousa (2007): «Beyond Abyssal Thinking: From global lines to ecologies of knowledges.» Disponible en: <http://www.eurozine.com/pdf/2007-06-29-santos-en.pdf> (Consultado el 4 noviembre 2010); SANTOS, Boaventura de Sousa (2010) *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur*. Lima: Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

⁴² SANTOS, Boaventura de Sousa (2007): *op. cit.*, p. 33.

Esto significa que la acción colectiva a menudo se desarrolla durante procesos que cuestionan las relaciones de poder que subyacen a la producción de conocimiento. Santos apunta a la resistencia dirigida por los movimientos indígenas en América Latina como el ejemplo más convincente de lo que él llama «pensamiento posabismal». ⁴³ En su opinión, esto refleja un tipo de conocimiento que supera la brecha colonial y avanza hacia una perspectiva epistemológica enraizada en la experiencia del Sur Global. De la misma manera destaca la importancia del aprendizaje «desde el Sur a través de una epistemología del Sur» para superar el supuesto de supremacía del pensamiento occidental sobre las formas indígenas de conocimiento. ⁴⁴

Dicho desafío a las jerarquías de conocimiento establecidas y la producción de significados diferenciales por parte de los conjuntos de acción colectiva no puede ser separado de la comprensión relacional, ni limitado a determinadas identidades, aunque debe ser destacado el papel protagónico de las poblaciones indígenas y afro-descendientes en estas luchas. En la literatura de América Latina de las últimas décadas, una gran parte de atención ha estado enfocada en las luchas llevadas a cabo por los movimientos indígenas especialmente en las zonas rurales. ⁴⁵ No obstante, otros autores ⁴⁶ han documentado cómo las estrategias de acción colectiva surgen también entre la población urbana y no-indígena contestando a acuerdos económicos y sociales dominantes. Esto demuestra la importancia de no limitar la posibilidad de aglomeración de sujetos en cuerpos de acción

⁴³ *Ibid.*, p. 1.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 11.

⁴⁵ Por ejemplo, WARREN, Kate B. (1998): *Indigenous Movements and Their Critics: Pan-Maya Activism in Guatemala*. Princeton: Princeton University Press; YASHAR, Deborah J. (2005): *Contesting Citizenship in Latin America. The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge*. New York: Cambridge University Press; DÍAZ POLANCO, Héctor (2006): *Elogio de la Diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia*. México: Siglo XXI Editores.

⁴⁶ Por ejemplo, PORTO GONÇALVES, Carlos W. (2001): *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. Mexico: Siglo XXI; CECENIA, Ana E. (2008): De saberes y emancipaciones. En: CECENIA, Ana E. (coord.): *De los saberes de la emancipación y de la dominación*. Buenos Aires: CLACSO. pp. 15-35; ZIBECCHI, Raul (2007): *Autonomías y emancipaciones. América Latina en movimiento*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales; ZIBECCHI, Raul (2011): *Territorios en resistencia. Cartografía de las periferias urbanas latinoamericanas*. Málaga: Graficas Digarza; DINERSTEIN, Ana C. (2013): Introducción. La autonomía y sus imaginarios prácticos en permanente construcción. En: DINERSTEIN, Ana C.; CONTARTESE, Daniel; DELEDICQUE, Melina; FERRERO, Juan P.; GHIOTTO, Luciana; PASCUAL, Rodrigo: *Movimientos Sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina*. Buenos Aires: Capital intelectual. pp. 21-37; DINERSTEIN, Ana C. (2015): *The Politics of Autonomy in Latin America. The Art of Organising Hope*. London: Palgrave Macmillan.

colectiva que articula una agencia antagonista a un conjunto determinado de características biológicas, sociales o contextuales. En cambio, el reto para la investigación parece ser deconstruir la variedad de aspectos que permiten a ciertos significados adquirir importancia y estimular los procesos de convergencia colectiva.

Sin duda, la constelación de las comunidades rurales e indígenas, basada en las estrechas relaciones sociales, económicas y políticas entre sus miembros representa unas condiciones propicias para consolidar procesos de significación compartidos a nivel colectivo. Sin embargo, esta investigación busca demostrar en el curso de los estudios de caso, cómo en momentos determinados y escenarios específicos, la población no-indígena o urbana también converge en torno a la producción de significados diferenciales a la vez que consolida cuerpos organizativos y espacios alrededor de estos entendimientos.

La comprensión de Deleuze⁴⁷ sobre la «diferencia en sí misma», ofrece un marco interesante para reforzar esta idea de no someter los procesos de producción de significados diferenciales a identidades específicas o fijas. La conceptualización de la diferencia de Deleuze, comienza desafiando lo que él ve como una premisa del pensamiento occidental y que se deriva de la conceptualización platónica del mundo como algo «certero» y «real». Siguiendo esta línea de pensamiento, la diferencia se atribuye a lo idéntico o integral, ya que la identidad es vista como algo ontológicamente anterior a los sistemas de clasificación utilizados para categorizar las realidades sociales. Por consiguiente, la diferencia se convierte en una negación o contraste con la identidad real. Deleuze,⁴⁸ en cambio, argumenta a favor de ver «la diferencia en sí misma» en lugar de entenderla con base en la diferenciación de otros elementos ideales, rechazando así una realidad estática e inmutable basada en formas ideales o en identidades. Además, vincula diferencia con un enfoque relacional que reemplaza una noción pasiva de identidades con la idea de «devenir» para delinear las potencialidades inmanentes y el carácter en constante evolución de las subjetividades.

Esta noción también puede ser vinculada a la comprensión anteriormente descrita sobre la convergencia colectiva de ensamblajes, a la vez que refuerza el carácter contingente de los flujos de la acción colectiva. Además, esta noción allana el camino para imaginar la «diferencia» más allá de su vinculación con identidades étnicas fijas. En lugar de ello, es sugerida una noción constantemente cambiante de los individuos, que convergen en

⁴⁷ DELEUZE, Gilles (1994): *Difference y Repetition*. London: Athlone Press.

⁴⁸ DELEUZE, Gilles (1994): *op. cit.*

torno a los procesos de producción de significados en curso y luchan por su reapropiación. Como señalan Escobar y Osterweil, «(...) cualquier sobreco-dificación por parte de cualquier aparato de captura como el capitalismo o el Estado libera en forma simultánea flujos decodificados que se escapan de ella (e.g. como el impulso de la globalización neoliberal de reducir al mercado todos los aspectos de la vida social libera muchas otras formas de organización y deseo de la vida económica y social, incluyendo algunas «perversas»).»⁴⁹

Desde esta perspectiva, los ensamblajes de acción colectiva pueden ser vistos como dedicados a procesos de decodificación y producción de significados diferenciales. Con el fin de caracterizar las propiedades estratégicas y expresivas de estos conjuntos, varios académicos⁵⁰, basándose en el trabajo de Deleuze y Guattari, han recurrido a una distinción entre procesos de «re-territorialización» y «des-territorialización» en su análisis de acción colectiva. Según esta perspectiva, los procesos de re-territorialización contribuyen a volver más rígida la identidad de los ensamblajes. Estos procesos constituyen una estabilización de los sistemas sociales, lo cual puede ocurrir a través de una serie de mecanismos tales como la «legitimidad» proporcionada por jerarquías institucionales o la codificación de realidades sociales, promovida a través de políticas gubernamentales. Por otro lado, la des-territorialización representa procesos que rompen con esta rigidez y constituyen otros procesos de recodificación o desestabilización de significados.⁵¹

Con base en estas ideas y de acuerdo a estos autores⁵², las expresiones locales de acción colectiva bajo análisis en esta investigación pueden ser conceptualizadas como conjuntos que incitan procesos de re-territorialización. Éstos resisten a la recodificación o des-territorialización de sus espacios y prácticas, a través de la cual otros agentes intentan imponer sus significados a nivel local. Como se indicará en los estudios de caso en la segunda parte de este trabajo, esto implica que los conjuntos locales, en algunos casos, insisten no sólo en su propia producción de significados, sino también en el diseño de sus propios patrones de interacción política —aspecto que será desarrollado en la sección 2.4 de este capítulo—. Además,

⁴⁹ ESCOBAR, Arturo y OSTERWEIL, Michal (2009): *op. cit.*, p. 146.

⁵⁰ Por ejemplo, DAY, Richard J.F. (2005): *Gramsci is dead: Anarchist currents in the newest social movements*. London: Pluto Press; CHESTERS, Graeme y WELSH, Ian (2006) *Complexity and Social Movements. Multitudes at the edge of chaos*. New York: Routledge; DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

⁵¹ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

⁵² Por ejemplo, DAY, Richard J.F. (2005): *op. cit.*; CHESTERS, Graeme y WELSH, Ian (2006): *op. cit.*; ESCOBAR, Arturo y OSTERWEIL, Michal (2009): *op. cit.*

esta insistencia en el control de los procesos orientados a la producción y atribución de significados, parece adquirir un peso especial cuando se vincula y se asienta en lugares específicos. Con el fin de enlazar la convergencia colectiva en torno a los significados con las luchas por la defensa del territorio, la siguiente sección abarca la relación con el «espacio» y su significación.

2.3. Producción de lo «local»; producción de un espacio diferencial

Como se ha mencionado, los procesos descritos de re-territorialización y de-territorialización tienen, bajo ciertas circunstancias, una connotación espacial. En su lucha para re-apropiarse de significados, las expresiones de acción colectiva profundizan en la comprensión de aspectos relacionados con el territorio, la autonomía y la autodeterminación, contribuyendo de esta manera, a menudo, a innovar marcos teóricos y políticos. En América Latina, la articulación de los movimientos indígenas en torno a estas ideas ha sido especialmente contundente. La comprensión de los derechos a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas han acompañado sus luchas y hoy por hoy, constituyen herramientas para avanzar hacia la afirmación de la «diferencia», la cual expresa, a su vez, este apego a una territorialidad específica.

Al mismo tiempo, el desarrollo de afinidades antagónicas, la acentuación y la convergencia pública alrededor de significados atribuidos al territorio, están relacionados con una dinámica de reorganización espacial promovida dentro del marco de la expansión incesante del capitalismo de mercado. La explotación de los recursos naturales ha constituido una dimensión central en esta expansión, llevando a lo que Svampa⁵³ describe como un «Consenso de los Commodities» que reemplaza al Consenso de Washington y dota a estas estrategias de un nuevo impulso.

Esto se ha traducido en un consenso o aceptación pasiva de los Estados latinoamericanos de su papel en la división internacional del trabajo como proveedores de materias primas (entre ellos hidrocarburos, metales, minerales y alimentos). Svampa señala que este «consenso» es sostenido por los gobiernos conservadores y progresistas/centro-izquierda por igual y explica «la existencia de un acuerdo —tácito o explícito— alrededor del carácter irrevocable o irresistible de las dinámicas extractivistas actuales, que responden a la creciente demanda mundial de productos primarios.»⁵⁴

⁵³ SVAMPA, Maristella (2013): «Extractivismo en América Latina. El consenso de los Commodities.», *Le Monde Diplomatique*, 168, pp. 4-6.

⁵⁴ SVAMPA, Maristella (2013): *op. cit.*, p. 5.

Lo anterior supone un aumento en las articulaciones en torno a los derechos territoriales, por un lado; y por el otro, la promoción de la explotación de recursos naturales por parte de los actores estatales y las élites, lo que ha llevado a un choque inevitable entre concepciones contrastantes de «espacio» y «territorio». A pesar de que la implementación de proyectos orientados a la explotación de los recursos naturales ha seguido diferentes modalidades en varios países, en muchas áreas ha coincidido con los patrones descritos por David Harvey⁵⁵ como «acumulación por desposesión».

Según Harvey, Marx había insistido —y con razón para ello— en el vínculo entre los procesos de acumulación de capital y el uso de la deprecación, el fraude y la violencia. Marx vio estas características como limitadas a un estado primitivo u original del capitalismo, sin embargo, Harvey considera que estos procesos constituyen una parte muy importante de la era neoliberal y se ejemplifican en estrategias contemporáneas que promueven dicha «acumulación por desposesión». Aparte de los mecanismos identificados por Marx, Harvey argumenta que se está llevando a cabo un renovado cercamiento de las tierras comunes como medida para garantizar la continuidad de ciclos de acumulación. Él sostiene que esta tendencia está reflejada en una variedad de aspectos como: la aplicación de los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas o el material genético, el agotamiento de los recursos comunes ambientales a nivel mundial, la commodificación de formas culturales, historias y la creatividad intelectual, así como también la privatización de activos públicos.⁵⁶

Harvey ve el resurgimiento de la «acumulación por desposesión» como el resultado de dinámicas de sobre-acumulación, ya que el capital redundante se apodera de activos disponibles o recientemente liberados y los integra a las corrientes de acumulación de capital. La expansión espacial de las lógicas capitalistas es parte de estos patrones ya que, territorios que anteriormente estaban integrados sólo marginalmente, ahora son introducidos de pleno a los flujos de acumulación:

«La consecuencia es que los territorios no capitalistas deben ser penetrados no sólo por el comercio (que podría ser útil), sino también permitir la entrada de capital para invertir en empresas rentables que usan mano de obra más barata, materias primas, tierra a bajo costo y similares. La orientación general de cualquier lógica capitalista de poder no es que los territorios deban resguardarse del desarrollo capitalista, sino que éstos deben abrirse de manera continua.»⁵⁷

⁵⁵ HARVEY, David (2003): *The New Imperialism*. Oxford: University Press.

⁵⁶ HARVEY, David (2003): *op. cit.*

⁵⁷ HARVEY, David (2003): *op. cit.*, p. 139.

En el contexto de los modos neoliberales de integración, recodificación y reorganización espacial, el potencial de los territorios y recursos del Sur vuelve a ser blanco de sus estrategias de acumulación. Sin embargo, aunque los espacios «se han visto afectados y producidos por la modernidad europea», nunca han sido sumergidos ni instrumentalizados por completo.»⁵⁸

Una consecuencia común de muchas sociedades en el hemisferio sur dominadas por las élites es que la integración económica de estos territorios rurales a través de proyectos orientados a los recursos naturales no coincide con la expansión de una ciudadanía política o social. En este sentido, se asemeja al proceso que Dinerstein define como «una sumersión por exclusión» el cual, sigue basándose en estrategias tales como la expropiación, el desplazamiento, la invisibilización y expulsión que, en combinación con la miseria, llegan a constituir «la realidad cotidiana de población indígena y no-indígena, trabajadores urbanos y rurales, por igual.»⁵⁹

La naturaleza de estos procesos económicos también genera escenarios de incompatibilidad, especialmente evidentes en los contextos locales. Dichos procesos se enfrentan en especial con aquellas poblaciones que mantienen sus propios procesos de producción de significados y cuya codificación económica y social no se corresponde, o lo hace sólo parcialmente, con la racionalidad neoliberal.⁶⁰ Como resultado de estos choques se ha producido una acentuación de significados alrededor del espacio y territorio entre las comunidades y colectivos locales, poniendo de manifiesto el conflicto que surge alrededor de estos entendimientos antagónicos.

Los procesos de acción colectiva emergen para poner de relieve estos antagonismos, en algunos casos, reafirmando o revitalizando los conjuntos colectivos existentes. En otros casos, se promueve una convergencia en nuevos cuerpos de acción colectiva. Los aspectos compartidos por muchos de estos procesos de organización afirman las nociones de «lugar», «territorio» y lo «local» como un espacio esencial para la reproducción cultural y económica.

Esta diferenciación parece hacerse eco a ideas deleuzianas sobre la re-territorialización y des-territorialización, que Escobar ha resumido en

⁵⁸ GROSGUÉL, Ramón (2009) «A Decolonial Approach to Political-Economy: Transmodernity, Border Thinking and Global Coloniality», *Kult* 6, Special Issue. Epistemologies of Transformation: The Latin American Decolonial Option y its Ramifications, p. 29. Disponible en:

http://www.postkolonial.dk/artikler/kult_6/GROSGUÉL.pdf (Consultado el 21 febrero 2014).

⁵⁹ DINERSTEIN, Ana C. (2015): *op. cit.*, p. 220.

⁶⁰ CECEÑA, Ana E. (2008): *op. cit.*

dos tendencias, las cuales, en su opinión, también animan a un nuevo enfoque en lo «local» y en el «lugar»:

«1. Las estrategias de localización por parte del capital, el Estado y la tecnociencia. El capital, el Estado y la tecnociencia se engarzan en una política de escala que intenta cambiar la producción de la localidad en su favor. No obstante, en tanto que estas estrategias no son basadas-en-lugar (aun cuando son localmente articuladas), inevitablemente inducen un efecto de deslocalización con respecto a los lugares...

2. Las estrategias subalternas de localización por parte de las comunidades y los movimientos sociales. Estas estrategias son de dos tipos: las estrategias basadas-en-lugar que dependen de la ligazón al territorio y la cultura, y las estrategias de red que permiten a los movimientos sociales enactuar una política de escala desde abajo.»⁶¹

Varios autores han examinado esta segunda noción de «hacer-lugar» señalando el vínculo que los colectivos desarrollan, así como las múltiples estrategias que se dedican a la defensa de los territorios locales.⁶² En consecuencia, las estrategias de «localización» expresan la relación de individuos y comunidades con determinados lugares que se construyen alrededor de experiencias y memorias y se expresan con un fuerte apego al territorio.⁶³ Estas estrategias de «hacer-lugar» se atribuyen a una serie de movimientos, organizaciones, comunidades y colectivos que se oponen a los aspectos de la «producción de espacios»⁶⁴ en línea con los marcos económicos y culturales que corresponden a los patrones globales de acumulación de capital. Como he señalado en el apartado anterior, de conformidad con el entendimiento planteado por Harvey, la forma arbitraria y las estrategias coercitivas utilizadas para penetrar nuevos territorios parecen estimular esta acentuación de significados y la aglomeración alrededor de los cuerpos discursivos que hacen hincapié en la importancia de espacios locales.

⁶¹ ESCOBAR, Arturo (2008): *op. cit.*, p. 32.

⁶² CASEY, Edward (1993): *Getting back into place: Towards a renewed understanding of the place-world*. Bloomington: Indiana University Press; BASSO, Keith (1996): *Wisdom Sits in Places: Landscape y Language Among the Western Apache*. Albuquerque: University of New Mexico; SWYNGEDOUW, Erik (1997): Neither global nor local: Glocalisation y the politics of scale. En: COX, Kevin (ed.): *Spaces of globalisation: Reasserting the power of the local*. London, pp. 137-166; ESCOBAR, Arturo (2001): *op. cit.*; ESCOBAR, Arturo (2008) *op. cit.*; OSLENDER, Ulrich (2002): «Espacio, lugar y movimientos sociales: Hacia una «espacialidad de resistencia», *Scripta Nova*, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-115.htm> (Consultado el 4 noviembre 2010).

⁶³ OSLENDER, Ulrich (2002): *op. cit.*

⁶⁴ LEFEBVRE, Henri (1991b): *The Production of Space*. Oxford: Blackwell Publishing.

Esta tendencia también está reflejada en los patrones de organización de la acción colectiva que surgen en el contexto de Estados marcados por los patrones criminales y de cooptación descritos en la introducción de este trabajo. Con frecuencia y dada la reticencia de las élites a proporcionar aperturas o conceder control sobre el acceso a los espacios políticos formales, el enfoque de la resistencia y el desafío de los agentes subalternos se restringe a los espacios locales. A pesar de ello, en muchos casos, también parece corresponder a una elección estratégica de colectivos y comunidades para perseguir estrategias de «localización defensiva».⁶⁵ Lo «local» tiende a parecer más prometedor, en cuanto a la capacidad de determinar y mantener el control sobre sus propios procesos de producción de significados. Como el caso de Guatemala muestra, en lugar de movimientos sociales amplios, es especialmente en estos entornos locales donde se producen convergencias y «tiene sentido» desafiar a los aspectos de las políticas de Estado con base en experiencias concretas y cotidianas.

Estas expresiones de la acción colectiva pueden coincidir con otros intentos para consolidar espacios de organización y esferas públicas locales producidos por movimientos que, a la vez, tratan de responder a procesos de toma de decisiones impuestos por la élite. En consecuencia, tal y como sugiere Lefebvre⁶⁶, las prácticas políticas, económicas y sociales contribuyen a «producir espacios» más allá de los vínculos culturales o conceptuales que unen a los individuos y colectivos en lugares y territorios específicos. Su comprensión hace eco a la naturaleza socialmente construida del «espacio» basado en elementos históricos y naturales que son incorporados en los procesos políticos. De manera similar a los aspectos delineados anteriormente, Lefebvre también introduce la idea de la «diferencia» para poner de relieve las prácticas y actividades de producción de significados que desafían a los actores dominantes. En vez de constituir espacios cerrados y homogéneos, sus resistencias y contestaciones surgen en torno a diferentes «momentos» en el espacio para acentuar su «diferencia» y de esta manera, producir espacios diferenciales.⁶⁷

Este entendimiento indica también cómo la constitución y el desarrollo de las prácticas de interacción política que contrastan con las formas promovidas por los actores hegemónicos, son una parte integral de esta acción colectiva. Vinculándose ésta, además, con la idea delineada en torno a los procesos de re-territorialización, que integra a los agentes locales y sus ensamblajes en los procesos políticos a la vez que, fomenta un análisis de cuáles son los patrones en procesos de deliberación y toma de

⁶⁵ ESCOBAR, Arturo (2001): *op. cit.*, p. 149.

⁶⁶ LEFEBVRE, Henri (1991a): *Critique of Everyday Life*. London: Verso.

⁶⁷ LEFEBVRE, Henri (1991b): *op. cit.*

decisiones. En muchos casos, un resultado de este proceso es la propuesta de lo «local» como un espacio donde se consolidan esferas públicas que han sido aprehendidas por parte de poblaciones concretas.⁶⁸

Tal y cómo será discutido en el curso de este trabajo, las afinidades antagónicas generadas entre la población local en respuesta a la explotación de recursos naturales en varias regiones de Guatemala, ha revitalizado prácticas organizativas encaminadas también a consolidar esferas públicas locales. Frecuentemente, estas operan a la sombra o de manera paralela a los canales formales de participación, en un intento de defender a su entorno inmediato del impacto de los procesos dirigidos hacia la explotación de los recursos naturales.

Además, en línea con lo indicado por Zibechi, cuando se refiere a la resistencia a procesos industriales de explotación, la revitalización de la participación local puede constituir una plataforma para «potenciar su diferencia».⁶⁹ En este sentido, crea nuevas oportunidades para el intercambio y relaciones entre actores marginados, creando así, una plataforma para el intercambio y el desarrollo de experiencias, solidaridad y conocimientos. Igualmente, allana el camino para introducir otros antagonismos a los respectivos procesos de organización, como la discriminación relacionada con la cultura, la raza o el género. Esto incentiva un intercambio mutuo de conocimientos, así como la apropiación del proceso de organización por parte de las diferentes expresiones de acción colectiva, y al mismo tiempo, les permite descubrir y hacer frente a sus propias contradicciones internas.

Es a partir de estos espacios locales, especialmente cuando se trata de su entorno inmediato, que los conjuntos de acción colectiva se empeñan en mantener el control, tener voz y un rol relevante en los procesos de toma de decisiones. La siguiente sección examinará las implicaciones metapolíticas de estas expresiones de agencia y su desafío a los entendimientos dominantes de «democracia».

2.4. ¿Reconciliando la democracia y la diferencia? Multiculturalismo y poder en las prácticas políticas

Las secciones previas estuvieron dedicadas a la relación entre los procesos de re-territorialización y las diferentes estrategias de la «producción de espacio», con el fin de poner de relieve la orientación de la acción colectiva hacia la reapropiación de procesos de producción y de-

⁶⁸ SPINOSA, Charles; FLORES, Fernando y DREYFUS, Hubert (1997) *Disclosing new worlds*. Cambridge: MIT Press; ESCOBAR, Arturo (2001): *op. cit.*

⁶⁹ ZIBECHI, Raul (2011): *op. cit.*

terminación de significados. Esta sección se centrará en el aspecto de las prácticas políticas examinando los enfoques institucionales, así como los no institucionales, abordando la «diferencia» y sus implicaciones en el diseño de procesos políticos y sus relaciones institucionales.

La teoría democrática liberal ha tratado de resolver las tensiones entre la «diferencia» y la democracia mediante la conceptualización de relaciones en torno a la idea del multiculturalismo. Kymlicka ha tenido una gran influencia en la discusión acerca de cómo abordar la diversidad entre la población de un mismo Estado. Estudió cómo los intentos para abarcar la cuestión de las minorías o grupos étnicos se consolidaron primero en los años 70 en Canadá y los países escandinavos como resultado de las movilizaciones, presiones y demandas de estos grupos de población. Esto forzó a reconocer que las «naciones internas» no habían sido asimiladas en la cultura nacional dominante y que en su lugar, era «moralmente ilegítimo tratar de suprimir el deseo de los grupos nacionales en mantener su identidad nacional y sus instituciones.»⁷⁰

Con el fin de abordar estos aspectos, Kymlicka sugiere un marco de ciudadanía multicultural basado en una federación multinacional como el modelo que permitiría a los Estados hacer frente a las demandas que surgen de grupos minoritarios y colectivos indígenas. Este modelo se basa en tres derechos específicos: los derechos de representación especial, los derechos de autonomía y los derechos poli-étnicos. En consecuencia, este enfoque sostiene que la introducción de estos derechos colectivos haría posible reconciliar dichas demandas con las garantías liberales de los derechos individuales.⁷¹

Con la aparición de los movimientos indígenas y su insistencia en la reformulación de su relación con los Estados de América Latina, las demandas multiculturales fueron también incorporadas por instituciones supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU). Tras la aplicación de un Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas en 1982, décadas de lucha y presión dieron paso a la expansión de una variedad de organismos de derechos hasta la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Así mismo, con la redacción del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), estableció un marco normativo que desde entonces ha representa-

⁷⁰ KYMLICKA, Will (2002): Del Estado nacional al Estado multinacional. En: KYMLICKA, Will; VILLORO, Luis; ITURRALDE, Diego; CASTILLO, Rolando: *Democracia, ciudadanía y diversidad*. Guatemala: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, PNUD, p. 72.

⁷¹ KYMLICKA, Will (1995): *Multicultural Citizenship*. Oxford: Clarendon Press; Kymlicka, Will (2002): *op. cit.*

do un importante punto de referencia en el apoyo de las demandas de los países miembros de la OIT.

Parte de estos entendimientos multiculturales, son una serie de derechos colectivos que se consideran esenciales para los grupos étnicos debido a las siguientes razones: En primer lugar, establecer el acceso a la tierra y determinar las diferentes formas de administración y control de los recursos dentro del territorio. En segundo lugar, esbozar el derecho a la libre autodeterminación. En tercer lugar, sostener y garantizar los derechos culturales y lingüísticos, así como su integridad social.⁷²

Mientras las leyes internacionales representaron un marco general para este conjunto de derechos, los Estados han ido incorporando aspectos multiculturales en su legislación nacional de manera progresiva. Por otro lado, las leyes respectivas también han sido reflejadas en las demandas y discursos articulados por los movimientos indígenas y grupos étnicos. En consecuencia, la demanda de autodeterminación, la autonomía territorial y los derechos colectivos aparecen frecuentemente en la defensa del territorio y las resistencias a las mencionadas políticas orientadas a la explotación de los recursos naturales. Sin embargo, es importante señalar que con frecuencia esto ha ocurrido con un éxito limitado, especialmente en los casos en que el cumplimiento de estos derechos choca con los intereses económicos y políticos de las facciones influyentes de las élites.

En varios países, entre ellos Guatemala, estas dinámicas han coincidido con lo que Hale denomina un «neoliberalismo multicultural», el cual tiende a insertar «una brecha entre el reconocimiento cultural y la autonomía».⁷³ Hale sostiene que poderosos actores económicos y políticos utilizan la noción del multiculturalismo «para afirmar la diferencia cultural», al tiempo que conservan el privilegio de decidir qué derechos culturales son consistentes con su interpretación «del pluralismo democrático liberal», es decir, representando «una defensa del orden capitalista neoliberal.»⁷⁴ Varios estudiosos⁷⁵ han expresado puntos de vista similares, señalando cómo las élites e instituciones internacionales como el Banco Mundial se han manteni-

⁷² BRETT, Roddy (2009): *Etnicidad y Ciudadanía. Cuadernos de desarrollo humano*; 2007/2008-2. Guatemala: Programa de las Naciones Unidas.

⁷³ HALE, Charles R. (2002): «Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala», *Journal of Latin American Studies*, 34(3), p. 510.

⁷⁴ HALE, Charles R. (2002): *op. cit.*, p. 491.

⁷⁵ Por ejemplo, ŽIŽEK, Slavoj (1998): Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional. En: JAMESON, Fredric; ŽIŽEK, Slavoj: *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós. DÍAZ POLANCO, H. (2006): *Elogio de la Diversidad. Globalización, multiculturalismo y etnofagia*. México: Siglo XXI Editores.

do receptivas a algunas demandas, siempre y cuando no interfieran con sus principales intereses económicos y políticos. En el mismo sentido, enfoques multiculturales han sido utilizados para representar un discurso apaciguador e integrador de formas despolitizadas de diversidad, que a menudo se basan en connotaciones folklóricas.

La «diferencia», según estos entendimientos multiculturales sugeridos por Taylor⁷⁶ y Kymlicka⁷⁷, se convierte en objeto de reconocimiento e interpretación por los órganos de gobierno. Como señala Day en su crítica a estos enfoques «desde arriba», esto implica que «las comunidades autónomas tendrían algo que decir sobre los asuntos de la sociedad, la economía, la política, así como la cultura, pero al mismo tiempo permanecerían bajo el control decisivo de un aparato estatal euro-colonial».⁷⁸

Además, como fue mencionado en la introducción, se tienen que tener en cuenta las limitaciones particulares en la aplicación de los marcos legales en el contexto de los Estados del Sur. En la práctica, la aplicación y el cumplimiento de las leyes que establecen estas garantías para los derechos indígenas han sido muy limitados, especialmente en los entornos sociales donde los regímenes legales y la política están caracterizados por niveles avanzados de cooptación por parte de facciones de las élites. El espacio para la interpretación tiende a ser considerable, ya que la promoción de proyectos vinculados a programas de recursos naturales demuestra cómo se favorece una jerarquía de leyes a favor de los intereses de las élites, en detrimento de las comunidades locales. Las implicaciones que esto tiene de cara a las relaciones democráticas son claramente ejemplificadas en los casos donde la población local no tiene voz sobre los proyectos que se están estableciendo en su entorno inmediato.

A pesar de esta brecha entre el alcance teórico de las leyes y su aplicación en la práctica, incluso en contextos marcados por niveles avanzados de cooptación estatal como en Guatemala, los derechos derivados por los marcos de políticas multiculturales siguen representando puntos importantes en las demandas de los movimientos sociales e indígenas. Al mismo tiempo, el actuar de las comunidades y los movimientos puede ser caracterizado por una estrategia bidireccional. Por un lado, persiguen la consolidación de las esferas públicas locales, así como la apropiación de los procesos de toma de decisiones, lo que lleva a una fuerte

⁷⁶ TAYLOR, Charles (1992): *The Politics of Recognition*. En: GUTMAN, Amy (ed.) *Multiculturalism y the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press, pp. 25-73.

⁷⁷ KYMLICKA, Will (1995): *op. cit.*

⁷⁸ DAY, Richard J.F. (2005): *Gramsci is dead: anarchist currents in the newest social movements*. London: Pluto Press, p. 86.

referencia a las nociones de libre determinación y autonomía. Por otro lado, sus articulaciones también se relacionan con estructuras institucionales, con el fin de impulsar un reconocimiento de su producción autónoma de significados y prácticas, a menudo con referencia a un marco legal multicultural.

Para entender esta dinámica bidireccional y en línea con lo argumentado por parte de Dinerstein⁷⁹, se requiere una comprensión contextualizada de su noción de autonomía y libre determinación, con el fin de entender su orientación estratégica. Los movimientos sociales de América Latina no son vistos necesariamente como emprendiendo luchas «contra el Estado» o abogando por «un abandono de la idea del Estado como el lugar principal para la emancipación social», postura que es común en los procesos organizativos de los movimientos autónomos en los países del Norte.⁸⁰ En cambio, los movimientos del Sur pueden ser vistos como siguiendo líneas de acción que a veces parecen contradictorias. Tal y como se demuestra en los casos de acción colectiva analizados en este trabajo, las diferentes estrategias dirigidas a la defensa de sus espacios territoriales y a forjar esferas locales, dominan en sus articulaciones. Al mismo tiempo, participan en interacciones estratégicas con otros espacios institucionales para exigir el reconocimiento de derechos a la libre determinación de sus prácticas culturales, económicas y políticas. Especialmente en un contexto marcado por el elevado nivel de cooptación estatal, estas interacciones tienen, además, un carácter estratégico o de protección, ya que tanto colectivos y comunidades tratan de ganar tiempo en momentos específicos de los procesos organizativos o incluso, tienden a disuadir al estado del uso de medidas violentas o criminalizantes.

Un análisis de estas demandas vinculadas a marcos legales y la búsqueda de cierto reconocimiento por parte del Estado también sugiere que persisten los problemas conceptuales vinculados a los intentos administrativos de integrar la «diferencia» «desde arriba». De acuerdo con el trabajo de Deleuze y Guattari⁸¹, se podría argumentar que los enfoques multiculturales y el reconocimiento de las autonomías regionales, solamente se traducirían en términos de elementos, a una escala menor⁸² en la consti-

⁷⁹ DINERSTEIN, Ana C. (2015): *op. cit.*

⁸⁰ *Ibid.*, p. 32.

⁸¹ DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix (1987): *op. cit.*

⁸² Al mismo tiempo Deleuze y Guattari (1987) aceptan que los mencionados marcos legales representan herramientas para demandar auto-determinación y autonomía y pueden ser vistos como ambiciones políticas que vale la pena perseguir. Sin embargo, ponen énfasis en una conciencia sobre otras reivindicaciones y luchas paralelas de mayor importancia que sobrepasan estas demandas de enfoque jurídico y dirigidas hacia espacios institucionales.

tución de una nueva mayoría. Ambos autores sugieren la idea de «la minoría como una figura universal, o devenir de todos», vinculándola con el entendimiento fluido y evolutivo de la «diferencia», descrito en las secciones anteriores.⁸³

Esta idea de «llegar a ser minoría» hace hincapié en las características contingentes de las subjetividades que participan en la resistencia a los procesos que buscan fomentar una subordinación a identidades y significados reduccionistas. De este modo, el «devenir menor» sirve para abordar dos problemas conceptuales que caracterizan los esquemas institucionales del multiculturalismo. Primero, haciendo eco de la noción de «diferencia» presentada anteriormente, no restringe la posibilidad del «devenir menor» a un grupo étnico específico o minoritario. Al hacerlo, abre la posibilidad de que subjetividades que no están determinadas por un conjunto específico de criterios biológicos o sociales puedan enactuar una afirmación de «diferencia». Como ha indicado Escobar, esto también representa una característica de los mencionados procesos subalternos de localización: «La localidad y la comunidad dejaron de ser obvios, y ciertamente no habitados por identidades naturales o enraizadas, sino por complejas relaciones entre la cultura y el poder que van más allá de las fronteras locales. Más claras en el caso de los refugiados y de las personas en diáspora, esta condición afecta a todas las comunidades en todo el mundo en mayor o menor grado.»⁸⁴

Segundo, en los procesos de representación o de toma de decisiones el concepto de «devenir menor», implícitamente presta atención a las relaciones de poder y las diferentes formas que el ejercicio de poder puede tomar entre otras. Esta comprensión guarda similitudes con los trabajos de académicos que han tratado de introducir una distinción entre las diferentes estrategias o formas del ejercicio de poder. La distinción de Foucault⁸⁵ entre «poder» y «dominación», la diferenciación de Lukes⁸⁶ entre formas «dominantes» y «no-dominantes» de poder, así como la propuesta de Holloway⁸⁷ de un «anti-poder» que contrasta con formas de «poder-sobre», pueden ser mencionadas en este sentido.

⁸³ DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix (1987): *op. cit.*, p. 473.

⁸⁴ ESCOBAR, Arturo (2001): *op. cit.*, p. 147.

⁸⁵ FOUCAULT, Michel (1988): The ethic of care for the self as a practice of freedom. En: BERNAUER, James y RASMUSSEN, David (eds.) *The Final Foucault*. Massachusetts: MIT-Press. pp. 1-20.

⁸⁶ LUKES, Steven (1974): *Power: A radical view*. London: Macmillan.

⁸⁷ HOLLOWAY, John (2005): *Change the World without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. London: Pluto.

Una vez más, y en preparación de los estudios de caso, la conceptualización desarrollada aquí sugiere un entendimiento de relaciones de poder con base en patrones que combinan una afirmación de la «diferencia» con intentos de introducir nociones horizontales en los procesos de representación y toma de decisiones. Esto apunta a una «recodificación» de los modos predominantes de interacción política en espacios institucionales, un proceso que se ha estado desarrollando por múltiples movimientos sociales y expresiones de acción colectiva en el curso de las últimas décadas.⁸⁸ Hasta cierto punto, esto también refleja otros intentos de abordar problemas de liderazgos verticales y estructuras dominadas «desde arriba», que marcaron los procesos organizativos durante los períodos anteriores del activismo revolucionario.

Ampliando la producción diferencial de significados indicada anteriormente, en estos casos la acción colectiva politiza la «diferencia», ya que pone énfasis en prácticas políticas horizontales que buscan reconceptualizar el diseño de las interacciones políticas, los procesos de representación y toma de decisiones. Al hacerlo, también toman pasos tentativos hacia abordar, sin suplantar, la diversidad desde «adentro» de la correspondiente articulación colectiva.

En los actuales procesos de defensa del territorio, la participación, apertura o re-apropiación de los procesos de toma de decisiones tienden a representar una demanda central de los conjuntos de acción colectiva. Esto parece ser especialmente relevante en contextos de elevados niveles de cooptación estatal, tal como se ha descrito anteriormente, donde las características de la democracia no logran superar «estándares procedurales mínimos» y al mismo tiempo, están marcados por la erosión y cooptación de los canales institucionales formales. En muchos casos, la imposición vertical de políticas que dejan a la población local sin voz en relación a cuestiones relativas a su entorno, parece estimular dicha demanda de creación de esferas públicas locales y el rediseño de sus interacciones políticas. Como se indicará en los estudios de caso, el hecho de que estos espacios deliberativos estén anclados entre personas que enfrentan problemas y experiencias concretas, ha fomentado la apropiación de procesos de organización entre los miembros de la comunidad local. Además, ha animado a articular una crítica más amplia de los diseños de las interacciones políticas dominantes y sus procedimientos de toma de decisiones.

⁸⁸ AVRITZER, Leonardo (2002): *Democracy and the Public Space in Latin America*. Princeton: Princeton University Press. VAN COTT, Donna Lee (2008): *Radical Democracy in the Andes*. Cambridge: Cambridge University Press.

En este sentido, la defensa del territorio llega a representar la defensa de los significados diferenciales, así como la defensa de espacios autónomos de experimentación democrática. Como Melucci señala, los espacios públicos independientes de las instituciones de gobierno, del sistema de partidos y de las estructuras del Estado, pueden abrir nuevas posibilidades para la democracia: «estos espacios asumen la forma de un sistema articulado de toma de decisiones, negociación y representación, en el cual las prácticas de producción de significados desarrolladas en la vida cotidiana pueden ser expresadas y oídas independientemente de las instituciones políticas formales.»⁸⁹

En entornos de complejidad demográfica marcados por una pluralidad étnica e institucional, a veces sobre la base de patrones contradictorios o incluso características explícitamente antidemocráticas, se pueden consolidar una multiplicidad de escenarios locales. Sin embargo, en un intento de volver sus espacios cotidianos «más democráticos», también pueden surgir expresiones de acción colectiva que experimentan en torno a las características horizontales y participativas. A menudo, éstas lo hacen desafiando a la política institucional y organizándose fuera de sus espacios delimitados, desestabilizando, así, discursos y prácticas hegemónicas.

En la medida en que el enfoque organizativo de las expresiones de acción colectiva integra estas estrategias que buscan apropiarse de la toma de decisiones, van rechazando, a su vez, la exclusión de sus voces en respectivos procesos de decisión que implican a su entorno. Asimismo, se oponen a las formas de toma de decisiones dentro de los espacios formales e institucionales, mientras buscan consolidar espacios locales que avanzan sus propios patrones deliberativos y procedurales. Este tipo de expresiones de acción colectiva raras veces tienen o adquieren la fuerza suficiente para representar articulaciones democratizadoras en un sentido convencional, especialmente dado que las políticas estatales y la complejidad de las constelaciones societales limitan las oportunidades para una convergencia más amplia. No obstante, muchas de estas articulaciones locales pueden ser vistas como parte de una misión compartida orientada a resaltar antagonismos e imaginar formas alternativas de organizar los procesos políticos sobre el trasfondo de los fallidos procesos de transición y democratización guiados por élites.

⁸⁹ MELUCCI, Arturo (1989): *op. cit.*, p. 174.

2.5. Conclusión

Este capítulo tenía como objetivo presentar varios elementos de un marco conceptual del análisis de expresiones de acción colectiva en contextos marcados por una complejidad demográfica y estructuras formales cooptadas por élites. El modelo estructura-agencia de Giddens constituyó un punto de partida, pero a pesar de reconocer una importante noción de relationalidad, esta conceptualización sigue siendo como demasiado mecanicista para entender el carácter contingente de la agencia colectiva y su orientación más allá de los terrenos y espacios institucionales. Además, la ausencia de un abordaje de aspectos ontológicos resulta limitante a la hora de analizar expresiones de agencia más allá de contextos occidentales.⁹⁰

La interpretación de conceptos deleuzianos de De Landa⁹¹, en su teoría de ensamblaje, proporciona una serie de elementos para hacer frente a algunas de dichas deficiencias. Sobre la base de este entendimiento, las expresiones de acción colectiva pueden ser vistas como cuerpos agregativos con diferentes grados de cohesión. Esta idea de ensamblajes, también permite colocar un énfasis en las propiedades emergentes e inmanentes que se desarrollan en el curso de la acción colectiva. Vinculando este marco con el enfoque de este trabajo, en el curso de su revitalización, la «comunidad» puede ser vista como un significante colectivo, mientras que sus propiedades emergentes se reflejan en los discursos y prácticas destinadas a la defensa del territorio.

Al mismo tiempo, he señalado la importancia de los procesos de producción de significados para entender las convergencias entre los cuerpos de acción colectiva. Basado en el trabajo de Melucci he descrito la acción antagónica como una lucha para la reapropiación de la producción de significados, que contrarresta los procesos verticales que buscan redefinir objetos sociales y culturales. La agencia colectiva se desarrolla como un mecanismo para escapar de la codificación por parte de los actores económicos y políticos dominantes mientras al mismo tiempo, no puede ser restringida a identidades determinadas o fijas. Mediante la introducción de la idea de Deleuze⁹² de la «diferencia en sí mismo», lo inmanente se pone de relieve, así como las características en constante evolución de los procesos de acción colectiva.

El «consenso» en torno a la explotación de los recursos naturales⁹³, así como las políticas de «acumulación por desposesión», en línea con

⁹⁰ STONES, Rob (1996): *op. cit.*; CHESTERS, Graeme (2012): *op. cit.*

⁹¹ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

⁹² DELEUZE, Gilles (1994): *op. cit.*

⁹³ SVAMPA, Maristella (2013): *op. cit.*

la comprensión de Harvey⁹⁴, han estimulado la integración de una dimensión espacial a la acción colectiva en varias regiones de América Latina. Los procesos de reorganización espacial, dejan al descubierto y revitalizan redes locales de producción de significados alternativos alrededor del «lugar» y «territorio», las cuales no corresponden a la racionalidad neoliberal. De acuerdo con autores como Lefebvre⁹⁵ y Zibechi⁹⁶, he sugerido que esta producción local y alternativa del espacio no sólo se refleja a nivel de significados, sino también en las prácticas que politizan su «diferencia».

El multiculturalismo ha representado el intento más importante de reconciliar diferencias étnicas y la democracia a través de marcos legales que prevén la asignación de derechos especiales para las minorías y los grupos étnicos. Pero, sus limitaciones pueden ser identificadas especialmente en la aplicación de estos derechos, así como en sus deficiencias conceptuales. A pesar de esto, en muchos contextos del Sur, una noción binaria parece caracterizar las articulaciones y sus estrategias. Por un lado, existe un esfuerzo por buscar distanciarse del Estado y forjar espacios autónomos para defenderse de las políticas implementadas verticalmente. Por otro lado, en el curso de la acción colectiva, se establecen relaciones estratégicas con el Estado apelando a un reconocimiento de su diferencia y autonomía sobre la base de determinados regímenes de derechos.

Al mismo tiempo, en este capítulo he querido indicar, cómo, en muchos casos fuera de los espacios políticos formales e institucionales, las expresiones de la acción colectiva promueven una reconceptualización de los patrones de la interacción política y toma de decisiones. En consecuencia, la acción colectiva puede combinar su afirmación de la «diferencia» a nivel de significados con los intentos de reapropiarse de los procesos de toma de decisiones, así como el rediseño de los modelos de representación e interacción política.

Los dos estudios de caso en los próximos capítulos demostrarán lo esgrimido aquí arriba desarrollando una crítica más profunda de los significados hegemónicos de la democracia, mediante la presentación de la creación de esferas públicas locales enmarcadas en torno a personas y colectivos situados en experiencias y problemas específicos.

⁹⁴ HARVEY, David (2003): *op. cit.*

⁹⁵ LEFEBVRE, Henri (1991b): *op. cit.*

⁹⁶ ZIBECCHI, Raul (2011): *op. cit.*

3. «Diferencia» en significados y prácticas políticas: resistencia comunitaria en el norte de Quiché

Este capítulo tiene como objetivo reconstruir unas de las características específicas de los ensamblajes de acción colectiva que han surgido en defensa del territorio, analizando un proceso organizativo específico ubicado en el norte de Quiché. Después de presentar unos aspectos contextuales y la forma como los intereses de las élites impactan en la región, voy a examinar las respuestas generadas por parte de las comunidades locales a estos proyectos que amenazan los recursos naturales en el área. Además, voy a desarrollar un entendimiento más detallado de algunas de las características clave de esta agencia local y comunitaria en el contexto de un Estado cooptado.

En el curso del análisis de los procesos organizativos voy a explorar cómo el proyecto de modernización guiado por las élites ha llevado a las comunidades a destacar los antagonismos alrededor de dos aspectos interrelacionados. El primero, a nivel simbólico de la producción de significados anclados en un marco lingüístico y cultural en evolución continua que persiste a pesar de fuertes presiones externas. En cuanto al segundo, voy a señalar cómo, basado en la influencia de estos significados anclados en la cultura y cosmovisión indígena, las comunidades han buscado organizar sus interacciones políticas en formas que contrastan con las predominantes en el sistema político formal.

En el curso del capítulo voy a argumentar que este proyecto de modernización guiado por las élites ha acentuado significados alrededor del territorio entre los miembros comunitarios locales y que están en el corazón de su reproducción cultural y sentido de colectividad. Basado en significados culturalmente anclados, esto ha generado una revitaliza-

ción del marco de la «comunidad» que ha fungido como un significante para la resistencia y los procesos políticos, en algunos casos incluso permitiendo una superación de divisiones producto del conflicto armado. Adicionalmente los miembros comunitarios han añadido una noción explícitamente política al desarrollo de su «diferencia» traduciendo estos significados en intentos de re-diseñar las interacciones políticas y luchando para una reapropiación de procesos de toma de decisión. Ellos enfatizan la voz de lo local, la producción de significados diferenciales y las formas de toma de decisiones autónomas como una manera alternativa de organizar procesos políticos.

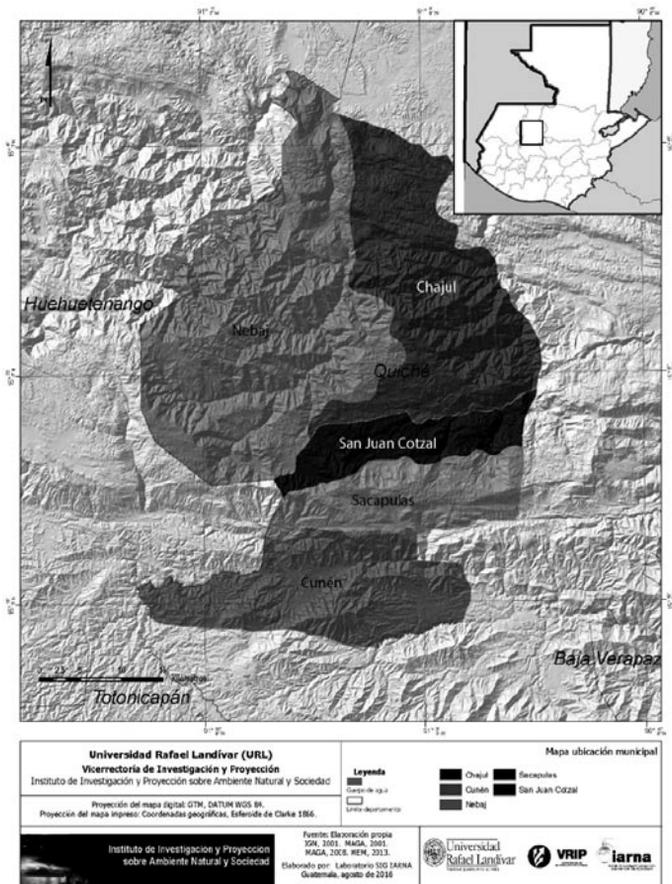
3.1. La modernización diseñada por élites en el norte de Quiché

Este capítulo se enfoca en un proceso organizativo de defensa del territorio surgido entre las comunidades en la región del norte de Quiché. En el curso de este trabajo uso esta denominación geográfica para referirme a un área de cinco municipios: Nebaj, Cotzal, Chajul, Cunén y Sacapulas. No constituyen una región administrativa y son cinco de un total de 21 municipios en el departamento de Quiché. Sin embargo, entre los miembros comunitarios de esta red, el «norte de Quiché» es el término más comúnmente usado para referirse a un espacio en el cual se ha desarrollado el proceso organizativo. Más del 90% de la población en los municipios mencionados es indígena Maya, haciendo parte del grupo étnico Quiché (Cunén, Sacapulas), Ixil (Nebaj, Cotzal, Chajul) y Sacapulteco (Sacapulas).

No se puede referir a la región sin indicar la historia de represión y violencia estatal, pero también merece mención la trayectoria de resistencias que se han desarrollado en el área. La violencia se repite a lo largo del proceso de formación del Estado guatemalteco y adquiere múltiples formas. En la región se ha complementado frecuentemente con patrones de explotación como el trabajo forzado para los finqueros locales o la migración estacional hacia la Costa Sur para trabajar en las plantaciones. El impacto coercitivo más fuerte en la región está vinculado al conflicto armado, que trajo niveles de represión sin precedentes a la zona. Adicionalmente, el legado de este periodo dejó gran parte de la región militarizada por diferentes estrategias de control y concentración de la población con el objetivo de reconfigurar las relaciones culturales, sociales y económicas. Sin embargo, la región también tiene su historia de resistencias, entre otras, las rebeliones en contra de las administraciones coloniales y pos-coloniales, el florecimiento de las redes cooperativas en los años 50 y 60 así como las diferentes estrategias que buscaban contener y evadir el control militar durante el conflicto arma-

do. En varios momentos revelan la existencia de redes latentes de organización y coordinación subalternas —normalmente basadas en el marco de la comunidad— que en ciertos momentos salen a luz pública.

Al igual que en otras áreas rurales de Guatemala, la comunidad representa el marco colectivo predominante en la región del norte de Quiché. Muchas se encuentran en las tierras altas de la región, retiradas y con poca vinculación con los centros urbanos.



Mapa de la ubicación de los cuatro municipios que representan el espacio organizativo del movimiento comunitario en el norte del departamento de Quiché. Elaborado para esta publicación por PÉREZ IRUNGARAY, Gerónimo Estuardo de la Unidad de Información Estratégica para la Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar

Como se discutió en el capítulo anterior, basado en la comprensión de Wolf⁹⁷, a menudo se ha sugerido entender el concepto de «comunidad» como una unidad social cerrada y corporativa. Sin embargo, varios estudiosos⁹⁸ han puesto en duda esta idea de verlas como «cerradas», sobre todo cuando se toma en cuenta sus características y relaciones económicas o políticas. En su lugar, estos autores han señalado la tendencia de las comunidades a reconstituirse en relación a la evolución de las circunstancias históricas. Esto puede explicar una cierta persistencia en su unidad, al mismo tiempo que indica su carácter evolutivo, reflejado —entre otros cambios— en su orientación económica hacia actividades artesanales o comerciales. Actualmente, se pueden notar fuertes diferencias entre las distintas constelaciones locales que siguen evolucionando, relacionándose y respondiendo a la variedad de impactos externos y características contextuales.

Como se ha indicado en la definición presentada en el capítulo anterior, desde un punto de vista analítico, las comunidades constituyen cuerpos de agregación de individuos agrupados en colectividades o «ensamblajes» según el entendimiento de De Landa.⁹⁹ Diversos grados de cohesión social, marcan cada unidad. En Guatemala, la literatura antropológica ha enfatizado la relación con el Estado como determinante para explicar el nivel de cohesión. Siguiendo esta línea, Smith ha argumentado que «las relaciones comunitarias siguen siendo fuertes, (...) no por el peso muerto del pasado, pero debido a la continua importancia de las relaciones de la comunidad para un pueblo oprimido y regido por un Estado extremadamente represivo.»¹⁰⁰

Aunque las características cambiantes tienen que ser tomadas en cuenta, son principalmente actos que a nivel colectivo son percibidos como injustos o amenazantes los que activan determinados significados e incitan mayor cohesión. Esto puede ser el caso cuando tierras comunales o el acceso al agua está bajo amenaza, engendrando así un fortalecimiento del grado de cohesión, ya que «hace sentido» actuar como «comunidad». Una nueva re-convergencia puede ser percibida en las zonas de la región del norte de Quiché, en el contexto de las luchas en defensa del territorio, a pesar de que el nivel de represión estatal ha dejado a muchas redes desequilibradas y penetradas por los intentos contra-insurgentes de reconstituir la «comunidad»

⁹⁷ WOLF, Eric (1957): *op. cit.*

⁹⁸ ARIAS, Arturo (1992): *op. cit.*; LUTZ, Christopher H. y LOVELL, W. George (1992) *op. cit.*; SMITH, Carol (1992): *op. cit.*

⁹⁹ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

¹⁰⁰ SMITH, Carol (1992a): *op. cit.*, p. 20.

de acuerdo a las ideas y entendimientos del Ejército. Las «propiedades emergentes» desarrolladas en el curso de los procesos de convergencia o «ensamblaje» como por ejemplo las capacidades discursivas, un aumento de interacción o la articulación de significados culturales compartidos, estimulan además un sentimiento colectivo de pertenencia. Esto está reflejado en las luchas actuales para defender el territorio local que se han traducido en una revitalización del significante colectivo de la «comunidad». Dadas las características contextuales de la región, la población local rural lo percibe como el espacio más eficaz y confiable para desarrollar estrategias de resistencia y organizar las interacciones políticas.

A pesar del hecho que constituye el marco principal de identidad colectiva en la zona, las comunidades del norte de Quiché no deben ser vistas como unidades sociales idílicas. «Comunidad» representa una tensión dinámica constante y siempre corre el riesgo de camuflar y reprimir diferencias internas o estabilizar ciertas jerarquías. En muchos casos, el legado de los 36 años de conflicto armado continúa reflejándose en la distribución interna del poder y en su estructura dado que autores y víctimas comparten espacios comunes. En otros casos, «principales», —consejos de ancianos— han consolidado una jerarquía para dominar los procesos de toma de decisiones dentro de las comunidades. A menudo, esto también constituye un legado del pasado y una consecuencia directa de la redefinición de las estructuras de poder comunitario durante el conflicto armado. Otras influencias, como la revitalización del papel de las autoridades indígenas a través de fondos y programas dirigidos por donantes internacionales, en algunos casos, también crean tensiones entre diferentes autoridades que están compitiendo al interior de las comunidades.

Además, se puede percibir la influencia de la expansión de la economía de mercado incluso en zonas remotas de la región, lo que constituye otro aspecto que contradice a la noción de «comunidades cerradas» y refleja las múltiples capas de relaciones, en las cuales las comunidades y sus miembros están insertadas. Especialmente programas sociales y proyectos dirigidos a un nivel micro-social y destinados a fortalecer las capacidades empresariales individuales en las comunidades, actúan como una medida de presión sobre los marcos colectivos.

En muchas comunidades la importancia de los entendimientos cognitivos y éticos compartidos han disminuido y sus miembros abrazan otras identidades que compiten con la identidad de la comunidad. Los grupos religiosos evangélicos o pentecostales —muchos de las cuales se introdujeron originalmente en la década de los 1980 como parte de los planes contrainsurgentes— representan una de estas identidades en

oferta. Por otra parte, la contratación en una de las numerosas organizaciones no gubernamentales, las cuales han entrado en la región durante el período pos-conflicto con diferentes programas de ayuda y desarrollo, en muchos casos también alienta tendencias que menosprecian la importancia del marco colectivo de la comunidad.

La complejidad de las organizaciones comunales también está reflejada por la representación política formal de las comunidades del norte de Quiché. En estos espacios, el liderazgo tiende a ser dominado por las autoridades tradicionales de la comunidad, así como por las autoridades elegidas de acuerdo a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este marco legal fue introducido en 2003 para ajustarse a las políticas de descentralización expuestas en los Acuerdos de Paz. Dar a las comunidades el derecho de nombrar a los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), así como a sus representantes comunitarios, y al alcalde comunitario o auxiliar, tenía como objetivo garantizar una mayor participación de las comunidades en las políticas municipales.

Sin embargo, en muchas zonas de la región los COCODE han sido cooptados por las autoridades municipales, quienes han insistido en designar como miembros del COCODE a sus representantes y a autoridades de la comunidad que favorezcan la gestión municipal y evitar así la oposición a las políticas municipales. A menudo, esto ha generado la constitución de nuevas jerarquías, con algunos representantes reclamando una posición de «COCODE vitalicio»¹⁰¹. En algunos casos, esto ha también llevado a la consolidación o renacimiento de estructuras de poder que se establecieron durante el conflicto armado dentro de las comunidades con el nombramiento de ex-comisionados militares o ex-miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).¹⁰²

Integrantes comunitarios expresaron su escepticismo con respecto a estas políticas de descentralización que establecen los Consejos de Desarrollo:

«Las leyes de descentralización han representado una flecha en el corazón de la autonomía comunitaria y en muchos casos han prepara-

¹⁰¹ Esta expresión hace referencia a las demandas de individuos que pretenden ocupar el cargo de COCODE por periodos extensos o de por vida, como en el caso mencionado de Sacapulas. Entrevista con integrantes de comunidades, Sacapulas, 03/10/2012)

¹⁰² Los PAC formaron parte de una estrategia militar impulsada especialmente desde el 1982 con la finalidad de involucrar a la población civil en el marco de la guerra contra-insurgente y en muchos casos por medio de reclutamiento forzoso, obligarla a prestar un servicio militar bajo el mando del Ejército.

do el camino para su división. Ellos han inculcado una dinámica en la red comunitaria que subordina la toma de decisiones, así como la búsqueda interna de soluciones a los problemas internos. (...) En cambio, las comunidades han sido reorientadas hacia las municipalidades para buscar proyectos, y a la vez los hace vulnerables a las políticas clientelistas que dominan en el ámbito local.»¹⁰³

En opinión de estos integrantes comunitarios, en lugar de empoderar a las comunidades, estas políticas han alentado procesos de integración vertical de las comunidades rurales como parte de las estructuras municipales. A su vez, en muchos casos, estos son cooptados por caciques locales o redes nacionales de los partidos, las cuales tienden a socavar la autonomía de la comunidad.¹⁰⁴ Se puede percibir la proliferación de patrones que hace vulnerables a los miembros de la comunidad a dinámicas electorales clientelistas de corto plazo. Contrario a la idea original, el papel de muchos COCODE se ha visto limitado a proporcionar algún grado de legitimidad democrática o aprobación simbólica para políticas municipales con base en decisiones ya tomadas.

Además, los municipios de la región han llegado a representar un eje importante en las actividades orientadas hacia la captación de rentas. En estas actividades, los partidos políticos actúan como una red de relaciones que trascienden las escalas y vinculan a los grupos locales con estructuras que operan a nivel departamental o nacional. Dentro de estas redes, las conexiones entre los varios niveles son cruciales para garantizar la ejecución de proyectos y contratos a nivel local, ya que se encargan de la transferencia de fondos hacia los presupuestos municipales. Este proceso permite, por un lado, que las redes de captación de rentas y actores que tratan de promover estrategias particulares de acumulación se consoliden alrededor de los consejos municipales. Por otro lado, también asegura la realización de proyectos que son esenciales para una afiliación clientelista de seguidores a los partidos políticos, lo que a la vez representa la base para el éxito electoral local.

¹⁰³ Entrevista con integrantes de comunidades, Sacapulas, 26/09/2014.

¹⁰⁴ En áreas como Nebaj, los últimos años estuvieron marcados por una competencia muy fuerte para la representación de las comunidades entre las autoridades municipales y las comunidades. El ex-alcalde (2007-2011) había nominado sus representantes comunitarios que se negaron a renunciar, mientras las comunidades nombraron sus propios representantes. Esta situación dio lugar a divisiones y fuertes tensiones adentro de las comunidades. Incluso dos años después de las elecciones del 2011 los ex-miembros del COCODE se habían negado a ceder su posición como representantes comunitarios.

A nivel local estas redes implican una variedad de actores, incluyendo representantes de empresas, autoridades municipales, finqueros locales, contratistas, ex-comisionados militares locales, funcionarios militares o ex-comandantes de las PAC.¹⁰⁵ La consolidación de estas redes políticas y económicas arraigadas en el pasado contra-insurgente es especialmente fuerte en el área Ixil, dado el nivel de penetración militar en la zona. En menor medida, también se halla en los otros municipios del norte de Quiché. Una característica común son las tensiones presentes en las comunidades por las dinámicas organizativas y la estructura de los partidos políticos. Especialmente en el contexto de los procesos electorales, la división y conflictividad dentro de las comunidades tiende a elevarse durante el período en el cual los partidos políticos nacionales llegan a distribuir regalos entre las comunidades. Camiones llenos de ropa barata, latas de alimentos, fertilizantes e incluso en algunos casos dinero en efectivo son distribuidos en las comunidades para ganar votos. Aunque la mayoría de los electores abandonan rápidamente los partidos después de las elecciones, esta práctica a menudo ha hecho lo suficiente para dividir a las comunidades o parar procesos de organización social.¹⁰⁶

Al igual que en otras partes de Guatemala, los recursos naturales de la región se han convertido en el blanco para actores nacionales y transnacionales. El renovado uso de estrategias coercitivas, económi-

¹⁰⁵ Conexiones históricas y militares son clave para este vínculo entre actores locales y redes regionales y nacionales. La promoción 108 representa una de estas redes y está integrada por parte de ex-integrantes del Ejército cercanos al presidente Otto Pérez Molina (2011-2015) y su Partido Patriota. En la región el actor más visible y de alto perfil es Estuardo Galdámez, miembro del congreso y ex-oficial militar. En línea con las pautas de cooptación descritas en la introducción de este trabajo, él se benefició de una serie de contratos para sus empresas de construcción mientras aseguraba proyectos para la población local. Adicionalmente su involucramiento en actos de corrupción y otras actividades ilícitas ha sido repetidamente señalado. Más información en: PALMA, Claudia (2012) «El diputado Galdámez», *El Periódico*. Disponible en: <http://elperiodico.com.gt/es/20120819/pais/215888/> (Consultado el 19 de agosto 2012). CORVO, Álvaro (2014): «Poderes viejos y vecinos nuevos: La disputa por los recursos naturales en el norte del Quiché», *Prensa Comunitaria km.169*. Disponible en: <http://comunitariapress.wordpress.com/2014/07/14/poderes-viejos-y-nuevos-vecinos> (Consultado el 31 de julio 2014).

¹⁰⁶ TRENTAVIZI, Barbara; CAHUEC, Eleuterio (2012): *Las Consultas Comunitarias de «Buena Fe» y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala. Informe de campo de la investigación: Sistematización de los Mecanismos de Participación y Consultas Tradicionales de Pueblos Indígenas Guatemala. Dos casos de estudio: San Juan Ixcay, Huehuetenango y Santa María Cunén, El Quiché*. Disponible en: http://www.iripaz.org/listado_docs/pueblos_indigenas/Las%20Consultas%20comunitarias%20indigenas.pdf (Consultado el 31 marzo 2014).

cas y culturales para promover estos intereses ha llevado a muchos miembros de las comunidades locales a poner de relieve el vínculo entre la actual penetración en el norte de Quiché y la promoción de estrategias de acumulación y búsqueda de rentas en el marco de las operaciones contra-insurgentes. La Iniciativa de Memoria Histórica (en adelante IMH), un colectivo que ha estado trabajando en el área de Quiché desde 2003, ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de este fenómeno en la región:

«En las comunidades sabemos y reconocemos que los militares nunca se fueron de nuestras áreas. Han estado siempre allí, algunos permanentemente, otros que llegan reclamando sus derechos en tierras que nunca supimos como los consiguieron a no ser que hablemos de botín de guerra. Cuando llegaron las empresas a hacer sus hidroeléctricas, lo hicieron de la mano del ejército. Fueron los militares quienes facilitaron la entrada a las compañías en el área Ixil por ejemplo. Después les brindaron seguridad, hicieron sus empresas de seguridad para las empresas y para tener controlada la población disconforme y resistente.»¹⁰⁷

Ya desde hace varias décadas el potencial en términos de recursos naturales ha sido identificado por los diferentes sectores de las élites militares y económicas. La transición hacia un marco formalmente democrático, así como el consenso global en torno a políticas neoliberales ha proporcionado un contexto favorable para poner en marcha esta reorganización de espacios de acuerdo con los intereses de las élites. El vínculo con el pasado reciente contra-insurgente está reflejado en los actores locales que rodean la ejecución de estos proyectos. Estos lazos son especialmente evidentes en el área Ixil, donde los terratenientes en conjunto con ex-comisionados y oficiales militares, así como ex integrantes de las PAC han sido cruciales para allanar el camino a fin de que empresas transnacionales como la compañía energética italiana ENEL pudieran establecerse en el área. Algunos de los propietarios de tierras históricas de la región han vendido o arrendado sus tierras en acuerdos lucrativos con varias empresas. Otros actores vinculados al pasado contra-insurgente actúan como testaferros para adquirir los terrenos necesarios para los proyectos o proporcionan seguridad para las operaciones de las empresas respectivas.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Resistencia de los Pueblos (2008): «*Sembrando memoria cosechamos luchas*», Boletín 8. Disponible en: <http://resistenciadlp.webcindario.com/pdf/B08.pdf> (Consultado el 31 March 2014).

¹⁰⁸ Entrevista con integrante de comunidades, Nebaj, 08/11/2013.

El proyecto de modernización en la región se expresa en las concesiones para minería y proyectos orientados a la generación de energía hidroeléctrica, la expansión de las redes eléctricas, así como las presiones para adaptar la producción local a las exigencias de los mercados externos. Varios proyectos hidroeléctricos como Xacbal o Palo Viejo ya están operando, mientras otros se encuentran en proceso de construcción o en espera de autorización. Además, varias licencias mineras para la exploración y explotación de una variedad de recursos naturales que van desde petróleo y níquel hasta minerales como barita, han sido concedidas.¹⁰⁹

El transporte y la comercialización de la energía van de la mano con la explotación de los recursos naturales a través de proyectos mineros o hidroeléctricos. Por un lado, representa una oportunidad para un negocio lucrativo a través de la exportación de electricidad a otros países de Centroamérica y por otro, el suministro de electricidad representa una condición previa para la implementación y operación de los proyectos orientados a la explotación de recursos naturales. Es por esto que la construcción de una amplia red de interconexiones eléctricas y redes en la zona representa otra dimensión muy visual de la reorganización de territorios y espacios. En la región se implementan a través de los programas gubernamentales, el Programa de Electrificación Rural (PER) y el Plan de Expansión del Sistema de Transporte Eléctrico (PET). Ambos están siendo ejecutados por la empresa colombiana Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECESA).¹¹⁰

Estos programas tienen como objetivo establecer una red para conectar más de 10 proyectos hidroeléctricos previstos para la región y su implementación lleva formas parecidas a las registradas en la promoción de otros proyectos hidroeléctricos y mineros: Los derechos a la información previa y la consulta de las comunidades locales son dejados de lado, mientras que las instituciones gubernamentales tratan de acelerar el inicio de operaciones de las empresas a través de la aprobación de marcos legales. La expansión de la red eléctrica refleja esta interacción entre diferentes escalas, como el Acuerdo Gubernativo 145-

¹⁰⁹ Aparte de las licencias oficialmente concedidas, integrantes de las comunidades citaron varios sitios de extracción no registrada y la existencia de continuos procesos de exploración en la región. Un sitio de extracción sin registro fue revelado por comunitarios de Nebaj en noviembre de 2014 y la subsecuente investigación reveló que la empresa estaba operando ilegalmente en el área.

¹¹⁰ TRECESA es la empresa guatemalteca subsidiaria del Bogotá Energy Group, representa una de las empresas de electricidad más grande en América Latina que opera en Colombia, Perú y Guatemala.

2013 que se aprobó en 2013 para declarar la implementación del PET y PER como una cuestión de «urgencia nacional y necesidad pública». De este modo, las restricciones de acceso a las tierras privadas y comunales para instalar postes y líneas de transmisión fueron eliminadas y en su lugar fueron aprobados marcos jurídicos que otorgan a las empresas la opción de un usufructo de inmuebles y terrenos gratuitos por un período de 25 años.¹¹¹

A medida que las diferentes dimensiones de este proyecto de modernización se basan en una legislación a menudo aprobada sin debate en el Congreso, las élites nacionales vinculan frecuentemente su aplicación a un discurso de gobernanza y el respeto del Estado de derecho. Como un analista argumentó, esto representa una oportunidad para apelar a la «preservación de la gobernabilidad desde el centro del poder económico, mientras que los lugares en donde se desarrollan procesos de resistencia son considerados como ingobernables. La intención es reordenar y organizar los territorios en línea con los intereses de la élite.»¹¹² Además, el discurso sobre gobernanza va acompañado por una amenaza explícita del uso de la fuerza con el fin de garantizar el imperio de la ley. En el contexto regional esto se refleja en los patrones de militarización, como el establecimiento temporal de puestos militares en los municipios de Cunén y Cotzal en 2009 y 2012, respectivamente.

Además de la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales, la proyección de los intereses de la élite hacia los espacios rurales también incluye estrategias dirigidas a un nivel micro-social o individual que están reflejadas en diferentes mecanismos para generar cambios en los patrones sociales de comportamiento. Estos son reflejados especialmente en el ámbito de la producción agrícola, que representa la principal fuente de supervivencia y un aspecto crucial de la vida cotidiana en las comunidades rurales. Se anima a los miembros de la comunidad a «modernizar» profundizando sus vínculos con la economía de mercado. Una variedad de programas gubernamentales y no gubernamentales —estos últimos en muchos casos vinculados a las agencias internacionales de desarrollo— tratan de allanar el camino para la integración del campesinado local a los mercados nacionales e interna-

¹¹¹ En este caso es pertinente mencionar que una alianza de organizaciones y comunidades interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo Gubernativo 145-2013. La Corte de Constitucionalidad tardó más de dos años en resolver el recurso, finalmente declarándolo no procedente en diciembre de 2015.

¹¹² Entrevista con activista de derechos humanos, Ciudad de Guatemala, 25/07/2012.

cionales. Una avalancha de préstamos internacionales, subvenciones y proyectos basados en la premisa de que «la prosperidad puede lograrse mejor a través de un capitalismo sin restricciones» tratan de acelerar este cambio.¹¹³

El incremento constante del número de instituciones ofreciendo micro-créditos, y de centros de emprendimiento social para la capacitación y asistencia técnica a los productores locales es parte de esta tendencia.¹¹⁴ En los diferentes programas, se proporciona orientación para garantizar que la producción local corresponda a las exigencias del mercado externo. Sin embargo, la exposición a los peligros del clima, la falta de experiencia en el cultivo de productos desconocidos en la región, así como el costo de acceder a los mercados tiende en muchos casos a precipitar prematuramente esta evolución. Por otro lado, como miembros de la comunidad han señalado, esto ha dejado a grandes sectores de la población local confrontados con un creciente nivel de endeudamiento.¹¹⁵

Los aspectos destacados en esta sección son sólo algunas de las dinámicas que impactan y reconfiguran las relaciones sociales, económicas y culturales en el norte de Quiché. Algunas características de esta «producción de espacios» guiada por élites se enfoca en el plano individual, tratando de inculcar hábitos empresariales entre la población rural. Otros, tales como los enfoques vinculados a la explotación de los recursos naturales, debido a su escala, impactan a nivel colectivo y comunitario. Los intereses dirigidos hacia los recursos naturales introducen importantes cambios en las constelaciones sociopolíticas regionales, no sólo debido al reordenamiento de las realidades locales, sino también debido a la resistencia generada entre las comunidades locales. Los antagonismos han sido destacados en los puntos de encuentro entre formas contrastantes de organizar las relaciones sociales, económicas y culturales. Como las siguientes secciones indican, es sobre todo en los casos en los cuales se amenaza el marco colectivo de la comunidad, en los cuales la agencia antagonista emerge al espacio público.

¹¹³ TORUÑO, Mayo C. (2010): «Debt and Migration. The Ixil in the Global Circuit of Capital», *Latin American Perspectives*, 37(1), p. 152.

¹¹⁴ Fundación Agros es una de las instituciones señalada por las comunidades de promover estos cambios en la producción en el área Ixil y es especialmente paradigmática por sus vínculos históricos en el área. La promoción de estos cambios en la producción es un trabajo que han desarrollado por décadas estando directamente vinculado con las estrategias contra-insurgentes en el área durante los años 80.

¹¹⁵ Entrevista con integrante de comunidades, Sacapulas, 26/09/2014.

3.2. «Una misma situación, una misma resistencia»: estableciendo redes en defensa del territorio

El aumento en la proyección de los intereses vinculados a la explotación de los recursos naturales hacia la región, ha generado impulsos para emprender formas de organización colectiva entre las comunidades en reacción a la penetración de sus territorios. Los vínculos de coordinación e intercambio de información más activos se han constituido entre integrantes de comunidades dentro de las mismas fronteras municipales, que a su vez se han consolidado como el enfoque principal de su agencia. Por otro lado, establecieron redes menos activas con las comunidades de los municipios vecinos.

El caso de Cunén, un pequeño municipio ubicado a unos 68 kilómetros al norte de Santa Cruz del Quiché, cabecera departamental, puede ser visto como un ejemplo del surgir aparentemente espontáneo de articulaciones comunitarias. Un periodo de creciente descontento sobre diferentes aspectos de las políticas locales coincidió con la militarización del municipio a petición del alcalde municipal. Esto constituyó un punto de inflexión y en enero de 2009 alrededor de 4.000 miembros de la comunidad se reunieron para manifestarse y bloquear una carretera regional cerca de Cunén.

El surgir de estas protestas fue inesperado ya que ésta constituye un área con una tradición limitada de protesta social. Es parte de una región caracterizada por unidades de PAC locales fuertes que durante las décadas del conflicto armado mantenían un fuerte control territorial. Los acontecimientos de enero de 2009 revelan redes comunitarias latentes que se solidificaron de cara a una serie de injusticias y amenazas percibidas colectivamente. En consecuencia, las protestas representan un momento específico en un proceso organizativo precedido por reuniones y debates a nivel comunitario para preparar esta toma de espacios públicos.

En el curso de esta movilización las comunidades presentaron una serie de demandas que fueron conocidas localmente como los «Acuerdos del Entronque» en referencia al lugar donde la movilización se llevó a cabo. Múltiples demandas y preocupaciones fueron presentados en el documento, entre ellos el proceso caótico y excesivamente burocrático para obtener el nuevo Documento Personal de Identificación (DPI) promovido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP); la retirada del Ejército de la municipalidad; el rechazo de la presencia de la Policía Nacional —la población se había cansado de una serie de incidentes de abuso de poder y corrupción—; el aumento de los costos de transporte público; las altas tarifas de electricidad

cobradas por Unión Fenosa —empresa transnacional española en este momento a cargo de la distribución de energía eléctrica—; preocupaciones sobre la privatización del agua —debido a una reforma gubernamental propuesta en la legislación sobre el agua— y el rechazo comunitario a una licencia de explotación minera en los territorios municipales que se había otorgado sin consultar o informar a la población local.

En los años siguientes las demandas alrededor de la defensa del territorio y los recursos naturales se consolidaron como el aspecto central de los procesos organizativos de las comunidades de Cunén. Junto con otras comunidades del norte de Quiché, han pasado a constituir nodos en una flexible red con comunidades del municipio vecino de Sacapulas y principalmente dos de los municipios Ixiles, Nebaj y Chajul, que también desarrollaron estrategias de organización colectiva alrededor de la defensa del territorio para responder a la penetración de políticas y agentes promoviendo la explotación de recursos naturales. En la mayoría de las localidades de la región la «comunidad» representa el marco organizativo principal para la interacción, la toma de decisiones y la movilización. En las zonas donde la división dentro de las comunidades persiste, son los sectores de la comunidad los que convergen en ensamblajes de acción colectiva y al igual que otras comunidades, pasan a constituir nodos en una red regional más amplia. De esta manera, la organización de base comunitaria en el ámbito municipal se ha complementado con una red flexible de alianzas que cruzan las fronteras municipales bajo el lema de «una misma situación, una misma resistencia». Como parte de la red, los delegados de las comunidades han participado en la coordinación y un periódico intercambio de información para enmarcar su resistencia hacia las políticas de las élites en sus territorios y con sus recursos naturales. De acuerdo a un comunitario de Nebaj:

«Todo comenzó con un intercambio frecuente de información que resultó muy importante para las comunidades respectivas. Es el momento en que te das cuenta de que todos nos enfrentamos a la misma situación y resistencia. Como estábamos intercambiando información, hemos dicho, venga a luchar aquí con nosotros también, nos acompañe, y es este acompañamiento mutuo que realmente ha fortalecido y animado a la gente a seguir adelante.»¹¹⁶

Con los años las visitas mutuas y la presencia como un acto de solidaridad y apoyo político en las diferentes actividades de las comu-

¹¹⁶ Entrevista con integrante de comunidades, Nebaj, 25/09/2014.

des se han consolidado como una dimensión central de la red, determinando de esta manera el movimiento de personas e información que cruzan las fronteras municipales y lingüísticas de las comunidades Quiché, Sacapultecas e Ixiles. A pesar de esta integración de las comunidades a una red regional y del hecho de que enfrentan desafíos parecidos, la orientación de los diferentes nodos está determinada por los respectivos antagonismos y problemas locales. Parecido al proceso de Cunén, en Sacapulas miembros de la comunidad de Parraxtut —una de las aldeas más grandes del municipio— habían formulado ya en 2006 una declaración que fue enviada al entonces presidente Oscar Berger para rechazar una licencia minera. Esta comunidad reforzó su posición mediante la búsqueda de una alianza con otras comunidades de Sacapulas así como los municipios vecinos para exigir la cancelación de las concesiones en sus áreas. Los lazos más fuertes fueron establecidos con las comunidades vecinas mencionadas de Cunén y la región Ixil. Esto revela que la red está marcada por un enfoque «desde abajo» mientras los colectivos locales buscan alianzas motivados por sus respectivas necesidades y entendimientos:

«Cuando se usa el marco comunitario como marco para la movilización se caracteriza automáticamente por un entendimiento horizontal y una dinámica desde abajo hacia arriba, ya que las comunidades trabajan sobre la base de una constante búsqueda de equilibrios internos y las ideas de deliberación colectiva que no siempre son obvias, pero son esenciales para el entendimiento de la forma de operar de una comunidad. (...) En este sentido se contrastan con los modelos organizativos promovidos por el Estado.»¹¹⁷

En consecuencia, la red de comunidades ha estado atenta a no establecer una jerarquía interna, un formato específico o una estructura central. En lugar de ello, constituye conexiones más cercanas a lo que De Landa¹¹⁸ define como «mallas»: redes basadas en la toma de decisiones descentralizada, la auto-organización y la heterogeneidad. Las diferentes comunidades participan en base a la lectura de sus realidades sociales y políticas y al tomar forma de red, el proceso de organización ha buscado evitar la aparición de una estructura de liderazgo jerárquico.

Estos procesos de organización también sugieren que, a pesar de la fuerte presión ejercida sobre el marco comunitario por las diferentes dimensiones del proyecto de modernización de las élites, estas po-

¹¹⁷ Entrevista colectiva con integrantes de comunidades, Ciudad de Guatemala, 07/11/2013.

¹¹⁸ DE LANDA, Manuel (2003): *op. cit.*

líticas en muchos casos no lograron disolver completamente los sentimientos de pertenencia colectiva o de reconstituir las comunidades de acuerdo a estos intereses externos. A pesar de que haya factores que contribuyen a la ruptura de las colectividades, «siempre existe la posibilidad de un retorno a la comunidad cuando otras identidades temporales pierden su función o atracción. Esto significa que las comunidades pueden, en algunos casos, volver a consolidar y superar profundas divisiones.»¹¹⁹

Los casos de Cunén y Sacapulas muestran cómo estas divisiones del pasado pueden ser superadas por comunidades o por una gran parte de los miembros de la comunidad. Sin perder la especificidad de los diferentes municipios y sus problemas, a veces esta re-convergencia se hace posible a pesar de profundas divisiones y desconfianza, resultado de la participación de sectores de la población en unidades de PAC, mientras que otros miembros de la comunidad fueron víctimas de la violencia estatal y las patrullas. Los antagonismos vinculados a las presiones sobre el territorio y los recursos naturales infunden dinámicas en el norte de Quiché que alientan a sectores de la población a volver a enmarcar su sentido de pertenencia a la comunidad.

La estrategia de las comunidades de participar en interacciones más allá de lo «local» está en parte vinculada a las características contextuales señaladas en el apartado anterior. Al hacerlo, buscan evitar permanecer aislados, ya que se enfrentan a poderosos intereses dispuestos a usar múltiples estrategias para garantizar la ejecución de sus proyectos. La lógica de red con otras comunidades ha ayudado a miembros de la comunidad a acceder a información sobre los proyectos previstos en sus territorios. También ha permitido buscar el apoyo de organizaciones de derechos humanos con un mejor acceso a las instituciones y la capacidad de elevar la resonancia de sus mensajes:

«El acompañamiento y la relación con las organizaciones es fundamental para nuestra lucha, aunque las comunidades tienen que permanecer como centro del proceso, esto nos permite dar eco a sus voces y denunciar nuestra situación ante un público nacional, así que nadie puede decir que no sabían nada de lo que pasaba.»¹²⁰ Han utilizado repetidamente estas conexiones para darle eco a sus demandas vinculadas a los marcos de derechos indígenas con visitas al congreso o buscando alianzas con otras comunidades que participan en luchas orientadas a la defensa de sus territorios.

¹¹⁹ Entrevista colectiva con integrantes de comunidades, Ciudad de Guatemala, 31/09/2013.

¹²⁰ Entrevista con integrante de comunidades, Cunén, 24/07/2012.

A su vez, los intercambios y alianzas con otras organizaciones y colectivos más allá de la región también han nutrido las estrategias y discursos de las comunidades del norte de Quiché. Una influencia percibida es el aumento de referencias y la apropiación del lenguaje jurídico basado en los derechos indígenas. Los marcos legales representan herramientas útiles para equipar las luchas en torno a la defensa del territorio con entendimientos institucionales y añadir una noción de legalidad a su articulación. Este vínculo con los marcos jurídicos para exigir el respeto a la autonomía comunal y toma de decisiones sobre cuestiones relativas a sus territorios también está reflejado en la mayoría de las declaraciones emitidas por las comunidades que forman parte de la red.¹²¹

Aunque el conocimiento del marco jurídico exacto puede ser vago entre los miembros de las comunidades, existe una conciencia generalizada de la importancia de exigir el cumplimiento de las leyes como parte de su estrategia para defender sus territorios. Referencias legales enlazan bien con los sentimientos de injusticia que predominan con respecto a la imposición externa y sin consulta de las políticas promovidas por actores públicos y privados. Además, en sus discursos, los miembros de la comunidad ponen un mayor énfasis en el hecho de que los pueblos indígenas son sujetos de derechos. Por lo tanto, sus reivindicaciones territoriales deben prevalecer sobre las leyes nacionales que regulan la explotación de los recursos naturales.¹²² Los reclamos por una autodeterminación también muestran que estas interacciones con el marco institucional y las demandas legales siguen haciéndose partiendo de lo «local» y sus problemas correspondientes.

En el curso de sus procesos organizativos, la «comunidad» ha representado un significativo para revitalizar la resistencia y poner de relieve este antagonismo en torno al tema de los recursos naturales. El análisis de las perspectivas contrastantes entre las comunidades y

¹²¹ Un ejemplo para esta vinculación de las demandas de las comunidades con marcos legales es un memorial publicado por las comunidades del norte de Quiché en 2010: «Que se respete la palabra, la opinión, la decisión y la autodeterminación de las comunidades sobre sus propias vidas, sus propios proyectos y sus propias tierras, del mismo modo que pedimos a todas las autoridades que ejerzan sus funciones de acuerdo a lo que se establece en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal, la Ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, así como los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso de la República de Guatemala, en dónde se garantiza la autodeterminación, el presente y el futuro de los pueblos originarios del país.» Memorial de Memoriales de las comunidades del norte del departamento de Quiché, 06/05/2010.

¹²² TRENTAVIZI, Barbara; CAHUEC, Eleuterio (2012): *op. cit.*

los actores que tratan de implementar los distintos proyectos, no sólo puede ser enmarcado como una disputa sobre fronteras territoriales y la distribución de los recursos. Como el siguiente apartado indica, es importante tener en cuenta los aspectos simbólicos de acción, donde se constituyen los significados y motivaciones de sus conductas. Esto proporciona una explicación subyacente para las acciones promovidas por las comunidades y basadas en la producción de significados diferenciales, así como su arraigo en entendimientos culturales y lingüísticos.

3.3. Significados locales y diferencia cultural en la defensa del territorio¹²³

«Cuando las comunidades y los pueblos pierden el control sobre sus propios recursos naturales, significa renunciar a su autonomía local y comunitaria, por lo que también pierden su democracia interna, sus espacios de supervivencia, su seguridad alimentaria y empieza la dependencia del exterior. ... Es más, interrumpe el hilo que conecta la vida actual con la de sus antepasados y su interpretación de la realidad.»¹²⁴

Como esta declaración de un líder comunitario de Cunén indica, en el curso de la lucha en torno a la defensa del territorio, un marco conceptual de significados local y culturalmente anclados entra en juego. Aunque en continua evolución, en estos procesos de producción de significados se mantiene un vínculo entre el pasado y el presente que está reflejado en una reproducción de ciertos significados, interpretaciones y modelos de organización. En consecuencia, como miembros de la comunidad afirmaron, los intentos de suprimir elementos de este marco conceptual son percibidos como un intento de disolver una raíz percibida colectivamente y reproducida en diferentes aspectos del lenguaje y el pensamiento.

En los idiomas mayas locales de la región del norte de Quiché no existe un término exactamente equivalente a la comunidad y a menudo en su lugar se usa el término en castellano. Sin embargo, en los idiomas de la región el término más común para referirse a una colectividad es el término correspondiente al «pueblo», «*tenam*» en Ixil, «*tinamit*»

¹²³ La gran parte de los elementos conceptuales presentados en esta sección son resultado de conversaciones y entrevistas con miembros de la Iniciativa Memoria Histórica a lo largo de noviembre 2013 y septiembre 2014.

¹²⁴ Entrevista con integrante de comunidades, Cunén, 25/09/2014.

en Quiché y «*tujaal*» en Sacapulteco. Los significados atribuidos a estos términos contrastan con entendimientos occidentales y se basan en una concepción holística de «un pueblo» que incluye la tierra, los seres humanos y todos los demás elementos cósmicos que comparten un espacio determinado. Por consiguiente, incluso cuando se utiliza el término comunidad, se refiere al «*c'omon*», una noción más específica o geográficamente reducida de «un pueblo» pero con el mismo entendimiento holístico.

Estas comprensiones holísticas se reproducen en diferentes rasgos lingüísticos en el norte de Quiché y representan un aspecto central de la cosmovisión maya y a la vez alimenta sus prácticas cotidianas. En Quiché «*jun k'abal*» (literalmente una casa/un hogar) constituye un término para referirse a esta unidad o constelación de origen, que se compone de diferentes elementos cósmicos. Este origen es conceptualmente expandido de manera ascendente a diferentes escalas que van desde el «*jun k'abal*» al «*k'alebal*» como la siguiente unidad que integra diferentes «*jun k'abal*». Esto lleva a la siguiente escala aglutinante representada por el «*k'omon*», el concepto más cercano a la comunidad, que a su vez es seguido por el «*tinamit*», «*tujaal*» o «*tenam*», un pueblo.

En un modelo ideal, las distintas escalas espaciales y políticas se insertan en una matriz de tiempo y espacio, que se caracteriza por una constante búsqueda de un equilibrio basado en la complementariedad de los diferentes elementos. Dentro de estos marcos, esto significa que los elementos no se distinguen en función de su calidad sino de acuerdo a la función que desempeñan o adquieren como parte de la unidad respectiva. De acuerdo con este entendimiento, cada elemento es indispensable y la defensa actual del territorio en la región del norte de Quiché representa una lucha no sólo por una determinada parte de territorio, sino se constituye también como la defensa de una parte integral de una constelación y comprensión holística de la realidad. Este marco conceptual mantiene el vínculo con el origen de un pueblo y la interrupción de su reproducción podría poner en peligro un futuro colectivo o el «devenir» de un pueblo.¹²⁵

Como parte de esa producción diferencial de significados, las comunidades locales presentaron una comprensión del territorio y el espacio ligada a los cuatro puntos cardinales. Las propiedades dinámicas del

¹²⁵ «Devenir» aquí lleva el significado de la definición brindada por Deleuze y Guattari que rechazan la idea de identidades fijas y estáticas. En cambio, enfatizan el carácter relacional de los elementos que resultan de un proceso evolutivo derivado de diversos factores de influencia. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix (1987): *op. cit.*

espacio se reflejan en el hecho de que las realidades físicas y sociales son percibidas como vectores y no como puntos fijos. Estas coordenadas direccionales se derivan del paso del sol, mientras tiempo y espacio se mueven a lo largo de estos ejes. En consecuencia, el este adquiere una connotación direccional y temporal, lo que constituye un momento «donde» además de «cuando» el sol «sale». El oeste por otro lado representa el momento «donde» y «cuando» el sol «se despide».¹²⁶ Esto quiere decir que no representan dos puntos congelados en el espacio abstracto, sino que constituyen dos momentos en el movimiento del sol a través del espacio físico. Como indica Watanabe: «El espacio sólo se define en referencia al tiempo, el movimiento diurno y anual del sol, y las direcciones espaciales horizontales mismas pueden ser conceptualizadas con mayor precisión como vectores entre o a lo largo del horizonte oriental y occidental en vez de verlos como puntos en el espacio abstracto.»¹²⁷

Entre las comunidades del norte de Quiché, espacio y tiempo mantienen estas propiedades dinámicas y los cuatro vectores combinan con una visión cíclica del tiempo para constituir una matriz en la que se tejen las realidades sociales y políticas cotidianas de las comunidades. Los diferentes momentos y elementos se ubican dentro de esta matriz y adquieren significados para representar un marco simbólico a su vez, cargado de significados que son atribuidos a momentos, lugares y objetos físicos. Aspectos aparentemente triviales como rocas, montañas o árboles pueden adquirir significados clave y asociaciones de acuerdo a sus funciones en esta telaraña colectivamente constituida.¹²⁸

Este marco sigue desarrollándose y adaptándose a la evolución que es parte integral de las culturas e identidades. La introducción de palabras en castellano a los idiomas locales representa un claro ejemplo de este constante proceso de actualización. Por otro lado, se mantiene un vínculo con significados tradicionales y la revitalización de estos significados actúa como una garantía para estimular el sentido de pertenencia colectiva. A pesar de su evolución, el idioma sigue teniendo un efecto estabilizador para estos entendimientos colectivos y promueve una

¹²⁶ WATANABE, John M. (1983): «In the World of the Sun: A Cognitive Model of Mayan Cosmology», *Man, New Series*, 18(4), pp. 710-728.

¹²⁷ WATANABE, John M. (1983): *op. cit.*, p. 718.

¹²⁸ Esta conceptualización lleva elementos parecidos al entendimiento sugerido por Tischler Visquerra en su ensayo «La memoria ve hacia adelante. A propósito de Walter Benjamin y las nuevas rebeldías sociales.» TISCHLER VISQUERRA, Sergio (2010): Disponible en: http://www.constelaciones-rtc.net/02/02_04.pdf (Consultado el 23 de febrero 2013).

codificación compartida de las realidades sociales a pesar de la fuerte presión sobre los procesos colectivos de producción de significados. Además, existe la conciencia de que el territorio es clave para la reproducción individual y colectiva de estos significados y alimenta la revitalización de los marcos comunitarios colectivos:

«El territorio es todo el ambiente que nos rodea, las montañas, el aire, el agua y las cumbres. La tierra es nuestra madre, que nos provee de alimentos para sobrevivir en nuestra vida cotidiana. Ella también es la madre de los animales y los árboles. Por eso, unirse a nuestra comunidad y luchar como una comunidad para defender nuestro territorio es la única opción que nos queda.»¹²⁹

Como Trentavizi y Cahuec indican, los significados atribuidos a la tierra difieren de aquellos relacionados con una fuente de enriquecimiento o una oportunidad para explotar:

«El espacio no es objetivado como recurso, el territorio es el espacio vital. La identificación entre la tierra y la vida es una relación personal y colectiva que atañe al individuo, pero también a la colectividad en su totalidad. La amenaza a los territorios representada por las licencias extractivas y las concesiones es vista y sentida como una amenaza directa a la vida de las comunidades (...).»¹³⁰

Por eso en el transcurso de la participación en torno a la defensa del territorio, el apego a la tierra y al territorio acentúa significados culturales y políticos anclados en la cosmovisión maya. Estos procesos pueden ser vistos como una reafirmación de la confianza en el conocimiento producido por los pueblos indígenas y sus antepasados, lo que contribuye a mantener la conexión y la interdependencia entre la tierra y la identidad colectiva de las comunidades. Es percibido como si hubiera sido transmitido de generación en generación y representa el marco más confiable para garantizar su supervivencia:

«También es un hecho político e histórico que en Guatemala la administración y el control de los recursos naturales de bienes ha estado en manos de los pueblos y comunidades del país. Es gracias a ellos y sus conocimientos que los pueblos han sido capaces de sobrevivir hasta hoy día.»¹³¹

A medida que las políticas en torno al modelo de modernización guiado por élites apuntan a las comunidades locales o el «*c'omon*» como unidad integral, también son vistas como un intento de terminar con una producción de conocimientos y significados que representan el

¹²⁹ Observación de reunión de comunidades, Nebaj, 27/12/2012.

¹³⁰ TRENTAVIZI, Barbara; CAHUEC, Eleuterio (2012): *op. cit.*, p. 64.

¹³¹ Entrevista con integrantes de comunidades, Sacapulas, 26/09/2014.

elemento central de su «diferencia» apoyada en una cambiante dimensión colectiva. Como un miembro del IMH indica:

«El centro de la colectividad es el intercambio de formas de conocimiento, se mezclan, se cambian y se corrigen. A partir de esta experiencia, palabras [o significados] emergen, pero constituyen un tipo de conocimiento que el Estado no valora, le parece irracional al Estado. Sin embargo, es este conocimiento el que ha garantizado la supervivencia de los pueblos y por tanto prefieren confiar en él.»¹³²

Estas referencias reflejan a nivel de los conocimientos, la «brecha epistemológica»¹³³ que se ha destacado entre las diferentes formas de producción de conocimiento, cuando miembros de la comunidad local se resisten a las jerarquías de los saberes que son una parte muy importante de la imposición vertical de modelos de desarrollo y políticas.

Además, significa que la defensa del territorio liderada por las comunidades locales también se dirige a un nivel simbólico cercano a lo que Deleuze define como procesos de «re-territorialización», ya que cuestionan las dinámicas que interrumpen su producción de significados o constituyen una amenaza para los aspectos cruciales de su marco cognitivo holístico. De esta manera, su lucha también se convierte en una lucha por la defensa de una conceptualización relacional de la realidad que, por un lado, vincula el «individuo» al «colectivo», y por otro, vincula a los «humanos» a la «naturaleza». A su vez, estos entendimientos actúan como una referencia colectiva para indicar una raíz común o el «origen» de un pueblo. La percepción colectiva de la amenaza a este entendimiento simbólico representada por los proyectos de modernización promovidos por las élites, se ha sumado a esta revitalización del marco comunitario, llevándolos a tomar espacios públicos con el fin de articular su disidencia. Si bien el carácter cada vez más público de sus articulaciones ha contribuido a hacer su «diferencia» a nivel de los significados más evidente, también ha dado muestras de cómo estos significados culturalmente arraigados contribuyen a una forma diferente de organizar la política, o sea, han conllevado una politización más explícita de esta «diferencia».

¹³² Entrevista con integrantes de comunidades, Sacapulas, 26/09/2014.

¹³³ Esta idea está basada en el trabajo de Santos alrededor de la idea de que el pensamiento occidental ha sido atribuido el criterio de la distinción universal entre lo correcto e incorrecto a las ciencias modernas, concediéndole el monopolio sobre las disputas entre las verdades científicas y no-científicas. Esto ocurre al costo de marginar otras formas de conocimiento como las que se basan en las epistemologías del Sur. SANTOS, Boaventura de Sousa (2007): *op. cit.*

3.4. «Diferencia» en la práctica política: las consultas a la comunidad en el norte de Quiché

Como se mencionó en la sección anterior, la amenaza a los territorios locales ha contribuido a una revitalización del marco conceptual y ha acentuado significados que fomentan la participación de las comunidades en la defensa del territorio. En esta sección se examinará de qué manera esta «diferencia» a nivel de significados está reflejada en los patrones políticos de los procesos organizativos entre las comunidades del norte de Quiché.

Estos procesos han llevado a la organización de consultas comunitarias en Cunén y Sacapulas.¹³⁴ Dos aspectos merecen ser resaltados en estas consultas: Primero, el aspecto interno de discutir y consolidar una posición que garantiza el apoyo de los diferentes miembros de la comunidad para una articulación colectiva alrededor de la defensa del territorio. En un caso ideal, un proceso incluyente de toma de decisiones se basa en «buena información», esto es, información veraz y fidedigna e integra a todas las escalas mencionadas, desde el hogar o la familia (*jun k'abal*) pasando por la comunidad (*k'omon*) hasta el nivel de pueblo (*tinamit/tujaal*). Estos entendimientos integradores son también vistos como centrales para garantizar la sostenibilidad de los procesos organizativos y asegurar que nazcan desde las necesidades y problemas específicos de la comunidad. Segundo, el aspecto externo, dado que las consultas también representan un acto simbólico para emitir una declaración política hacia la sociedad y las instituciones del Estado. Con esto quieren destacar su capacidad de crear esferas públicas basadas en las realidades de las comunidades, su participación y sus marcos conceptuales en un intento de reapropiar la toma de decisiones acerca de cuestiones que tienen un impacto trascendental sobre sus territorios.

Como un integrante de las comunidades afirmó:

«Las consultas comunitarias surgen a partir de las necesidades y problemas de las comunidades, ya que tratamos de determinar cómo vamos a caminar en la defensa de nuestras comunidades, así como nuestros territorios y recursos naturales que forman parte de ellos. Esto

¹³⁴ Las consultas sobre la explotación de recursos naturales se consolidaron como una práctica de resistencia a partir de la primera consulta en las municipalidades de Sipakapa y Río Hondo en 2005. Aunque históricamente la consulta comunitaria ha sido parte de las comunidades indígenas, el formato de las consultas municipales y comunales ha sido revitalizado como parte de las recientes estrategias organizativas de comunidades en resistencia a la explotación de recursos naturales.

no es una cuestión de partidos políticos, no es una cuestión de lucha para el poder, se trata de proteger a nuestras comunidades y haciendo énfasis en su propio derecho legítimo a decidir cómo vamos a caminar como pueblos.»¹³⁵

El marco conceptual presentado en las secciones anteriores continúa alimentando estas formas de diseñar la toma de decisiones y la deliberación política:

«Las asambleas comunitarias celebradas por la gente del norte de Quiché se organizan porque las necesidades y entendimientos de las comunidades están bajo amenaza. Se basan en nuestra forma de entender el mundo y siempre han formado parte de la toma de decisiones de los pueblos a pesar de que en muchos casos se han debilitado. Como miembros de la comunidad es nuestro papel de garantizar que representen procesos inclusivos para consensuar y encontrar respuestas y soluciones comunes a nuestros problemas.»¹³⁶

En Cunén, la propuesta de celebrar una Consulta Comunitaria de Buena Fe surgió durante una serie de asambleas comunitarias que representaban el seguimiento de la movilización de las comunidades en enero de 2009 (mencionado en el apartado 3.2).¹³⁷ En el curso de esta asamblea de la comunidad, las autoridades locales y funcionarios estatales fueron llamados a responder a las demandas de la población con más de mil representantes de la comunidad participando en las reuniones. Al mismo tiempo se buscaron soluciones inmediatas a ciertas exigencias, como la retirada del Ejército del territorio de Cunén. La presencia del Ejército se debía a un llamado por parte de las autoridades municipales para contrarrestar la creciente inquietud entre la población que precedió a la movilización de enero de 2009.

A raíz de las protestas, se formó el Consejo de las Comunidades de Cunén y 16 líderes comunitarios fueron nombrados con el llamado a defender el territorio, la tierra y los recursos naturales de Cunén en línea con las ideas de representación descritas en la sección anterior. De este modo, las comunidades crearon una entidad paralela a las instituciones municipales formales con la tarea de darle seguimiento a las po-

¹³⁵ Reunión de delegados comunitarios, Nebaj, 06/07/2012.

¹³⁶ Reunión de delegados comunitarios, Nebaj, 23/07/2012.

¹³⁷ Las Consultas Comunitarias de Buena Fe son uno de los dos posibles tipos de consulta a nivel municipal celebrados en diferentes partes del país, la Consulta de Vecinos representando la otra variante. Las principales diferencias están en los marcos legales en los cuales se basan. Mientras la Consulta Comunitaria de Buena Fe se basa en convenios internacionales de legislación indígena como la convención 169 de la OIT, la Consulta de Vecinos se basa en legislación nacional, entre ellos, la legislación municipal.

líticas municipales. Por otro lado, el consejo también estaba equipado con el mandato de darle voz a las decisiones de las comunidades, especialmente con respecto a la oposición a la explotación de los recursos naturales.

La siguiente asamblea de todas las comunidades del municipio en julio de 2009 ya estaba orientada hacia la preparación de una Consulta Comunitaria de Buena Fe. Se invitó a diferentes organizaciones y expertos a explicar aspectos jurídicos y políticos de la consulta comunitaria, así como a discutir el posible impacto ambiental de los proyectos dirigidos a la explotación de los recursos naturales. En el curso de estas asambleas las comunidades también consolidaron una red de organizaciones y actores especializados en derechos humanos, indígenas y ambientales para proporcionar acompañamiento, apoyo logístico y realizar observación en el curso de este proceso promovido por las comunidades.

El patrón de Cunén fue —hasta cierto punto— replicado en el municipio vecino de Sacapulas, donde desde principios de 2009 la información sobre los diferentes planes para la exploración y explotación de recursos naturales a través de proyectos mineros e hidroeléctricos estaba empezando a llegar a las comunidades y sectores del municipio. Un comité provisional fue creado para promover una consulta comunitaria y el 7 de febrero de 2011, las comunidades establecieron la Coordinación de Comunidades de Sacapulas en Resistencia y en Defensa de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Este comité fue integrado por delegados de las comunidades con un mandato similar al Consejo de las Comunidades de Cunén. Al igual que en Cunén, en Sacapulas la Coordinación jugó un papel clave en la difusión y facilitación de información entre las comunidades en el período previo a la primera asamblea general de las comunidades celebrada el 9 de abril de 2011. En el curso de esta asamblea fue aprobada la organización de la Consulta Comunitaria de Buena Fe para el 20 de mayo de 2011 por más de 2000 delegados de las diferentes micro-regiones y sectores de Sacapulas.

Estas asambleas generales reunieron a los delegados de las comunidades de todo el municipio, así como a delegaciones de las regiones vecinas. Tuvieron un papel central en fortalecer el rol de la Coordinadora de Comunidades de Sacapulas así como del Consejo de las Comunidades de Cunén con respecto a las autoridades municipales, que continuamente cuestionaban su rol y representatividad. En este contexto, la capacidad de los delegados de movilizar a las comunidades en torno a la defensa del territorio representaba una demostración de fuerza. Las asambleas muchas veces se celebraron con la presencia

de miles de representantes comunitarios y residentes, aumentando la presión sobre las autoridades locales para responder a las demandas de las comunidades o, por lo menos, a no interponerse a sus procesos organizativos.¹³⁸

La Consulta Comunitaria de Buena Fe de Cunén se celebró el 27 de octubre de 2009 con 18,924 personas de una población total de 32,903 participando en la votación, lo que representa una participación del 58% de la población. Un total de 11,116 adultos y 7,808 menores rechazaron la presencia de empresas y/o personas nacionales o extranjeras que se apropian y explotan recursos naturales en el territorio de Cunén.¹³⁹ Por otro lado, en Sacapulas, la consulta se llevó a cabo el 20 de mayo de 2011 con 103 comunidades y un total de 28,209 personas participando en la consulta para enfatizar su rechazo a la minería y las actividades hidroeléctricas propuestas por el gobierno central.

Como los números indican, el grado de participación en las asambleas, procesos organizativos y consultas alrededor de la defensa del territorio supera fácilmente la participación en las contiendas electorales formales. Esto sugiere una forma diferente de apropiación de estos procesos, ya que se enmarcan en torno a las necesidades y demandas que surgen de los miembros de la comunidad. También indica las potencialidades intrínsecas a estas esferas públicas consolidándose en este ámbito local, especialmente cuando logran surgir e insertarse en la producción de significados y espacios de las comunidades.

¹³⁸ Como resultado en el caso de Cunén, el alcalde y el consejo municipal en 2009 ajustaron su postura. No buscaban liderar ni organizar el proceso, pero el cambio si era hacia su validación y la relación con el Consejo de las Comunidades mejoró, aunque solo temporalmente ya que en el siguiente periodo legislativo la relación con el nuevo alcalde electo volvió a ser problemática. En Sacapulas, las comunidades habían esperado —como parte de su misma estrategia— para publicar sus estrategias con respecto a la defensa del territorio y recursos naturales hasta que el nuevo alcalde electo asumiera su posición en 2011, aunque la relación con el consejo municipal continuó siendo tensa. Sin embargo, en este caso también la reiterada movilización de las comunidades generó unas aperturas y la municipalidad concedió la publicación de dos acuerdos municipales como resultado de esta presión por parte de las comunidades, el primero convocando a la consulta comunitaria y el segundo para validar los resultados de la misma. En el caso de Sacapulas, la Iglesia Católica también constituyó un aliado importante, actuando como una plataforma para permitir el fortalecimiento de la coordinación y el intercambio de información entre líderes comunitarios.

¹³⁹ En diciembre de 2015, habían sido celebradas un total de 74 consultas municipales a nivel nacional. En el departamento de Quiché hasta la fecha se han organizado consultas municipales en 5 municipios: Ixcán, Cunén, Santa Cruz del Quiché, Sacapulas y Chinique.

Tras estas consultas, se ha celebrado una serie de nuevas asambleas municipales en Cunén y Sacapulas para volver a insistir en la «voz de las comunidades» y la decisión adoptada. En la región Ixil, dados los patrones de organización más débiles —debido a las razones contextuales descritas en el apartado anterior— ninguna consulta comunitaria fue organizada hasta la fecha. Sin embargo, se han organizado una serie de consultas a nivel comunitario. Además, en abril de 2013 se celebró una asamblea municipal, en presencia de casi todas las comunidades para volver a insistir en su posición en torno a la defensa del territorio y los diferentes aspectos vinculados a la explotación de los recursos naturales.

Las diversas asambleas municipales del norte de Quiché han tenido un impacto en la consolidación de los procesos organizativos y el reconocimiento mutuo entre las comunidades. De esta manera han establecido una plataforma para los participantes de las comunidades que permite mantener un intercambio de experiencias e información, formular sus articulaciones de manera colectiva y consolidar espacios de solidaridad y apoyo mutuo. Es importante, sin embargo, no tener en cuenta solamente los acontecimientos más públicos en los centros municipales —que a menudo se llevan a cabo con miles de participantes—. Todas las asambleas municipales y consultas fueron precedidas por decenas de reuniones y asambleas preparatorias dentro de las comunidades, las cuales a la vez constituyen la arena deliberativa principal. Es a este nivel donde se promueve principalmente los intentos de reconceptualización de la representación y la creación de procesos más inclusivos de toma de decisiones.

Como parte de la lucha por la defensa del territorio, entre las comunidades del norte de Quiché se ha promovido el modelo de un «delegado» comunitario electo y legitimado por la asamblea comunitaria. En un intento de contrarrestar las prácticas de cooptación, —que suelen marcar los procesos de nombramiento institucional— el «delegado» se somete a las decisiones colectivas de la comunidad. Este mecanismo es visto como una forma de revitalizar la comprensión de los representantes comunitarios «no como una autoridad, sino como prestación de un servicio a la comunidad.»¹⁴⁰

Al delegado de la comunidad se le otorga testimonialmente la confianza del conjunto de la comunidad para transmitir su «palabra» con respecto a un problema determinado sin contar con poder de decisión. Los criterios más importantes para el nombramiento de los representan-

¹⁴⁰ Entrevista con integrante de comunidades, Cunén, 25/09/2014.

tes comunitarios son los méritos y servicios en nombre de la comunidad, así como el grado de representatividad a ojos de los integrantes de la comunidad.

Los delegados de la comunidad que forman parte de los órganos de coordinación mencionados en Cunén y Sacapulas jugaron un papel crucial en el proceso preparatorio, así como en el seguimiento al traer información a las comunidades para asegurarse de que éstas constituyan parte de las decisiones a nivel comunitario. Al mismo tiempo, la «palabra» de la comunidad (es decir, las decisiones y las demandas) son luego llevadas a las asambleas municipales generales a través del «delegado» de la respectiva comunidad. Un proceso similar se sigue después de las asambleas generales y la «palabra» de la asamblea es llevada de vuelta a las comunidades por el «delegado» de la comunidad. Esta dinámica circular destacada por Trentavizi y Cahuec¹⁴¹ en el caso de Cunén, ha sido promovida entre todas las comunidades de la red promoviendo la defensa del territorio en la región del norte de Quiché.

Como se mencionó, los delegados no están equipados con poder de decisión cuando participan en reuniones fuera del espacio de la comunidad dado que la información tiene que ser presentada, discutida y validada por la comunidad. Es en estos espacios comunitarios donde se toman las decisiones, lo que significa que pueden representar procesos laboriosos y lentos, ya que las diferentes etapas tienen que ser respetadas para poder tomar una decisión. A menudo, este largo proceso de toma de decisiones puede causar fricciones con espacios institucionales formales que exigen resultados y decisiones inmediatas. Sin embargo, dentro de la red ha habido una insistencia en que cualquier decisión con posibles implicaciones para la comunidad tiene que ser tomada por los integrantes de la comunidad con el fin de garantizar un consenso colectivo, compartido y sostenido dentro de ella.

Si bien estas medidas orientadas a la inserción de dinámicas participativas en los procesos de toma de decisiones representan claramente pasos hacia la organización de procesos políticos cada vez más incluyentes, quedan muchos retos. En este aspecto, el equilibrio de género constituye un desafío crucial. La gran mayoría de los delegados elegidos por las comunidades continúan siendo varones, aunque una gran parte de los participantes en las respectivas asambleas comunitarias son mujeres. El desarrollo de una comprensión más profunda y llegar al núcleo

¹⁴¹ TRENTAVIZI, Barbara; CAHUEC, Eleuterio (2012): *op. cit.*

de las complejidades de las relaciones de género, especialmente al interno de las comunidades, evidentemente supera las posibilidades de esta investigación. Es evidente que los patrones patriarcales, un aspecto tan dominante en la sociedad guatemalteca, también influyen de manera determinante en las interacciones sociales dentro de las comunidades del norte de Quiché.

Con base en las percepciones adquiridas durante las visitas y conversaciones con las comunidades, pude identificar dos dinámicas. Por un lado, la interiorización o reproducción de ciertos patrones por parte de las mujeres de la comunidad cuando mantienen que, dentro de las comunidades, las funciones de representación y participación en las reuniones deben ser asumidas por los hombres. Por otro lado, la falta de incentivos y apoyo brindado por parte de los hombres de la comunidad para romper con estos patrones establecidos que consolidan un predominio masculino. Aunque los miembros de la comunidad hicieron hincapié en la asamblea comunitaria (donde la participación tiende a ser más inclusiva) como el espacio principal para la toma de decisiones, sigue habiendo limitaciones en cuanto a un enfoque que promueva un mayor grado de participación femenina. Estos aspectos subrayan la importancia de no idealizar el concepto de la «comunidad» ya que al igual que cualquier otro conjunto social, está marcada por tensiones dinámicas y puede esconder o estabilizar contradicciones internas y jerarquías.

Los distintos momentos de estos procesos de toma de decisiones también indican cómo la «diferencia» derivada de su producción de significados es también desarrollada a nivel de las prácticas políticas. Haciendo hincapié en las prácticas participativas e inclusivas, la «diferencia» se traduce a las prácticas y equipa su postura antagónica con una noción explícitamente política. Dentro de las comunidades de la red hay un fuerte sentimiento con respecto a la irreversibilidad de un posicionamiento establecido y una vez que la decisión haya sido consultada, discutida y tomada debe ser respetada y aplicada por las respectivas autoridades.

Esta postura también se mantiene en la interrelación con las instituciones del Estado y las élites cuando las comunidades han frecuentado espacios cercanos a los centros políticos para darle voz a su posición. En el curso del proceso que rodea a las consultas comunitarias, los delegados de las comunidades del norte de Quiché han visitado en varias ocasiones el Congreso para presentar las demandas de las comunidades, así como los resultados de las consultas, poniendo énfasis en la decisión que se ha tomado: «(...) la palabra de las comunidades ya está dicha, la contestación del gobierno y los ministros es que son

ellos los que deciden, nosotros le dijimos que no, que es el pueblo, las comunidades.»¹⁴²

En este sentido, el compromiso con los marcos legales, así como un enlace con las instituciones del Estado constituye una parte inevitable de la estrategia de las comunidades en la defensa de sus territorios. Como un analista afirmó:

«Ellos no encontrarán ninguna respuesta allí [con las instituciones], encuentran su respuesta en las comunidades. El Estado, por su parte, seguirá intentando e incluso usa la fuerza para introducir las comunidades en una lógica diferente. Lleva un cierto reconocimiento cuando ellos llegan al Congreso, pero la idea es buscar la información necesaria con el fin de ser capaz de tomar decisiones y reaccionar sobre la base de la misma. Además, representa un acercamiento estratégico para que no los puedan acabar por la fuerza.»¹⁴³

Por lo tanto, las relaciones con el marco institucional pueden ser vistas como parte de una estrategia para evitar caer en la contradicción con la cual la agencia antagónica se enfrenta muchas veces. En esta línea, Melucci¹⁴⁴ así como Chesters y Welsh¹⁴⁵ han señalado la importancia de algún tipo de relacionamiento con los espacios institucionales y la representación política para evitar un «escapismo expresivo» o «constelaciones de suma cero» que elevan el riesgo de violencia en el conflicto.¹⁴⁶ Las comunidades estudiadas reconocen que se mueven sobre un camino estrecho dadas las características de un Estado cooptado, en el cual las élites utilizarán mecanismos informales, además de apelar a funcionarios del Estado, marcos legales y fuerzas de seguridad pública para contrarrestar cualquier oposición. Como se mencionó, los patrones de criminalización de comunidades y activistas constituyen un aspecto fundamental de estas dinámicas.

Las comunidades se mueven entre diferentes niveles y discursos en sus articulaciones buscando forjar espacios que puedan garantizar el futuro y la «diferencia» de sus comunidades. El relacionamiento con los ámbitos nacionales como el Congreso y demás instituciones nacionales está muy lejos del espacio de confianza de la comunidad. Sin embargo, esta interlocución con los centros políticos y de toma de decisiones se promueve teniendo lo «local» en mente y lanzando un mensaje ha-

¹⁴² Iniciativa para la Reconstrucción y Recuperación de la Memoria Histórica (2013): *El camino de las palabras de los pueblos*. Guatemala: Magna Terra Editores, p. 431.

¹⁴³ Entrevista con antropólogo, Ciudad de Guatemala, 03/10/2014.

¹⁴⁴ MELUCCI, Arturo (1996): *op. cit.*

¹⁴⁵ CHESTERS, Graeme y WELSH, Ian (2006): *op. cit.*

¹⁴⁶ CHESTERS, Graeme y WELSH, Ian (2006): *op. cit.*, p. 118.

cia la opinión pública nacional que reafirme su desacuerdo con los patrones de reordenamiento neoliberal dirigido hacia sus territorios. En el proceso también buscan profundizar sus espacios de coordinación con las comunidades de otras regiones que enfrentan situaciones parecidas, así como con las organizaciones urbanas con el conocimiento legal para traducir sus demandas al «idioma» del Estado. En consecuencia, la energía organizacional principal está orientada a crear espacios locales y apropiarse de los procesos de toma de decisiones. Aunque también se plantean demandas ante el Estado sobre la base de los respectivos marcos legales, es sobre todo para buscar el reconocimiento de su derecho a la libre determinación y a la existencia de sus prácticas autónomas.

Por eso, en el curso de sus procesos organizativos de disputar el proyecto de modernización promovido por las élites, las comunidades también articulan una condición crucial para el marco democrático en Guatemala. Es en estos ámbitos locales donde se pueden establecer espacios públicos significativos ya que permiten la integración de estos significados y prácticas diferenciales a los procesos políticos. En este sentido, las comunidades señalan que la voz, los espacios y los derechos de las comunidades, así como su «diferencia» cambiante e ignorada hasta la fecha, constituyen un punto de partida para nuevas formas de imaginar los procesos democráticos.

3.5. Conclusión

Este capítulo se ha centrado en las expresiones de acción colectiva surgidas en las comunidades del norte de Quiché en la última década para disputar el reordenamiento de espacios y territorios promovido por las élites. Los principales aspectos del proyecto de modernización en la zona son las concesiones para la minería y la generación de energía hidroeléctrica que van de la mano de los programas para la expansión de las redes eléctricas. Debido a su escala, estos proyectos impactan en un nivel colectivo y de la comunidad, mientras que otras características, como los programas que tratan de inculcar hábitos empresariales entre la población local, se enfocan en el nivel individual. Especialmente en los casos dirigidos hacia el nivel colectivo de la comunidad, la agencia antagonica ha surgido y se ha proyectado hacia los espacios públicos.

En el curso de la última década, comunidades de los cinco municipios analizados en el norte de Quiché han pasado a consolidar una red flexible con diferentes espacios de coordinación en su lucha en defensa del territorio. Estas actividades implican reuniones para discutir y analizar la información, la coordinación para la organización de eventos y la

acción pública, el acompañamiento mutuo y la solidaridad con las demandas a las autoridades locales, así como la elaboración conjunta de demandas dirigidas hacia las instituciones nacionales. En el curso de su agencia, los miembros de la comunidad se mueven en un entorno complejo, ya que se cruzan y comparten espacios con dinámicas como la influencia divisoria de los partidos políticos, así como las redes del pasado contra-insurgente que en muchos casos han promovido y se han conectado con los intereses alrededor de los recursos naturales.

Con el fin de conceptualizar la resistencia de las comunidades locales, subrayé la importancia de tomar en cuenta sus procesos de significación culturalmente arraigados y reproducidos en su lenguaje y pensamiento. Esta «diferencia» a nivel de los significados se ha acentuado en el curso de los procesos de organización y enmarcado alrededor de la comunidad, la cual ha sido revitalizada como significante colectivo en el desarrollo de la defensa del territorio y las diversas estrategias de resistencia. La revitalización de significados alrededor de la «comunidad» y el «territorio» también están reflejados en las formas de las prácticas políticas locales evidenciadas en la organización de las consultas municipales y comunitarias que rechazaron la explotación de recursos naturales en la región. Sobre la base de un entendimiento de «delegados» en vez de «representantes», el flujo «circular» de la información, y mediante la promoción de la asamblea de la comunidad como el centro de la toma de decisiones, las comunidades han trasladado su «diferencia» a nivel de significados hacia los modos de interacción política que contrastan con los patrones predominantes en los espacios institucionales. Si bien siguen siendo procesos frágiles, desde estos espacios locales, las comunidades cuestionan los patrones en la toma de decisiones de las élites, ya que señalan que las voces, los espacios y los derechos de las comunidades, así como su «diferencia», deben constituir un punto de partida para la construcción de procesos democráticos.

Para reflejar el carácter particular de cada uno de los procesos organizacionales que evolucionan alrededor de la defensa del territorio, el siguiente capítulo se enfocará en el análisis de la expresión de la acción colectiva surgida entre las comunidades principalmente no-indígenas de los municipios del departamento de Guatemala, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. El capítulo destacará cómo se desarrolla una postura de «diferencia» a nivel de la producción de significados y prácticas políticas cuando no necesariamente están enraizados en una particular tradición cultural. En lugar de ello indica cómo esta postura antagónica puede desarrollarse en un periodo relativamente corto y basándose en la complejidad demográfica encontrada en contextos locales.

4. Resistencia Pacífica La Puya: la defensa del territorio como afirmación de la vida

En el capítulo anterior se estudió una articulación de acción colectiva en el norte de Quiché que reflejó la importancia de la producción de significados diferenciados por parte de las comunidades indígenas en la determinación de las formas de defensa del territorio. Se identificó una «politización» de la «diferencia», la cual se vinculó al énfasis que las comunidades pusieron en la creación de espacios deliberativos y procesos participativos de toma de decisión en el curso de la articulación.

Este capítulo ofrece un análisis detallado de una segunda expresión de agencia colectiva para la defensa del territorio surgida en torno al proyecto minero Progreso VII Derivada, El Tambor, localizado entre dos municipios del departamento de Guatemala, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Aquí, se examina el proceso organizativo de integrantes de comunidades en una región donde el peso de la diferencia étnica es más limitado, lo que significa que una gran parte de los pobladores locales que participan en la oposición al proyecto minero es no-indígena. La composición poblacional de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc está marcada por una mayoría ladina, a pesar de una presencia sustancial de población Maya Kaqchikel, especialmente alrededor de la comunidad de Nacahuil. Los pobladores convergieron en un ensamblaje de acción colectiva que se identifica como la Resistencia Pacífica de la Puya (RPLP) y establecieron un campamento de protesta en la entrada al proyecto minero. Este campamento se consolidó como un espacio importante de referencia para su lucha y ha sido mantenido por los integrantes comuni-

tarios desde marzo de 2012 a pesar de varios intentos de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad pública.

En el curso de su articulación, la RPLP se inspira en una amplia gama de conocimientos y significados derivados de la experiencia de la vida cotidiana rural que refleja la constelación compleja de la población local. Al mismo tiempo y parecido al caso anterior, añadieron una noción de «diferencia política» a sus demandas centrales. Esta noción se refleja en su aspiración de enfrentar decisiones verticalmente impuestas con la integración de una arena deliberativa y prácticas políticas horizontales en su estructura organizativa, las cuales contrastan con las pautas predominantes en los espacios institucionales.

Con base en el caso de la RPLP, este capítulo sostiene que la afirmación de la «diferencia» puede ser vista como resultado de un proceso desarrollado de manera paralela a la consolidación de un espacio físico y simbólico, en el cual los integrantes de las comunidades pueden emprender sus propios procesos colectivos de significación.

4.1. **Más allá de la capital: los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo**

Los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo —así como las respectivas comunidades que son parte de su unidad administrativa— están localizados a una distancia de entre 15 y 30 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. La ubicación de ambos municipios no permite que formen parte integral de la capital, pero no evita que sus poblaciones —dedicadas principalmente a la agricultura en los terrenos de cultivo de la zona— se vean afectadas por las dinámicas de la ciudad.¹⁴⁷ En la historia reciente del conflicto armado, el área no tenía niveles de violencia comparables con otras zonas del país. La proximidad a la capital mantuvo a la región bajo un firme control por parte del Ejército, mientras una red de patrulleros de autodefensa civil (PAC) operaba en el área, ejerciendo otra dimensión de vigilancia en los espacios urbanos y en las comunidades aledañas. Especialmente en el caso San Pedro Ayampuc, en el curso del periodo pos-guerra esa red de PAC ha sido reactivada en varias ocasiones cuando diferentes partidos políticos prometieron cumplir con las demandas de resarcimiento para los servicios de los patrulleros a cambio de su apoyo electoral.

¹⁴⁷ Por ejemplo, hay un alto número de pobladores que viaja a la capital diaria o semanalmente, que lleva a estos municipios a ser llamados los «dormitorios de la capital».

En las décadas posteriores a los Acuerdos de Paz, las interacciones políticas oficiales fueron dominadas por los centros urbanos de los municipios donde los grandes partidos nacionales compitieron por el control sobre los consejos municipales en las competencias electorales. Como en muchas otras partes del país, esto ha generado que figuras locales permanezcan en el poder por largos periodos, mientras extensas redes se han consolidado alrededor de los consejos municipales con el objetivo de acceder a rentas. Los mandatos largos de los alcaldes en los respectivos municipios se combinan con su frecuente cambio de partidos políticos para asegurar su permanencia en el poder, en línea con los patrones predominantes en la política nacional.¹⁴⁸

Una de las redes —y actualmente la más señalada— es la integrada por actores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc alrededor de Alfonso Medrano, alcalde de la municipalidad vecina de Chinautla desde 1986, conocida también como la «red Medrano». Con un entramado de más de 24 ONG y compañías, Medrano es un actor con mucha influencia sobre los gobiernos municipales del área, negociando contratos y fondos públicos para trabajos de infraestructura.¹⁴⁹ Como un integrante de una comunidad local comentó: «en el curso de las últimas décadas los alcaldes locales han constituido poco más que los títeres de Medrano»¹⁵⁰. En una nota de prensa, Zamora menciona un comentario cínico hecho por Medrano, el cual resume las dinámicas clientelistas centrales a las operaciones de estas redes: «Ni modo, cuando uno llega al poder uno no va dar trabajo y proyectos a sus enemigos...Tienen que ser para los familiares, amigos, empleados y amigos del partido.»¹⁵¹ Esta red ha operado casi sin impedimentos por parte de las instituciones del Estado.

Cuando investigaciones criminales son abiertas estas suelen responder a alteraciones en equilibrios políticos, y las negociaciones informales determinan su alcance. A pesar de tener varias causas abiertas en su contra y denuncias por corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencia, hasta la fe-

¹⁴⁸ En el caso de San Pedro Ayampuc, por ejemplo, Eduardo Ávalos fue alcalde durante un periodo de 22 años hasta que las elecciones del 2011 llevaron a Roberto Amparo Aquino Catalán al poder. El alcalde de San José del Golfo, Elser Fidelino Palencia Mayen en 2015 estaba cumpliendo su tercer periodo en la alcaldía (2003-2015).

¹⁴⁹ Más información en GAMAZO, Carolina (2012): «La clave de Chinautla está en Willy Wonka», *Plaza Pública*. Disponible en: <http://www.plazapublica.com.gt/content/la-clave-de-chinautla-esta-en-willy-wonka> (Consultado el 21 de febrero 2014).

¹⁵⁰ Entrevista colectiva con integrantes de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 24/09/2012.

¹⁵¹ ZAMORA, Rubén (2014): «Una noticia...Algo sobre Arnoldo Medrano» *el Periódico*, 1 de abril 2014.

cha Medrano y sus aliados han logrado evitar sentencias condenatorias.¹⁵² Mientras tanto, el control directo que ejercía sobre el consejo municipal de San Pedro Ayampuc parece haber disminuido después de las elecciones del 2011, pero su influencia en San José del Golfo, donde tiene varias propiedades, sigue siendo fuerte.¹⁵³

Analizando otras características del contexto donde la expresión de acción colectiva ha surgido en oposición al proyecto minero, es importante resaltar la composición de la población local. En ambos municipios la población es predominantemente ladina, aunque San Pedro Ayampuc tiene una parte considerable de población indígena Kaqchikel, especialmente en y alrededor de la comunidad de Nacahuil.¹⁵⁴ En el caso de esta comunidad, la estrecha red comunitaria, así como la organización interna ha sostenido sentimientos importantes de pertenencia étnica a pesar del flujo migratorio constante de sus habitantes hacia la capital cercana.¹⁵⁵ Históricamente, fue identificada en la región, presencia de población Xinca¹⁵⁶, sin embargo, diferentes movimientos desde y hacia la región han disminuido la identificación Xinca entre la población, así como una reproducción explícita y colectiva de esta raíz étnica. Como las siguientes secciones mostrarán, la presencia de población indígena en el área de San Pedro Ayampuc agrega complejidad social y política a los procesos de significación además de nutrir los discursos y las estrategias de acción colectiva en el área.

Los procesos organizativos de defensa del territorio de los últimos años para responder al proyecto minero fueron iniciados principalmente por integrantes de comunidades que vivían en las afueras de los centros urbanos municipales. La relación de estas comunidades con los centros urbanos refleja la de muchas otras comunidades rurales. El consejo municipal suele representar la contraparte principal para fondos públicos y la política nacional, además de constituir el espacio de toma de decisiones a nivel

¹⁵² La situación de Medrano cambió recientemente con su captura y vinculación a proceso en febrero 2016, después de que la Comisión Internacional contra La Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitara un proceso de antejuicio contra el alcalde de Chiantla en julio 2015 por acusaciones de desvío y blanqueo de fondos municipales.

¹⁵³ Entrevista con integrante de la RPLP, 24/09/2012.

¹⁵⁴ De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2011, en esta comunidad, el 27% de la población es indígena.

¹⁵⁵ PIXTUN MONROY, Miriam; SALES MORALES, Juana (2009): *La migración hacia la ciudad de Guatemala y su impacto en la identidad cultural de personas originarias de San José Nacahuil, 1976-2006*. Tesis de Licenciatura. Guatemala: Universidad de San Carlos Guatemala.

¹⁵⁶ CAMPBELL, Lyle (1972): A Note on the So-Called Alagüilac Language. En: *International Journal of American Linguistics*, 38(3), pp. 203-207.

local, que luego dicta las políticas municipales hacia las comunidades en los alrededores. Desde el punto de vista de una residente local, esta constatación consolida «la sumisión de la comunidad a la estructura municipal que tiene que corresponder a y permitir la reproducción de las políticas nacionales»¹⁵⁷.

Parecido a las dinámicas descritas en el capítulo anterior, en estos municipios la cooptación de procesos para el nombramiento de los representantes comunitarios ha representado un mecanismo clave para restringir la participación comunitaria en las políticas municipales. La elección de autoridades comunitarias en muchos casos no suele seguir el marco legal¹⁵⁸ que establece su elección por parte de las comunidades, representando un debilitamiento de las dimensiones participativas dispuestas en las leyes de descentralización. Por el contrario, el alcalde municipal suele ser quien nombra a los representantes de las comunidades.

En este respecto, Nacahuil representa una de las excepciones más evidentes. En esta comunidad un tejido social fuerte y una insistencia en el nombramiento de sus propias autoridades, ha permitido un posicionamiento propio y la contestación de aspectos específicos de las políticas municipales. Esto evidencia similitudes entre los procesos de significación en Nacahuil y las comunidades indígenas del norte de Quiché, descritas en el capítulo anterior.

El rol de las autoridades comunitarias está vinculado a la idea de ofrecer servicios a la comunidad, basada en una noción de poder que contrasta con la imposición vertical desde el centro municipal. La obligación de la consulta constante de los comunitarios, así como la centralidad de la asamblea comunitaria dominan los procesos de toma de decisión. Esto garantiza el respaldo y apoyo del representante de la comunidad por parte de los pobladores en el ejercicio de sus funciones, las cuales, a su vez, son sometidas a una auditoría constante para prevenir cualquier abuso de poder.¹⁵⁹ Estas pautas de organización orientadas a contrarrestar la influencia del consejo municipal no son evidentes en las demás comunidades del área, marcadas por un tejido social más débil.

La diversidad en la composición de la población en San Pedro Ayampuc daba lugar a relaciones de racismo y prejuicios entre las diferentes

¹⁵⁷ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

¹⁵⁸ La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural representaría este marco legal.

¹⁵⁹ Un título colectivo de tierra en el caso de Nacahuil parece haber jugado un rol importante en reproducir significados que destacan a la comunidad como el marco de referencia social más importante. PIXTÚN MONROY, Miriam; SALES MORALES, Juana (2009): *op. cit.*

comunidades y sus integrantes. La comunidad indígena de Nacahuil fue señalada en varias ocasiones de representar una fuente de conflictos y desconfianza. En este sentido una integrante de la comunidad indicaba: «el centro municipal ha siempre mirado hacia Nacahuil con desconfianza, Nacahuil fue y es visto como una población que nunca fue subordinada, siempre fue visto como una comunidad bochinchera.»¹⁶⁰ Sin embargo, la actitud despectiva de los centros urbanos de los municipios no ha marcado solamente las relaciones con la población indígena. Experiencias parecidas de subordinación fueron citadas por comunitarios no-indígenas en el área:

«El alcalde siempre ha visto a las comunidades como de segunda categoría, por ejemplo, La Choleña tiene agua un día, otro día no, siempre nos han visto como si somos tontos, dormidos. La gente del pueblo siempre se sentó al lado del alcalde y hubo discriminación hacia las comunidades. Yo lo viví cuando estudiaba en la primaria y nos llamaron indios descalzos y yo nunca lo voy a olvidar para demostrar que uno puede ser descalzo, pero de mejor razón y con más dignidad que ellos.»¹⁶¹

Otra expresión de la tensión inter-comunitaria en el área está vinculada a aspectos geológicos. San José del Golfo y San Pedro Ayampuc están ubicados en el denominado 'corredor seco', una de las áreas más secas del país con una constante escasez de agua. Derivado de esto, la distribución del agua también ha sido fuente de disputa constantemente (algunas comunidades solo recibían agua potable dos o tres veces a la semana) por lo que tanto las tensiones entre las comunidades, así como las disputas con el consejo municipal eran frecuentes. Naturalmente, la preocupación con respecto al agua ha sido exacerbada por la amenaza que representa el proyecto minero en el área, por lo que se ha consolidado como un incentivo central para las acciones de resistencia de los comunitarios.

La proyección de intereses mineros en el área ha representado la introducción de nuevos intereses y dinámicas económicas al contexto local y a la vez ha demostrado cómo diferentes actores convergen desde diferentes niveles para promover el proyecto minero. Élite emergentes vinculadas a la compañía nacional subsidiaria y élites tradicionales como facciones de la familia Novella, cercanas a la Gremial de Industrias Extractivas (GREMIEXT) coordinan sus esfuerzos para garantizar la implementación del proyecto. Por otro lado, capital internacional ha tenido un papel importante en las diferentes etapas del proceso de obtención

¹⁶⁰ Entrevista con integrante de la RPLP, 13.11.2013.

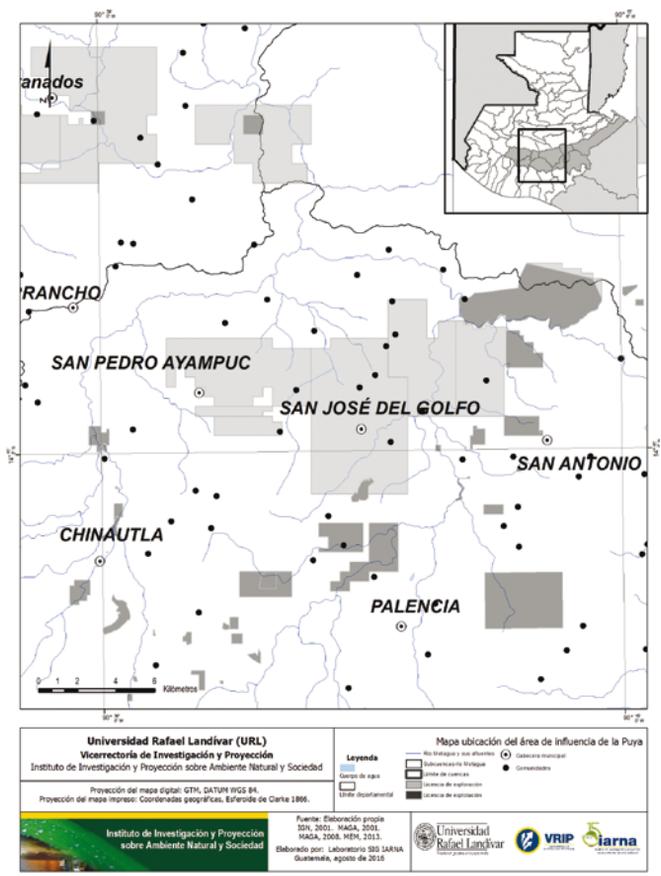
¹⁶¹ Entrevista colectiva con integrantes de la RPLP, 24.09.2012.

de licencias e inicio de la explotación desde que la compañía estadounidense Kappes, Cassidy & Associates adquirió el 100% de los derechos de propiedad en 2012.

Actualmente el proyecto Progreso VII Derivada es el único proyecto minero formalmente en operación en las municipalidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. No obstante, la compañía con la licencia para este proyecto tiene 4 licencias exploratorias más en el área. Sumado a esto y visto desde una perspectiva regional más amplia, un total de 18 licencias (14 exploratorias y 4 de explotación) han sido concedidas. Esto parece sugerir que el proyecto en disputa constituye solo un punto de entrada desde el cual otros proyectos mineros puedan ser promovidos e implementados.

Parecido a lo indicado para la región del norte de Quiché, la expansión del tendido eléctrico acompaña la concesión de las primeras licencias mineras en el área de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Especialmente en el curso del 2014 la compañía colombiana TRECSA intentó entrar maquinaria en varias ocasiones para iniciar sus labores en varias comunidades del área como parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte Eléctrico (PET). Sin embargo, se ha visto confrontada con un contexto en el cual los comunitarios locales ya se habían movilizizado para oponerse a la implementación del proyecto minero.¹⁶² Desde 2010, cuando las noticias referentes la concesión empezaron a difundirse, se iniciaron procesos organizativos en el contexto local para buscar información, organizar reuniones y discutir los posibles resultados de dicho proyecto. Esto, por un lado, puso de manifiesto los aspectos antagónicos del conflicto, pero, por otro lado, permitió crear una plataforma para nuevas convergencias y relaciones que serán analizadas en la próxima sección.

¹⁶² Además, el 5 de abril 2015 pobladores del cantón La Laguna de San Pedro Ayampuc abrieron un segundo punto de resistencia en el área con el campamento de la Resistencia Pacífica la Laguna, que tiene como objetivo impedir la construcción de una sub-estación que forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transporte Eléctrico (PET), una condición clave para la promoción de las operaciones de empresas mineras en el área.



Mapa de la ubicación del área de influencia de la Puya en los dos municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. Elaborado para esta publicación por PÉREZ IRUNGARAY, Gerónimo Estuardo de la Unidad de Información Estratégica para la Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar

4.2. Desarrollando un discurso de oposición

En 2010 la información indicando la concesión de una licencia minera en el área empezó a difundirse y llevó a los integrantes de las comunidades a investigar y verificar la naturaleza del proyecto. Vínculos fueron establecidos con ONG de la Ciudad de Guatemala y, a través del contacto con

el diputado del Congreso de la República, Carlos Mejía, en 2011 se solicitó información bajo la Ley de Acceso a Información Pública.¹⁶³ Así, la primera información oficial sobre el proyecto llegó a las comunidades, confirmando los rumores e indicando que una primera licencia exploratoria en el área había ya sido concedida en 1999. Desde entonces, la compañía había estado trabajando silenciosamente para explorar los territorios en las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc sin el conocimiento de las comunidades. El primero de los túneles subterráneos en el área de la mina ya había sido construido en 2005.

Esa información llevó a los residentes locales a recordar que hacía algunos años personas ajenas al lugar habían llegado en pickups a tomar pruebas de arena o piedras. Además, individuos vinculados a la empresa habían empezado a arrendar terrenos que antes habían sido arrendados por comunitarios para sus cultivos. Parte de estas tierras fueron sucesivamente adquiridas por la empresa minera, muchas veces con ofertas desproporcionadas para extensiones de tierra que no parecían tener valor: «Si los agricultores decían Q2 millones por un terreno, los representantes de Radius y Gold Field sin mencionar a esas empresas ofrecían más, mucho más: Q7 millones o Q5 millones por encima del precio inicial. Y compraban.»¹⁶⁴.

Más de una década había pasado sin que nadie en el área supiera del proyecto Tambor y las otras 14 licencias exploratorias que fueron concedidas. En 1999, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) había entregado la licencia exploratoria a la compañía canadiense Radius Explorations y la compañía sudafricana Gold Field, autorizando que se examinara una extensión geográfica de 107.072 hectáreas. El área que finalmente fue concedida para la extracción en 2011 (0,15 hectáreas) es conocida localmente como «La Puya» y desde aquel momento ha representado el núcleo del conflicto alrededor de las actividades mineras.

Estos acontecimientos dieron lugar a planteamientos colectivos y debates entre los integrantes comunitarios sobre el proyecto y sus posibles impactos en el área. La información fue divulgada en varias comunidades a la vez que se organizaron proyecciones de películas sobre otras regiones como San Marcos, donde las comunidades ya contaban con la experiencia y conocían el impacto de los proyectos mineros. Adicionalmente, en la segunda mitad del 2011, diversas marchas fueron organizadas y en preparación para las elecciones, los candidatos a alcalde en las dos municipalidades fueron convocados a

¹⁶³ Ley de Acceso a Información Pública (Decreto número 57-2008).

¹⁶⁴ Citado en: HERNÁNDEZ, Oswaldo J. y OCHOA, José A. (2012): «El oro tan cerca de la capital», *Plaza Pública*. Disponible en: <http://www.plazapublica.com.gt/content/el-oro-tan-cerca-de-la-capital> (Consultado el 22 de junio 2012)

un foro en un intento de asegurar su oposición a la mina en caso de que llegaran al poder.

El gobierno central ignoró estas expresiones iniciales de descontento y concedió la licencia de explotación en noviembre de 2011 y las actividades preparatorias asociadas al proyecto minero se tradujeron en un incremento de tránsito y movimientos alrededor del área 'La Puya'. En este contexto las estrategias de oposición fueron llevadas a otro nivel con el establecimiento de un campamento de protesta, un paso que no fue parte de una estrategia planificada previamente. En marzo de 2012 una comunitaria que se trasladaba a su lugar de trabajo, se percató de la presencia de maquinaria y algunos trabajadores cerca de la entrada al proyecto minero en la carretera entre San José del Golfo y San Pedro Ayampuc. En una primera reacción, bloqueó el camino parando su vehículo enfrente de la garita de las instalaciones mineras, de esta manera impidiendo la entrada de la maquinaria y los trabajadores antes de hacer llamadas para pedir apoyo a otros comunitarios. Los integrantes de las comunidades reaccionaron y colectivamente se tomó la decisión de establecer un campamento permanente en la entrada a las instalaciones mineras. El objetivo del campamento era impedir la entrada de materiales y máquinas a las instalaciones, un reto que los comunitarios lograron por más de dos años. En este sentido consolidaron un espacio que llegó a ser el punto de referencia para la expresión de acción colectiva que surgió como la RPLP.

Turnos fueron establecidos para controlar la entrada al proyecto minero con grupos que se alternan, asumiendo tiempos de 24 horas durante los siete días de la semana, lo que permite combinar la tarea de monitorear la entrada a la mina con la vida cotidiana de las comunidades. Un miembro de las comunidades comparó las dinámicas alrededor del campamento de protesta con las de una colmena: «No es necesario que todos estén allí todo el tiempo, hay tiempos cuando hay solo uno de nosotros presente, pero como en una colmena, cuando algo pasa todos llegamos.»¹⁶⁵

Este movimiento parecido a las dinámicas de una colmena fue activado en varias ocasiones cuando la compañía minera empezó a emplear diferentes estrategias para avanzar con la implementación del proyecto. La acción directa ha representado un aspecto clave entre las estrategias empleadas por la RPLP para defender el espacio ocupado en la entrada de la mina, que al mismo tiempo adquirió un profundo significado en defensa del territorio, el medio ambiente y la vida.

Un primer intento para superar el bloqueo de la RPLP en la entrada a la mina fue emprendido el 8 de mayo 2012 poco después de media noche

¹⁶⁵ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 20/09/2012.

cuando un convoy de maquinaria pesada se acercó a la mina acompañado por más de 30 vehículos de la PNC y más de 100 integrantes de la policía antidisturbios. Esto representó una primera evidencia de que el gobierno no iba a ser receptivo a las demandas de la RPLP y que estaba dispuesto a usar la fuerza pública para asegurar que el proyecto minero avanzara. Los integrantes de la RPLP respondieron de manera instantánea al llamado de sus colegas de turno y llegaron en centenares, formando filas para bloquear de manera pacífica el camino estrecho que llevaba hacia las instalaciones de la mina, asegurando así, que la maquinaria no pasara. La compañía minera y la policía, obviamente sorprendidas por encontrarse con un número tan elevado de opositores e inseguras de cómo manejar la situación, fueron obligadas a retirarse pocas horas más tarde.¹⁶⁶

Después de estos logros iniciales de la RPLP, la compañía minera incrementó sus esfuerzos a través de la compañía subsidiaria Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (en adelante, EXMINGUA) para asegurar la implementación del proyecto.¹⁶⁷ A nivel local, la ola de intentos por deslegitimar a los integrantes de la RPLP se iniciaron con difamaciones públicas y la circulación de rumores.¹⁶⁸ Al mismo tiempo, la compañía local Servicios Mineros de Centro América S.A. —la cual está a cargo de un grupo de oficiales militares retirados— fue contratada para preparar el terreno para la implementación del proyecto. En un intento inicial de infiltrar la resistencia, los oficiales retirados Mario Figueroa Archila, Pablos Silas Orozco y José Arias Méndez se habían acercado a los integrantes de la RPLP declarando estar en oposición al proyecto minero. Sin embargo, éstos pronto fueron identificados como los directores de esa compañía, la cual Servicios Mineros de Centro América, contratados por la compañía nacional subsidiaria del proyecto minero, EXMINGUA. Ellos jugarían un rol clave en sus intentos de desintegrar y debilitar la RPLP.

Las estrategias para implementar el proyecto se tornaron violentas cuando Yolanda Oqueli, una de las integrantes de la resistencia, sufrió un intento de asesinato el 13 de junio de 2012. Estando en el campamento, ella había salido a recoger gasolina para una planta eléctrica

¹⁶⁶ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala City, 13/11/2013.

¹⁶⁷ De hecho, el representante legal de EXMINGUA, Selvin Morales, fue Ministro de Energía y Minas en el gobierno de Colom hasta diciembre de 2010, periodo en el cual la licencia para el proyecto Tambor había sido concedida. Esto representa otro indicio de la colusión de intereses entre compañías mineras y representantes del gobierno.

¹⁶⁸ Los rumores que circulaban variaban desde acusaciones de que los integrantes de la resistencia estaban recibiendo dinero hasta alegaciones sobre la vida privada de los comunitarios especialmente en contra de las integrantes femeninas de la RPLP.

que suministraba luz a los integrantes de las comunidades de turno y minutos más tarde fue emboscada y gravemente herida con tres disparos. Integrantes de la RPLP escucharon los tiros y corrieron hacia la escena del crimen, desde donde la trasladaron al hospital. Ella sobrevivió el intento de asesinato, pero tiene una bala incrustada en su cuerpo.

Entre los integrantes de la RPLP prevaleció la indignación con respecto a las estrategias empleadas por la empresa que generaron el temor inicial y eso contribuyó a consolidar aún más la resistencia. Esto llegó a ser una característica de muchas de las agresiones sufridas por integrantes de la RPLP. En vez de debilitar el movimiento, dichas agresiones estimularon los sentimientos de solidaridad y rechazo a la injusticia e incluso llevaron a otros sectores de la población —hasta este momento sin participación activa en la resistencia— a acercarse a la RPLP.

Al mismo tiempo el lento avance en la implementación del proyecto tuvo sus implicaciones a nivel de los propietarios, llevando a la compañía canadiense Radius Gold a vender su participación en el proyecto Progreso VII Derivada. Su presidente declaró que esto representaba parte de una «estrategia corporativa de vender sus acciones problemáticas y permitir a la compañía concentrar su capital y experiencia en las áreas menos conflictivas con respecto al desarrollo en la región.»¹⁶⁹ La RPLP interpretó esto como una señal de que su persistencia estaba dando resultados y había llevado a estos cambios.

Por otro lado, la compañía estadounidense Kappes, Cassidy & Associates que hasta este momento había tenido un papel secundario en la alianza de inversionistas, adquirió el 100% de los derechos de propiedad. Desde entonces, junto con la compañía nacional subsidiaria, EXMINGUA, ha representado el actor más público en la promoción del proyecto minero.¹⁷⁰ A la vez, la aglomeración de diversos intereses alrededor del proyecto quedó relevada con el rol público de Rodrigo Maegli Novella¹⁷¹, quien actuaba

¹⁶⁹ La Hora (2012): «Editorial: Radius Gold Inc. Compañía consideró conflictivo el proyecto en La Puya», *La Hora*, 7 December 2012, p. 3.

¹⁷⁰ Kappes, Cassidy & Associates pagaron aproximadamente \$400.000, una cuarta parte de este monto fue transferido en el momento de la firma del contrato, las otras partes serán pagados una vez que se inicie el proceso de extracción. Adicionalmente, como parte del acuerdo KCA acordó hacer pagos trimestrales a Radius Gold dependiendo del monto de oro extraído. La Hora (2012): *op. cit.*

¹⁷¹ Rodrigo Carlos Maegli Novella fungió como representante de la compañía estadounidense Kappes, Cassidy & Associates en reuniones con el gobierno. La familia Maegli es una de las familias de las élites más tradicionales, establecida en Centro América en una variedad de ramas empresariales, pero principalmente se enfoca en negocios agro-industriales. Vía matrimonio en 1954 la familia Maegli también estableció vínculos con la familia Novella, otra familia de las elites tradicionales y desde entonces ha sido parte del consejo ejecutivo de la compañía de cemento, Cementos Progreso. El rol de

como representante de la compañía estadounidense. Esto revela el involucramiento directo de los sectores más poderosos de la élite nacional en la promoción de este proyecto minero.

En la segunda mitad del 2012, la presión y los esfuerzos de la compañía minera por iniciar las operaciones aumentaban, lo que fue motivado, en parte, por una cláusula en la legislación minera nacional de acuerdo a la cual la compañía arriesga la cancelación de la licencia, si no da inicio a las actividades de explotación a un año de su concesión. Las tensiones culminaron en noviembre y diciembre de 2012 cuando en el curso de una nueva ofensiva, los promotores de la compañía minera organizaron un grupo de supuestos empleados para romper el cerco de la RPLP que estaba bloqueando la entrada a la mina. Esto se tradujo en un primer enfrentamiento el 22 de noviembre cuando el oficial militar retirado, Pablo Silas, llevó a un grupo de supuestos trabajadores, —integrado en parte por miembros de pandillas juveniles— al campamento de la RPLP, lanzando insultos y amenazas a los comunitarios.

La presencia de los representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (en adelante PDH), organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de periodistas del Centro de Medios Independientes (en adelante CMI) que documentaron y registraron los eventos, fue clave para prevenir un enfrentamiento violento. La decisión de apoyarse en el CMI resultó ser un paso especialmente importante para documentar las estrategias agresivas y crear un discurso alternativo al manejado por los medios corporativos, que seguían presentando la imagen de la resistencia como grupos de pobladores manipulados y radicales. Aunque los periodistas del CMI fueron obligados a retirarse por el nivel de agresión, su presencia tuvo un impacto definitivamente disuasivo.¹⁷² Además, las imágenes del enfrentamiento documentadas y transmitidas por los medios alternativos,

Rodrigo Carlos Maegli Novella en la promoción del proyecto minero El Tambor revela el interés de las élites tradicionales en la implementación del proyecto, que probablemente se debe a inversiones directas de diferentes facciones de las élites. Más información en: SOLANO, L. (2011): «Valle Polochic. El poder de dos familias», *El Enfoque*. Análisis de situación, 16(2).

¹⁷² Tres periodistas del CMI iniciaron una causa legal en base a los acontecimientos y contribuyeron evidencia gráfica en el proceso contra los oficiales militares retirados Pablo Silas Orozco Cifuentes y Juan José Reyes Carrera, quienes fueron condenados a dos años de prisión conmutable. Al mismo tiempo el caso reveló las redes que rodean a los agresores. Fernando Linares Beltranena, abogado conocido por su defensa de militares de alto perfil como Ortega Menaldo en sus casos de corrupción y lavado de dinero, asumió la defensa de los militares retirados condenados. Más información en: DE LEÓN, Quimy (2013): Juicio contra trabajadores por amenazas a periodistas. *Prensa Comunitaria km*. 169, Disponible en:

<https://comunitariapress.wordpress.com/> (Consultado el 21 de febrero 2014).

facilitaron circular esta versión alternativa en la red y desde entonces esto ha constituido una estrategia central de la RPLP. En este sentido, ha tenido un efecto iterativo, dado que las imágenes del comportamiento arrogante y agresivo de la compañía minera y sus empleados fueron circuladas a nivel nacional e internacional.

Estos acontecimientos evidenciaron las medidas que los diferentes actores estaban dispuestos a tomar para asegurar la implementación del proyecto. Mecanismos legales e ilegales constituyeron una parte integral de sus estrategias, tal como quedó reflejado en la contratación de «profesionales de violencia» como el oficial militar retirado Silas y un conocido miembro de pandillas, Franklin Francisco Morataya por parte de la compañía, con la intención de provocar una confrontación violenta.¹⁷³ Adicionalmente, el sector privado liderado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) urgió al gobierno a sentar un precedente contra la RPLP, acusándolos de romper con el Estado de derecho y alejar inversores internacionales.¹⁷⁴

El 7 de diciembre, a pocos días de la confrontación con supuestos empleados de la compañía minera, el Estado respondió al llamado del sector privado y el campamento fue cercado por las fuerzas públicas evidenciando el apoyo del gobierno al proyecto, como quedó reflejado en un comentario del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla: «Guatemala, como Estado, tiene el compromiso de cumplir con su ordenamiento jurídico y los términos contractuales; es imposible que se esté convocando a la inversión nacional e internacional de parte del gobierno, si no somos capaces de cumplir con los compromisos establecidos por la ley.»¹⁷⁵

Esta vez cientos de integrantes de las Fuerzas Especiales de la Policía se acercaron al campamento con la intención de desalojar el punto de resistencia sin una orden judicial. Sin embargo, por medio de negociaciones de último momento los comunitarios lograron ganar suficiente tiempo para que personal de la PDH y representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala pudieran llegar y así, el desalojo fue abortado. A la vez, una mesa de diálogo entre el Estado y los grupos de oposición fue acordada, siendo el Sistema

¹⁷³ BASTOS, Santiago (2012): «El terror provocado por empresas transnacionales en Guatemala», *Albedrio*. Disponible en: <http://www.albedrio.org/htm/articulos/s/sb-007.html> (Consultado el 29 de noviembre 2012).

¹⁷⁴ VÁSQUEZ, R. B. (2012): «Vemos una estrategia y que es planeado, entrevista con Andrés Castillo, presidente del CACIF», *Siglo XXI*, 14 mayo 2012.

¹⁷⁵ CASTAÑÓN, Mariela (2012): «Antimotines desalojan ingreso de proyecto minero en La Puya», *La Hora*, 07/12/2012. Disponible en: <http://lahora.gt/hemeroteca-lh/antimotines-desalojan-ingreso-de-proyecto-minero-en-la-puya/> (Consultado el 9 de mayo 2013).

Nacional de Diálogo Permanente la entidad responsable de agendar las reuniones y buscar una solución al conflicto (este aspecto será analizado en el apartado 4.4).

Los distintos intentos violentos orientados a desalojar el campamento y asegurar la implementación del proyecto fueron complementados con estrategias dirigidas a criminalizar a los miembros de la RPLP. Como señalan varios informes y análisis, el uso de esta estrategia en contra de activistas actuando en defensa de sus territorios ha tenido un constante incremento a nivel nacional en los últimos años.¹⁷⁶ Un total de nueve miembros de la RPLP enfrentaron procesos judiciales, acusados de haber detenido ilegalmente y amenazado a trabajadores de la compañía minera en mayo de 2012. Después de meses de audiencias postergadas —durante los cuales los pobladores tuvieron que cumplir con medidas cautelares— un tribunal sentenció a tres integrantes de la resistencia a nueve años de prisión conmutables a una multa de US\$4,212.00, mientras los otros seis miembros fueron absueltos de los cargos.¹⁷⁷ A la vez, los casos evidenciaron el elevado nivel de convergencia de intereses privados e institucionales alrededor del proyecto minero, ejemplificados por el Ministerio Público y sus intentos de atacar, perturbar y debilitar la RPLP y su proceso organizativo.

A pesar de las fuertes presiones por parte del Estado y los actores privados detrás del proyecto minero, a lo largo de los años, la RPLP fue capaz de mantener el campamento y consolidarlo como un espacio simbólico y físico de resistencia. Por un lado, ha constituido un espacio en el cual la resistencia fue puesta en práctica, con la acción directa jugando un rol clave en el curso de su articulación. Por otro lado, también ha representado un marco en el cual conocimientos y entendimientos fueron intercambiados y discutidos para consolidar una posición colectiva con respecto al proyecto minero. La siguiente sección analizará estos

¹⁷⁶ SIEDER, Rachel y BASTOS, Santiago (2014): Pueblos indígenas en Guatemala. La rearticulación comunitaria y la disputa por las legalidades en la democracia neoliberal. En: VALLADARES DE LA CRUZ, L.R. (coord.) *Nuevas violencias en América Latina. Los derechos indígenas ante las políticas neo-extractivistas y las políticas de seguridad*. México D.F.: Juan Pablos Editor. pp. 141-184. UDEFEGUA (2015): *Soy Defensora, soy Defensor, Promuevo Derechos Humanos. Informe sobre situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Enero a diciembre de 2014*. Guatemala: UDEFEGUA.

¹⁷⁷ Con respecto a la misma causa y el proceso de absolución de cuatro de los integrantes de la RPLP llama la atención que la decisión de un juez contrasta con la resolución condenatoria en contra de los otros tres miembros de la RPLP por parte de otro juez. En su argumento para la absolución, el juez a cargo concluyó que las alegaciones habían sido fabricadas y los testimonios marcados por contradicciones. En el proceso de absolver a los acusados en febrero 2015, el tribunal ordenó al Ministerio Público emprender una investigación por falsificación de evidencias.

intentos de enmarcar de manera colectiva la consolidación de una posición antagonista y el desarrollo de su propia «diferencia».

4.3. El «encuadre» colectivo: hacia una posición de «diferencia»

Dos aspectos interrelacionados han representado los elementos discursivos más importantes para delinear la resistencia de la RPLP, la preocupación sobre el impacto ambiental del proyecto minero y la afirmación de la vida. El miedo de una exacerbación del problema del agua representó uno de los principales factores motivantes para la acción antagonista. Como un comunitario manifestó, las comunidades locales estaban muy conscientes de las consecuencias que un proyecto minero podría tener en el acceso al agua, sobre todo, en un área ubicada en el corredor seco:

«Una de las principales preocupaciones es el uso del agua en un área que es parte del corredor seco, para muchas comunidades el agua ya está limitado a dos veces la semana. En un momento habían desviado agua para la mina de una fuente que subastaba las comunidades, pero la gente se dio cuenta y ocupó la fuente ya que las comunidades no recibían agua hasta después de medianoche mientras estaban llevando camionadas de agua para la compañía y hacia el turicentro¹⁷⁸ durante el día y la gente tenía que levantarse por la noche para recibir el agua. Ahora han pedido un área de 20 kilómetros cuadrados para explotar para 25 años, ¿después de esto cómo van a terminar las comunidades? Podemos vivir sin oro, pero no sin agua.»¹⁷⁹

El discurso y las preocupaciones de la RPLP alrededor del impacto ambiental han sido alimentadas por las experiencias de otras comunidades en Guatemala afectadas por proyectos mineros, como las de San Miguel Ixtahuacán.¹⁸⁰ Espacios locales de reunión eran claves no solo para recibir información de primera mano sobre el impacto en las comunidades locales sino también por los insumos y aprendizajes sobre

¹⁷⁸ El turicentro consiste en un parque acuático propiedad del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, mencionado en la sección anterior.

¹⁷⁹ Entrevista colectiva con integrantes de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 24/09/2012.

¹⁸⁰ La decisión de empezar un diálogo solo con el Estado y de enfocar las demandas al cumplimiento de sus responsabilidades legales en vez de encaminar negociaciones directamente con la compañía, fue una de los aprendizajes que la RPLP sacó de la resistencia en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Esto fue resultado del análisis de cómo las negociaciones habían contribuido a divisiones en las comunidades y organizaciones, aunque en un principio habían estado opuestos al proyecto minero. Entrevista con integrante de la RPLP, 20/09/2012.

los desafíos de emprender una resistencia una vez que la mina esté instalada y operando. Aunque los entendimientos de una gran parte de los integrantes de la RPLP no están fundados en un marco holístico similar al de las comunidades indígenas en la región del norte de Quiché, aquí también, una perspectiva relacional con respecto al ambiente caracteriza sus discursos. Basado en las experiencias cotidianas de la vida rural, las comunidades están conscientes de su dependencia del entorno natural y la incompatibilidad de este hecho con el proyecto minero en el área.

Una integrante de la RPLP señalaba que la receptividad hacia estos conceptos que enfatizan una relacionalidad con el medio ambiente, también puede ser atribuida a la activación de ciertos significados reflejados en las prácticas diarias de las comunidades locales, a pesar de que la vinculación directa con determinadas raíces étnicas en muchos casos haya sido debilitada:

«En sus prácticas la gente mantiene muchos principios y valores que la relaciona con la naturaleza y el ambiente y con la claridad que la red de la vida depende de la naturaleza, aunque no tengan una relación directa con la identidad indígena. Esto va más allá de un asunto de etnicidad, es sentido común en las comunidades rurales de que aquí la vida está en riesgo.»¹⁸¹

Al mismo tiempo la RPLP ha buscado complementar el conocimiento local y los debates mantenidos en el campamento con argumentos técnicos buscando el apoyo de organizaciones y expertos. A petición de la RPLP el ingeniero y experto ambiental estadounidense Robert Robinson hizo un análisis del informe oficial que ayudó a brindar una perspectiva técnica a las preocupaciones identificadas por las comunidades. En su informe, Robinson señaló una serie de deficiencias:

«La mina Progreso VII es un proyecto minero de alto riesgo; () en primer lugar, existe la presencia de arsénico muy tóxico en el yacimiento de mineral, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. La minería probablemente liberará, adicionalmente, concentraciones de arsénico en el medio ambiente. En segundo lugar, el EIA¹⁸² contiene graves deficiencias en la información, la planificación y las garantías de recuperación. Las deficiencias en el EIA no proporcionan ninguna confianza de que los propietarios saben cómo realizar la minería de una manera que proteja la salud pública y el medio ambiente.»¹⁸³

¹⁸¹ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala City, 13/11/2013.

¹⁸² Las siglas EIA corresponden a Estudio de Impacto Ambiental.

¹⁸³ ROBINSON, Robert y LAUDEMANN, Steve (2013): *Observaciones preliminares. Mina Progreso VII Derivada*. Estudio de Impacto Ambiental, p. 2.

Al mismo tiempo la información vinculó el impacto sobre el acceso al agua en el área con cuestionamientos de la información brindada sobre el proyecto, lo que aumentó la desconfianza de la población local con respecto a las autoridades públicas. Esto llevó a la RPLP a dudar de la neutralidad de los procedimientos técnicos y el discurso científico que habían servido al Estado como argumentos para conceder la licencia para el proyecto minero. Los comunitarios revelaron las relaciones de poder y la colusión de intereses reflejadas en la definición de los términos y la promoción del proceso de implementación.

Junto con el uso de la violencia, la manera engañosa que acompañó la implementación del proyecto contribuyó a estimular el posicionamiento antagónico de los integrantes de la RPLP: «Hay unos problemas fundamentales sobre cómo la empresa entró en las comunidades, que no lo ha hecho de forma correcta. Es una cosa cumplir con los requisitos del Estudio de Impacto Ambiental, pero es otra cosa hacerlo de forma legítima. Aquí las comunidades están en resistencia porque no se ha hecho de manera correcta, nunca hemos sido informados de manera correcta sobre nada.»¹⁸⁴

A pesar de la percepción de las ilegalidades y los sentimientos de injusticia que habían sido exacerbados por las estrategias coercitivas usadas para implementar el proyecto, la RPLP no ha abandonado una segunda dimensión clave de su lucha. Basado en un discurso de afirmación de la vida, han insistido en la naturaleza pacífica de su resistencia. Una integrante de las comunidades explicó el razonamiento detrás de este aspecto:

«Desde un principio hemos intentado de entender la lucha pacífica como el mejor camino para alcanzar objetivos. Siempre va a haber provocaciones que quieren causar problemas. Ellos atacaron una colega a unos 500 metros de aquí, ellos querían que la gente tenga miedo y se vaya de aquí. Ellos también pensaron que íbamos a molestarlos por el ataque a nuestro colega y que íbamos a quemar las máquinas o sus oficinas, pero si se entiende la lucha como para la vida tenemos que defender la vida y no quitar la vida como ellos hacen, por eso la centralidad de la lucha pacífica.»¹⁸⁵

La idea de atribuir esta importancia a la forma pacífica de su lucha originalmente ha sido inspirada por el constante intercambio de información, la proyección de películas sobre otras resistencias no violentas—como la de Gandhi— y los consejos recibidos por parte de organiza-

¹⁸⁴ Integrante de la RPLP durante la reunión con el Sistema Nacional Permanente de Diálogo, 25/06/2013.

¹⁸⁵ Entrevista colectiva con integrantes de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 24/09/2012.

ciones de derechos humanos. Esta característica de su lucha se ha mantenido durante todo el proceso organizativo de la RPLP a pesar de múltiples provocaciones, amenazas, ataques y desalojos violentos.¹⁸⁶

Al mismo tiempo las mujeres han jugado un rol central en implementar y mantener esta dimensión no-violenta, un aspecto que también fue destacado por los hombres que forman parte de la RPLP:

«El hecho que no ha habido ningún muerto o problemas más serios de los que ya hemos tenido es por la participación de las mujeres. Esto ha sido un poco difícil para nosotros los hombres a aprender porque aquí en Guatemala tenemos una historia de violencia, desalojo y represión y nuestro instinto es de tratar alguien de la misma manera como nos tratan a nosotros. Pero en esto las mujeres han jugado un rol sumamente importante porque nos han ayudado a entender e integrar estas acciones pacíficas y a no caer en las provocaciones de la compañía.»¹⁸⁷

Este rol protagónico de las mujeres ha sido reflejado en dos aspectos: Primero, durante los enfrentamientos y situaciones de peligro de desalojo, las mujeres representaban la primera fila de integrantes de la RPLP para enfrentar la respectiva amenaza, en parte porque se consideraba que era menos probable que ellas reaccionen a las provocaciones de los agentes de la empresa minera. Segundo, dado que muchos hombres suelen salir a trabajar durante el día, las mujeres han asumido el peso de los turnos para mantener el campamento y garantizar su abastecimiento. En este sentido, ha sido ampliamente reconocido que representan «el corazón de la RPLP» y garantizan una visión de largo plazo en su lucha: «Es muy difícil balancear la lucha, además de cuidar a su familia y sus niños. Es especialmente para los niños que estamos luchando porque no quiero que sufran por los problemas con un proyecto minero. Esto es donde ser

¹⁸⁶ En este capítulo, no todos los ataques e incidentes de seguridad fueron mencionados, en muchos casos es también difícil señalar un vínculo comprobado con los actores que promueven el proyecto minero. Por ejemplo, el asesinato de 11 comunitarios de Nacahuil el 7 de septiembre de 2013 y las presiones sucesivas para instalar un destacamento militar en la comunidad han sido interpretados por parte de los integrantes de la RPLP y analistas como una estrategia para militarizar el área y preparar el terreno para las operaciones mineras planificadas. En el periodo después del ataque, Nacahuil desarrolló un proceso organizativo para rechazar la presencia militar en la comunidad y en cambio implementar un programa de seguridad diseñado por parte de la comunidad que implicaban condiciones específicas para la presencia de la policía en la comunidad afectada por el crimen. Según la opinión de los integrantes de la RPLP, el proceso de desmilitarizar Nacahuil «fue una contribución sumamente importante al proceso de resistencia en La Puya.» (Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 12/10/2014).

¹⁸⁷ Entrevista con integrante de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 29/09/2014.

una mujer nos pone en una situación específica y al mismo tiempo hace el participar en una lucha mucho más difícil para nosotros.»¹⁸⁸ Un detalle importante para agregar al análisis del rol protagónico de las mujeres es que, en contraste con muchas otras articulaciones sociales en Guatemala, las mujeres también han consolidado una posición como referentes de la resistencia.

Además, el reconocimiento del rol importante de las mujeres en la lucha de la RPLP ha fortalecido nociones de horizontalidad en las relaciones entre los integrantes de las comunidades. Este énfasis horizontal también está reflejado en los esfuerzos de apoyarse en la complejidad demográfica del contexto local, otra característica clave de sus formas organizativas. Hasta cierto punto esto permitió a la RPLP superar las divisiones étnicas que en muchos casos han representado un desafío crucial para previas generaciones de agencia colectiva en Guatemala. Desde un principio unos elementos centrales para encuadrar el proceso organizativo habían sido establecidos:

«Es importante entender que el trabajo en contra del proyecto minero ya empezó en 2011, antes del establecimiento de lo que llegaría a ser el campamento La Puya. Pero desde un principio la participación seguía unos principios y uno era que no se estaría usando la bandera étnica, esta lucha no es de mestizos, ladinos, indígenas o Xincas, esta lucha es colectiva porque nos hemos unido bajo la bandera de la vida y el agua, y ningún sector ha de ser excluido, en contrario ha de ser basado en los conocimientos de toda la gente.»¹⁸⁹

El frecuente relacionamiento entre los diferentes sectores de la población en el curso del proceso ha alterado las percepciones y los prejuicios consolidados previamente. En cambio, éstos han sido reemplazados por un reconocimiento de la importancia de los múltiples aportes que alimentan a la RPLP. Estos cambios en las pautas de las relaciones interculturales fueron resaltados por un miembro de la RPLP de una comunidad no-indígena quien describe el proceso de la defensa del territorio como una «oportunidad para sensibilizar valores humanos que permite la construcción de una comunidad.»¹⁹⁰

El proceso de establecer un marco colectivo ha representado un espacio comunitario para identificar entendimientos compartidos, así como apreciar las diferentes contribuciones de diversos sectores de la población a la resistencia:

¹⁸⁸ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 24/08/2012.

¹⁸⁹ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 12/10/2014.

¹⁹⁰ Entrevista colectiva con integrantes de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 24/09/2012.

«El problema de la minería ha creado una cohesión social por la necesidad de demandar y ejercer derechos y esto es una cuestión que transciende aspectos de racismo y del patriarcado porque uno ve cómo las cosas que hombres hacen, se complementan con las de las mujeres y las cosas que mujeres hacen se complementan con las de los hombres. En este espacio político, público y social hay una claridad de la complementariedad de la lucha para un objetivo común, sin que importa si uno sabe leer o escribir, si uno es Maya o no.»¹⁹¹ ¹⁹²

Esta idea de apoyarse en la diversidad de conocimientos también se manifiesta en la influencia de los elementos culturales y lingüísticos de las comunidades indígenas sobre los marcos organizativos de la RPLP. Entre otros, se refleja en sus discursos, donde el lenguaje simbólico y conceptos como «Madre Tierra» son integrados y también incorporados por parte de las comunidades no-indígenas. Asimismo, se evidencia en ciertos marcos organizativos como el énfasis en una dimensión colectiva, así como los procesos internos de consulta y toma de decisiones que principalmente suelen ser asociados con las prácticas de las comunidades indígenas.

Al mismo tiempo las dinámicas organizativas son parte de un proceso abierto, como expresó una integrante de la RPLP: «estamos construyendo algo desde abajo hacia arriba, esto es un proceso en el cual vamos aprendiendo y nunca sabemos cómo va a terminar.»¹⁹³ Ese proceso «desde abajo» ha ofrecido la oportunidad de crear un espacio físico y simbólicamente autónomo, independiente del gobierno y los partidos políticos. En este sentido, la RPLP ha representado un marco organizativo que permite a sus miembros abordar aspectos profundamente enraizados en los patrones de comportamiento de la sociedad guatemalteca, entre ellos los patrones racistas y patriarcales. En el curso de este proceso han logrado consolidar su posición antagónica y «diferencia» con respecto a los actores públicos y privados que buscaron implementar el proyecto minero. Como la siguiente sección demostrará, también buscaron desarrollar esta «diferencia» a nivel de la producción de significados por vía de cambios en los patrones procedimentales para consolidar estas pautas como parte de su resistencia.

¹⁹¹ Entrevista con integrante de la RPLP, San Pedro Ayampuc, 29/09/2014.

¹⁹² Al mismo tiempo los integrantes de la RPLP reconocen que esto no significa que no sigue habiendo problemas de discriminación y relaciones patriarcales que no han sido resueltos, por ejemplo, con respecto a las relaciones al interno de las familias del área. Sin embargo, destacan que en el espacio de La Puya hay una posición consolidada y clara de no aceptar estos patrones.

¹⁹³ Entrevista con integrante de RPLP, San Pedro Ayampuc, 29/09/2014.

4.4. Revelando posiciones antagónicas, desarrollando la «diferencia» interna: el diálogo con el Estado

En el capítulo previo sobre las comunidades del área norte de Quiché la revitalización de mecanismos que enfatizan procesos inclusivos de toma de decisiones a nivel comunitario había sido señalada como parte del proceso organizativo. El contexto de la RPLP demuestra obvias diferencias con respecto a las comunidades relativamente consolidadas y mucho más homogéneas de Quiché. Sin embargo, como fue indicado en la sección previa, el campamento se ha consolidado como un espacio basado en los conocimientos y significados de los diferentes sectores de la población. Este intento de apoyarse en la complejidad de la población y al mismo tiempo ir consolidando una posición colectiva de «diferencia» para reforzar su oposición al proyecto minero se evidencia en varios aspectos organizativos.

En el curso de su resistencia, la asamblea, integrada por todos los integrantes de las comunidades que forman parte de la RPLP, se ha consolidado como el espacio central de deliberación y toma de decisión. Con esto se buscaba incentivar la máxima apropiación del proceso entre los pobladores. Un cambio de énfasis desde el conocimiento de expertos hacia una posición que busca dar voz a los integrantes «comunes» de la resistencia acompaña este proceso, traducándose en un reconocimiento de la contribución y la importancia de actores marginales en procesos de transformación. Como integrantes de la RPLP confirmaron, la consolidación de la asamblea refleja la influencia de tradiciones organizativas y conocimientos de las comunidades indígenas. Esta dimensión intercultural no solo nutre el proceso a nivel discursivo y conceptual, sino también se evidencia en las prácticas políticas en las cuales estas diferentes fuentes de conocimiento confluyen. En este sentido el carácter colectivo de sus acciones representa un elemento central de la RPLP y la idea de hacer los procesos de toma de decisión lo más incluyentes posible, es visto como un reto constante.

Esta integración de modos participativos de deliberación y toma de decisión en el proceso de la RPLP también significa confiar en la dimensión colectiva del proceso y en la capacidad de la asamblea para encontrar decisiones adecuadas:

«Si la resistencia decide entregar a la mina, pues, es su decisión. Este proceso de participación colectiva, el consenso colectivo yo creo que es uno de los retos más importantes no solo en el caso de la Puya sino en muchos procesos que aparentemente están basados en tomar decisiones en consenso, pero en realidad no lo son. (...) Tiene mucho que ver con la forma de manejar poder. Si no empezamos a cambiar esta conciencia y los proce-

dimientos en cosas, puede haber buenas ideas, pero el modo según el cual uno procede termina quitando legitimidad a estos procesos.»¹⁹⁴

En las décadas recientes, entre las comunidades de las municipalidades de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo había poca trayectoria de estas formas colectivas y comunitarias de toma de decisiones. Ahora —en parte basándose en la experiencia de las comunidades indígenas del área— también se han dado intentos de promover un empoderamiento de las comunidades de base. A diferencia del proceso en el norte de Quiché, el proceso de la RPLP no inició con una referencia explícita a la «comunidad» como marco organizativo. Sin embargo, las dinámicas actuales indican que la experiencia de la resistencia influye en las comunidades e inyecta patrones reformulados y relaciones reconceptualizadas a los espacios alrededor de La Puya.

El intento de cambiar los patrones organizativos ha sido más sencillo en las comunidades donde la oposición al proyecto minero es más fuerte. Varias comunidades han incorporado la modalidad de nombrar a sus propios representantes a través de una asamblea comunitaria, contrarrestando así la tradición consolidada en las políticas municipales, de acuerdo a la cual el alcalde nombra autoridades comunitarias o CO-CODE favorables.¹⁹⁵ Al mismo tiempo estos representantes comunitarios «legítimos» han empezado a representar otro canal para ejercer presiones sobre el consejo municipal. Especialmente en el caso de San Pedro Ayampuc, basado en las decisiones comunales, varios COCODE constituyen un contrapeso estratégico al interno de los espacios formales para oponerse al proyecto minero.¹⁹⁶

Además, estos cambios en las prácticas políticas han profundizado el carácter antagónico con respecto a los actores públicos y privados que están promoviendo el proyecto minero. Esta incompatibilidad ha sido especialmente evidente en la interacción con los espacios institucionales del Estado. Como resultado de la incursión por parte de la policía en noviembre de 2012, un diálogo guiado por el Sistema Nacional de Diálogo Permanente¹⁹⁷ fue ini-

¹⁹⁴ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

¹⁹⁵ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

¹⁹⁶ Sin embargo, incluso la elección de sus propias autoridades no siempre garantiza a las comunidades voz y participación en los asuntos municipales, indicando las pautas consolidadas de procesos de toma de decisiones excluyentes. Muchas veces los asuntos son decididos a nivel de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) aunque contradice el marco legal del código municipal que establece los COCODES como órgano principal para decisiones en asuntos que tengan un impacto en las comunidades.

¹⁹⁷ El SNPD fue inicialmente introducido como una plataforma gubernamental por parte del gobierno de Colom (2007-2011) en un intento de abordar el número creciente de conflictos sociales en las diferentes partes del país.

ciado entre la RPLP y representantes del Estado. Dados los antecedentes en el país, de diálogos entre sectores sociales y el Estado, la RPLP mantuvo una posición escéptica, dudando que este proceso pudiera ser beneficioso para las comunidades. Sin embargo, como un miembro de una organización de la sociedad civil cercana al movimiento analizó, el diálogo también llevaba un elemento estratégico para la resistencia:

«Todos los gobiernos desde Portillo hasta hoy siempre han buscado rondas de diálogo, esto ha sido un modo para entretener la gente y buscar disminuir la fuerza de los movimientos de la gente. Esto ha sido uno de los objetivos principales por parte del gobierno mientras al mismo tiempo han intentado convencer a la gente que la mina va traerles beneficios, etc. El movimiento lo ha visto como un momento en la lucha, como una forma de lucha. Ellos saben que no van a ganar nada de las mesas de negociación, pero al mismo tiempo les permite recuperar aliento, porque oponerse a una mina en un lugar tan cercano a la capital es difícil.»¹⁹⁸

En este sentido el aceptar la participación en un diálogo constituye un aspecto estratégico en la lucha de las comunidades e indica el rol ambivalente del tiempo y la determinación de su flujo para la resistencia. Por un lado, con el pasar de los días aumenta el peso físico, mental y económico para la RPLP de poder mantener su proceso organizativo y presencia en el campamento. Por otro lado, la prolongación de la situación de «impasse» tampoco favorece a los intereses detrás de la implementación del proyecto, dado la fluidez del capital que puede llevar a inversores impacientes a desviarse hacia otras oportunidades. Los medios corporativos, por su lado, no cesan de señalar las pérdidas en las cuales incurre la empresa por la paralización de las actividades mineras.¹⁹⁹

Las reuniones con las autoridades representan una arena en la cual las comunidades pueden resaltar antagonismos, contradicciones y sus puntos de vista que contrastan con los de actores institucionales. En el curso de las reuniones la incompatibilidad de sus concepciones alrededor del territorio y del desarrollo, pero también respecto a los patrones procedurales —es decir, la «diferencia política» que se había desarrolla-

¹⁹⁸ Entrevista con integrante del Colectivo Madre Selva, Guatemala Ciudad, 11/11/2013.

¹⁹⁹ Prensa Libre indicó que solo durante el primer año el hecho de no poder operar generó pérdidas de más de US\$3 millones. Adicionalmente, el informe indicó que el Estado había perdido entre US\$8 y US\$10 millones en términos de regalías, aunque queda poco claro cómo estas cifras fueron determinadas. Por ejemplo, LARA, Julio (2014) «Desalojo violento en la Puya deja 26 lesionados», *Prensalibre*. Disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/la_puya-mina_el_tambor-progreso_vii_derivada-san_pedro_ayampuc_0_1143485699.html (Consultado el 23 de mayo 2014).

do internamente—, llegó a ser evidente. Además, ya las primeras reuniones reflejaron una fuerte asimetría entre las dos partes involucradas en el diálogo:

«Cuando empezamos el proceso de diálogo llegó a ser evidente que necesitábamos condiciones mínimas, una condición central era la de tener por lo menos equidad de condiciones en cómo íbamos a abordar los diferentes aspectos (...). Pero en el curso del diálogo inicial nos dimos cuenta que hay una asimetría total en el diálogo y en la relación entre comunidad y Estado. En su discurso, en su actitud, en sus gestos, ellos continuamente afirmaron que ellos son los que toman las decisiones y están en control.»²⁰⁰

Como consecuencia, en el curso de varias reuniones con los actores institucionales, las comunidades y sus representantes intentaron contrastar lo que ellos percibían como una manera de imponer las condiciones para el diálogo y una arrogancia institucional hacia la RPLP. Incluso cuando se estableció un diálogo de alto nivel con la presencia del Presidente Pérez Molina y los integrantes del gabinete, las comunidades seguían condicionando su participación con una serie de demandas en línea con sus propias formas organizativas que enfatizan el carácter colectivo y horizontal de su resistencia.

Primero, insistían en una representación adecuada de las comunidades durante las reuniones de alto nivel, rechazando la posición del gobierno de invitar solamente a dos representantes. Aunque al final acordaron un incremento limitado en el número de delegados para participar en las reuniones, docenas de comunitarios los acompañaban hacia el lugar de reunión y esperaban en las afueras. De esta manera querían prevenir la estrategia del gobierno de identificar y aislar un liderazgo para hacerlos vulnerables a la cooptación.

Segundo, insistían en la presencia de periodistas del CMI y la invitación de testigos de honor. Los primeros grababan las reuniones enteras y aseguraban que la información fuese transmitida de la manera más completa posible a las comunidades. De esta manera se quería impedir que el gobierno usara el diálogo para distorsionar información sobre un supuesto acuerdo o a desacreditar a los representantes comunitarios. La invitación de testigos de honor de la sociedad civil con experiencia en asuntos de derechos humanos, así como de los representantes de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos representó un mecanismo adicional para asegurar la transparencia de las reuniones.

²⁰⁰ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

Tercero, se negaron a participar en un diálogo directo con la compañía minera o sus representantes,²⁰¹ obligando al gobierno de pedir a los representantes de la compañía su retiro de la sala durante las reuniones. Como una integrante de la RPLP indicaba:

«Nosotros estuvimos claros que no queríamos cometer el mismo error como se había hecho en el caso de San Miguel (Ixtahuacán). En San Miguel la compañía y el Estado fueron incluidos, después el Estado se retiró de su responsabilidad dejando las comunidades a negociar con la compañía. Pero la gente no concedió ninguna licencia, era el Estado, así que, si alguien tiene algo que resolver con la compañía, es el Estado.»²⁰²

Una condición adicional impuesta por las comunidades estaba relacionada a la toma de decisiones en espacios de diálogo. Aún bajo fuertes presiones ejercidas por el gobierno para alcanzar un acuerdo inmediato durante el diálogo, los delegados de la RPLP se negaron a asumir algún poder de toma de decisión e insistieron en la consulta y el debate con las comunidades antes de alcanzar un acuerdo.

«La idea era de escuchar sus peticiones y no dar ninguna respuesta sino de escuchar y recoger la información y llevarla a las comunidades para que ellas decidan. En este espacio nosotros no tuvimos voz ni voto para decidir. (...) Ellos [los representantes del Estado] nos dieron peticiones a nivel de propuesta y nosotros aceptamos a nivel de propuesta consultar con las comunidades.»²⁰³

Esto represaba un patrón similar a las dinámicas circulares identificadas en el norte de Quiché. Los delegados no están equipados con un poder para la toma de decisiones, sin embargo, son responsables de transmitir decisiones tomadas por parte de la RPLP, así como llevar la información desde los espacios institucionales a la asamblea para ser discutida y tomar decisiones. Como fue mencionado anteriormente, esto eleva las tensiones a nivel de temporalidad y destaca la incompatibilidad entre las formas más incluyentes de toma de decisiones y las pautas de negociación predominantes en los espacios institucionales.

La última reunión de diálogo estaba prevista para el 20 de mayo de 2014, sin embargo, cuando los representantes llegaron a la Casa Presidencial les fue negado el acceso. Las autoridades argumentaron que la presencia de los periodistas del CMI rompía con los reglamentos de seguridad, a pesar de que su presencia había sido acordada en las reuniones anterior-

²⁰¹ Como fue mencionado anteriormente, Rodrigo Carlos Maegli Novella representó la compañía estadounidense Kappes, Cassidy & Associates en estas reuniones con el gobierno. Más información en la nota de pie 171.

²⁰² Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

²⁰³ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

res.²⁰⁴ Tres días más tarde, el 23 de mayo de 2014 cientos de agentes de la policía procedieron a desalojar violentamente el campamento en la entrada a las instalaciones mineras, hiriendo a docenas de comunitarios que mantenían bloqueado el camino basándose en sus estrategias de resistencia pacífica. El sector privado aplaudió las acciones, felicitando el gobierno por tomar medidas para garantizar el Estado de derecho y la propiedad privada. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la manera violenta con la cual las fuerzas policiales habían procedido a romper el cerco de los pobladores que protestaban pacíficamente, dejando docenas de personas heridas y destruyendo el campamento.

La respuesta violenta para implementar el proyecto minero evidenció la incapacidad de los oficiales del gobierno y los diferentes sectores de la élite de mantener un diálogo basado en igualdad de condiciones con los sectores de la población que se estaban oponiendo al proyecto minero. Reveló la postura parcial del Estado y sus representantes, convirtiendo el diálogo en un mecanismo para convencer a los comunitarios de los beneficios y las ventajas de la compañía minera o para disolver supuestos malentendidos sobre el proyecto minero. A la vez se buscó evitar hablar sobre las obvias irregularidades que constituían el origen del proceso para implementar el proyecto, sobre las violaciones de derechos ocurridas con respecto a la información previa y la consulta de las comunidades con respecto al proyecto minero, así como los diferentes ataques directos a los integrantes de la RPLP.

Como un comunitario indicó, esto dejó la respuesta violenta como única opción para las autoridades. «En este caso la parte oponiéndose al diálogo era claramente el gobierno. El gobierno obviamente no tiene la capacidad de dialogar porque no tienen ni los argumentos técnicos ni legales para hacerlos y la única alternativa que le queda es la represión. Recibe presiones por parte de la compañía y por eso termina reprimiendo para asegurar que la compañía pueda iniciar sus trabajos.»²⁰⁵

En el curso del diálogo la RPLP había intentado contener el riesgo de los patrones de cooptación por parte de los agentes del Estado que marcaban las negociaciones e insistieron en varias condiciones, entre ellas la reformulación de formas de representación, la transparencia y el

²⁰⁴ Los integrantes de la RPLP sospechan que la decisión de denegar acceso a los miembros del CMI fue solo un pretexto. Ellos opinan que el gobierno había recibido información previa de que el experto en materia ambiental, Roberto Morán, estaba acompañando a los representantes de la RPLP para señalar las deficiencias en el EIA, lo que hubiera podido revelar la débil argumentación técnica sobre la cual se apoyaba el proyecto minero. Entrevista con un integrante de la RPLP, 29/09/2014.

²⁰⁵ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 29/09/2014.

carácter público de las reuniones, el cumplimiento de las responsabilidades legales del Estado, así como la introducción de elementos participativos en los procesos de toma de decisión. Al final una combinación de las condiciones demandadas por parte de la RPLP para contener estas pautas, así como las debilidades obvias en la argumentación legal y técnica por parte de los actores institucionales dejó la coerción como única opción para avanzar con la implementación del proyecto.

Al mismo tiempo y a pesar de la cobertura tendenciosa y muchas veces incluso criminalizante de los principales medios de comunicación, los comunitarios en su articulación continuaron proyectando sus demandas hacia la arena pública nacional. Insistiendo en el rol de la población local en la toma de decisiones con respecto a sus territorios, la RPLP plantea la idea de «recuperar el verdadero sentido de la democracia, empezando con la inversión de procesos políticos.»²⁰⁶

Por un lado, mandando mensajes hacía el nivel nacional, la RPLP ha persistido en el contexto local después del desalojo del 23 de mayo de 2014. La estrategia coercitiva usada por parte del Estado puede avanzar en el corto plazo a la implementación de los intereses de las élites. Sin embargo, el sentido generalizado de injusticia resultado de estas medidas también abre posibilidades para nuevas convergencias alrededor de las perspectivas antagónicas y de «diferencia». El flujo de mensajes y las acciones de solidaridad posterior al desalojo violento eran clave para convencer a la RPLP a seguir. Al día siguiente, los miembros comunitarios ya empezaban a reconstruir el campamento, a solo unos metros de distancia del anterior. En el curso de los próximos meses fue expandido y retomó la posición previa, cerca de la entrada a la mina. Desde entonces la RPLP ha persistido, hasta cierto punto expandiendo y ajustando el principal objetivo de la resistencia: El campamento de protesta representa una señal de disenso, no solo con respecto al proyecto minero Progreso VII Derivada sino también con respecto a las otras licencias planificadas para la región, donde La Puya constituye el punto de entrada. Esto significa que la RPLP mantiene su afirmación de «diferencia» y su lucha de hacer eco de las demandas locales, mientras al mismo tiempo protege el espacio donde su propia «diferencia» puede ser consolidada y continuar a desarrollarse en significados y prácticas.²⁰⁷

²⁰⁶ Entrevista con integrante de la RPLP, Guatemala Ciudad, 13/11/2013.

²⁰⁷ El 15 de julio de 2015 una corte civil guatemalteca ordenó la suspensión de todas las operaciones vinculadas al proyecto minero Progreso VII Derivada en respuesta a una denuncia interpuesta por dos alcaldes auxiliares de dos comunidades de San Pedro Ayampuc, El Carrizal y El Guapinol. Ellos habían argumentado que la compañía estaba operando sin un permiso de construcción y sin tener los necesarios permisos ambientales, así como sin haber efectuado una consulta a los vecinos. Además, en febrero de

4.5. Conclusión

Este capítulo ha analizado como la implementación de un proyecto minero en las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc ha dado inicio a un proceso de convergencia entre los integrantes de las comunidades locales. El establecimiento de un campamento de protestas como un espacio físico autónomo y simbólico, independiente de gobierno y partidos nacionales ha sido crucial para el proceso organizativo de la RPLP. Este espacio creado de manera colectiva ha representado un significante, cuyo significado ha sido construido en el curso de la resistencia basado en un discurso que articula las preocupaciones alrededor del impacto ambiental del proyecto minero, así como en afirmación de la vida. El proceso organizativo ha consolidado una posición antagónica de «diferencia» entre los integrantes comunitarios. En contraste con el estudio de caso anterior, en el caso de la RPLP el fondo étnico de esta «diferencia» es menos explícito.

Al mismo tiempo, la posición antagónica resulta de un proceso de relativamente corto plazo y se apoya en una variedad de entendimientos locales derivados de la experiencia de la vida rural, así como la complejidad demográfica local. Dentro del espacio social y físico de la Puya esto ha permitido la reconciliación de la diversidad de género y etnicidad, representando así un ejemplo que contrasta con los patrones patriarcales y racistas que prevalecen en la sociedad guatemalteca, a la vez que evidencia el desarrollo continuo de esta postura de «diferencia» al interno del colectivo.

El proceso de acción colectiva incentivó la integración de nociones participativas que buscan enfatizar la horizontalidad de relaciones sociales y el rechazo de formas de liderazgo jerárquico. En este sentido la asamblea de la RPLP está abierta a la participación de todos sus integrantes y se ha consolidado como el espacio central de toma de decisiones, de esta manera avanzando la apropiación colectiva de los procesos organizativos por parte de los integrantes de las comunida-

2016, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó esta decisión y ordenó la suspensión provisional de la licencia minera del proyecto, respondiendo a un recurso de amparo interpuesto por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y la RPLP en 2014, quienes habían demandado la suspensión por la violación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. Con el objetivo de lograr la implementación de la decisión de la CSJ y conseguir la paralización de las actividades mineras del proyecto minero, el 6 de marzo de 2016, la RPLP estableció otro campamento de protesta frente al MEM, demandando que acate la decisión de la CSJ que además fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad el 6 de mayo de 2016.

des locales. Además, estos modos incluyentes de toma de decisiones han sido reproducidos en varias comunidades participando en la oposición al proyecto minero, de esta manera evidenciando un proceso paralelo de empoderamiento de lo «local» como señalado en el capítulo previo.

El relacionamiento de al RPLP con el espacio institucional ha manifestado el carácter antagónico de esta acción colectiva y demostrado la incompatibilidad de perspectivas y prácticas contrastantes. Sin embargo, estas interacciones también ofrecieron una plataforma para evidenciar las inconsistencias que forman parte de los discursos de las élites y del Estado y ha permitido a la RPLP a proyectar su posición de «diferencia» y dirigir sus demandas hacia un público nacional. Últimamente, el desalojo violento del campamento representó la respuesta del Estado a los intentos de la RPLP a resguardar sus posiciones de los patrones de cooptación y establecer un diálogo con base en condiciones transparentes e iguales. Insistiendo en mantener el control sobre los espacios locales y avanzando su participación en la toma de decisiones como un punto de partida para procesos políticos, la RPLP, parecido a las comunidades del norte de Quiché, articula este aspecto como una condición clave para la construcción de procesos democráticos en Guatemala.

5. Conclusiones

El principal objetivo de este trabajo ha sido explorar las formas de acción colectiva en el contexto de un Estado caracterizado por una complejidad demográfica y un nivel elevado de cooptación por parte de diferentes facciones de las élites, tal es el caso de Guatemala. En el primer capítulo se desarrollaron los elementos de un marco conceptual para analizar y comprender las expresiones de agencia colectiva que surgen en dicho contexto. Intentando escapar de un modelo de estructura-agencia demasiado rígido y determinante, busqué introducir un marco conceptual que concediera espacio a las diferencias ontológicas y los procesos epistemológicos que se derivan de ellas. Sostengo que esa apertura es de especial relevancia para contextos marcados por elevados niveles de complejidad cultural entre la población.

A la vez que el modelo estructura-agencia de Giddens y su intento de introducir una perspectiva relacional constituyó un punto de partida para esta discusión, tres limitaciones claves fueron señaladas. Primero, la ausencia de un reconocimiento de los diferentes marcos ontológicos que subyacen a las motivaciones de acción y patrones de comportamiento de sujetos y colectivos, de especial importancia para entender expresiones de agencia fuera de contextos occidentales. Segundo, a pesar de reconocer que las expresiones de acción colectiva están sujetas a correlaciones de poder y antagonismos, parece un modelo demasiado mecanicista que no reconoce las orientaciones no-lineales de acción colectiva. Tercero, dado que no presta atención a formas de agencia colectiva, desestima el potencial para la producción de conocimientos y significados desarrollados a un nivel subalterno.

Además de resaltar las diferencias ontológicas presentes en contextos de complejidad cultural, quise enfatizar el carácter dinámico y cambiante de las subjetividades y los colectivos. Basándome en un entendimiento Deleuziano he señalado la inmersión relacional de subjetividades en

un contexto y en procesos incesantes de «devenir».²⁰⁸ Para resaltar este aspecto fueron clave los elementos proporcionados por la teoría de ensamblajes, que permite sostener un entendimiento de las expresiones de acción colectiva como cuerpos agregativos caracterizados por niveles cambiantes de cohesión.²⁰⁹

Como la experiencia de la actividad organizativa de las comunidades en Guatemala demuestra, los procesos de convergencia colectiva resultan de una revitalización de significados compartidos, así como de significantes colectivos como la «comunidad», articulados en los discursos y prácticas de los procesos organizativos. En este sentido, los ensamblajes locales o comunidades en sus resistencias en defensa del territorio desarrollan «propiedades emergentes» que son reflejadas en sus discursos y prácticas, las cuales articulan colectivamente.²¹⁰ El concepto de «significados» facilita un entendimiento de la convergencia en cuerpos de acción colectiva. Sostengo que éstos están reflejados en los intentos de los colectivos para reapropiarse o controlar la producción de significados, lo que implica enfrentarse a mecanismos que buscan la redefinición de objetos sociales y culturales. Esta perspectiva está en línea con autores que procuran entender individuos y colectivos produciendo y disputando no sólo recursos económicos sino también símbolos, relaciones, necesidades e identidades.²¹¹

Los conflictos alrededor de los significados suelen ser especialmente evidentes en contextos donde la complejidad cultural se combina con intentos jerárquicos y muchas veces coercitivos de imponerlos a otros grupos poblacionales. En este sentido, las expresiones de resistencia bajo análisis en este trabajo buscan escaparse de y oponerse a la codificación de espacios y prácticas por parte de las élites o actores estatales que buscan resignificar lo local. El «consenso» en torno a la explotación de los recursos naturales²¹² así como las políticas en línea con el entendimiento de Harvey de «acumulación por desposesión»²¹³, representan procesos que buscan integrar las áreas rurales del Sur Global a sus estrategias y lógicas de acumulación. Es en el curso de esta expansión territorial que desde las redes subalternas se promueve una acentuación de determinados significados que a la vez incitan procesos de «localización defensiva»²¹⁴ entre la población rural.

²⁰⁸ DELEUZE, Giles (1994): *op. cit.*

²⁰⁹ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

²¹⁰ DE LANDA, Manuel (2006): *op. cit.*

²¹¹ Por ejemplo, MELUCCI, Arturo (1989): *op. cit.*; MELUCCI, Arturo (1996): *op. cit.*; ÁLVAREZ, Sonia E. (1998): *op. cit.*; DAGNINO, Evelyn (1998): *op. cit.*; ESCOBAR, Arturo (1992): *op. cit.* ESCOBAR, Arturo (2008): *op. cit.*;

²¹² SVAMPA, Maristella (2013): *op. cit.*

²¹³ HARVEY, David (2003): *op. cit.*

²¹⁴ ESCOBAR, Arturo (2001): *op. cit.*, p. 149.

El conflicto alrededor de la producción de significados también pone énfasis en un entendimiento de «diferencia» que subyace a la agencia antagonista y se refiere a la variedad de significados derivados de prácticas y pensamientos culturales. Pero además de esta «diferencia» a nivel de significados y de acuerdo con autores como Lefebvre²¹⁵ y Zibechi²¹⁶, he sugerido ver el reflejo de esta producción local del espacio no sólo a nivel de significados, sino también a nivel de las prácticas que politizan la «diferencia» y se traducen en diseños alternativos de las interacciones políticas. En este sentido, los procesos de resistencia trascienden una lógica puramente antagónica y desarrollan procesos frágiles orientados hacia la prefiguración de relaciones e interacciones basadas en patrones alternativos. Las ideas de «espacio» y los entendimientos de «territorio» adquieren relevancia especial para los miembros de las comunidades locales ya que constituyen una condición básica para el desarrollo de su «diferencia» y su reproducción. Las potencialidades inherentes a una afirmación de «diferencia» no se limitan a identidades determinadas y fijas ni quedan confinadas a un sentido oposicional.

Siguiendo la línea del entendimiento de Deleuze²¹⁷ acerca de la «diferencia en sí misma», he sugerido ver la acción colectiva como expresiones de agencia en desarrollo constante y con características inmanentes, que están reflejadas en sus prácticas y discursos. Esta perspectiva ayuda a deconstruir un entendimiento esencialista de cultura o tradición e indica su naturaleza imperfecta, así como las tensiones internas que siempre son parte integral de ensamblajes sociales. Adicionalmente, permite atribuir el potencial de desarrollar «diferencia» a colectivos sociales constituidos por diversas características, sin limitarlo a criterios étnicos o culturales específicos.

El multiculturalismo ha representado el intento más importante de reconciliar las diferencias étnicas y la democracia «desde arriba» a través de marcos legales y asignando derechos especiales para las minorías y los grupos étnicos. Pero sus limitaciones pudieron ser identificadas especialmente en la aplicación de estos derechos, así como en sus carencias conceptuales. Como consecuencia, en muchos contextos del Sur, una noción binaria parece caracterizar las articulaciones de acción colectiva y sus estrategias. Por un lado, hay un esfuerzo de buscar la distancia del Estado y de forjar espacios autónomos para defenderse de las políticas implementadas verticalmente. Por otro lado, en el cur-

²¹⁵ LEFEBVRE, Henri (1991b): *op. cit.*

²¹⁶ ZIBECHI, Raul (2011): *op. cit.*

²¹⁷ DELEUZE, Gilles (1994): *op. cit.*

so de la acción colectiva se establecen relaciones estratégicas con el Estado apelando a un reconocimiento de su diferencia, autonomía y derecho a decidir sobre la base de determinados regímenes de derechos.

Como los estudios de caso demostraron, la resistencia a la explotación de los recursos naturales indica cómo la agencia colectiva se convierte en un mecanismo para poner de relieve las incompatibilidades fundamentales que son producidas por la implementación de estas políticas, especialmente en el ámbito local. Las expresiones de resistencia suelen surgir fuera de los centros políticos de la sociedad y en lugar de amplios movimientos o expresiones relacionadas con partidos políticos nacionales, constituyen conjuntos localizados de resistencia, confinados por los patrones de un Estado cooptado. Como he mencionado anteriormente, los procesos de organización alrededor de la defensa del territorio se han caracterizado por un fortalecimiento de significados enraizados localmente alrededor de «territorio», así como por una revitalización de la «comunidad» como significante colectivo.

El caso de las comunidades en el norte de Quiché evidencia la forma en que los significados culturalmente anclados son reproducidos en el lenguaje y sus entendimientos del mundo y proporcionan una dimensión subyacente que resulta crucial para entender sus procesos de resistencia. El caso de la RPLP pone de relieve cómo los significados que enmarcan la organización colectiva han surgido en procesos de duración relativamente corta, basándose en la experiencia de la vida rural y en múltiples fuentes de conocimiento, entre ellas las de las comunidades indígenas.

En ambos estudios de caso la «afirmación de la diferencia» está reflejada en entendimientos «relacionales» que ponen de manifiesto las profundas incompatibilidades con los puntos de vista de la élite. Mientras estos últimos promueven una mercantilización de los recursos naturales y territorios, las expresiones de resistencia defienden una comprensión del territorio que hace hincapié en la relación entre los seres humanos y la naturaleza como condición para la supervivencia física y cultural de sus comunidades.

Los distintos nodos de la acción colectiva que participan en la defensa del territorio han sido acompañados por un nuevo aumento de las violaciones de derechos humanos, la criminalización de sus acciones y las intervenciones represivas del Estado. Sin embargo, la percepción colectiva de las injusticias y las amenazas que representan los proyectos y las políticas promovidas por las élites y el Estado han estimulado también un sentido de solidaridad y colectividad entre los y las integrantes

de la comunidad local. De este modo, en muchos casos reforzaron una segunda dimensión «relacional» basada en el vínculo o compromiso del individuo con el colectivo o la «comunidad».

Los intentos de reapropiarse de los procesos de toma de decisiones han representado uno de los aspectos centrales de la respuesta local a las dimensiones del proyecto de modernización promovido por las élites. Un ejemplo claro de esta aspiración ha sido la organización de las consultas comunitarias entre las comunidades de la región del norte de Quiché. Las comunidades han puesto de manifiesto cómo en el curso de las convergencias o procesos agregativos a nivel local siguen desarrollando su «diferencia» y la politizan. Esto se ha reflejado en el intento de consolidar espacios participativos de toma de decisiones en el nivel subalterno, los cuales son enmarcados alrededor de la asamblea comunitaria. Así se ha promovido la consolidación de esferas públicas locales basadas en las experiencias y los problemas de los integrantes de las comunidades, a la vez desarrollando una crítica más profunda a los significados hegemónicos de «democracia». Lo anterior significa que su «diferencia» va más allá de una postura puramente antagónica hacia el desarrollo inmanente de sus potencialidades a partir de sus propias ontologías y producción de conocimientos.

En ambos estudios de caso analizados he señalado cómo el énfasis en la «asamblea» entendida como el espacio central de la toma de decisiones se ha complementado con la figura de un «delegado comunitario» que sustituye a la de un «representante». Esto ha constituido una medida adicional para fundamentar los procesos de toma de decisiones entre los comunitarios y fomentar una apropiación del proceso organizativo como tal. Además, se han llevado adelante intentos de crear espacios de deliberación sobre la base de criterios que hacen énfasis no sólo en sus características incluyentes sino también en sus propiedades «horizontales». En este respecto, la RPLP ha sido especialmente emblemática por su énfasis en abordar de manera explícita aspectos del patriarcado y del racismo.

En este sentido se enfatiza que la defensa del territorio y la afirmación de la «diferencia» no pueden estar asociadas exclusivamente con las comunidades indígenas. En el caso de las comunidades indígenas, la «diferencia» surge con un fuerte vínculo con el pasado y los modos de leer las realidades derivadas de conocimientos y culturas indígenas. No obstante, los significados y las prácticas diferenciales también se desarrollan entre las comunidades no-indígenas, en muchos casos, para expresar su desacuerdo con respecto a la reconfiguración de su entorno inmediato. Esto pone de relieve los retos de las articulaciones en términos de consolidar no sólo una posición de «diferencia» con respecto a

los factores externos, sino también de desarrollar su «diferencia» a partir de las relaciones y la diversidad al interno de los distintos nodos de resistencia.

Al mismo tiempo estas articulaciones locales no deben ser romanizadas. Estos espacios y conjuntos sociales también se encuentran atravesados por relaciones de poder y patrones de comportamiento que en muchos aspectos reproducen formas de dominación cultural, política y económica. Esto subraya la importancia de consolidar mecanismos procedimentales al interior de tales procesos organizativos para poner límites a formas de comportamiento que tienden a reforzar y estabilizar jerarquías. Además, la defensa del territorio no es la única dinámica que desarrolla procesos de «localización». Lo «local» también representa un nivel importante en los procesos de cooptación del Estado ya que con frecuencia es penetrado e integrado a las redes que buscan acceder a rentas legales e ilegales sobre la base de estructuras formales o informales de poder. Esto indica la compleja tarea de distinguir entre los múltiples procesos de «localización» e identificar su potencial en el contexto de una cooptación estatal que opera en múltiples escalas.

A pesar de la fuerte presión ejercida por las élites y el Estado para promover la implementación de políticas en torno a la explotación de recursos naturales, no han sido capaces de organizar un consentimiento a nivel local. Al contrario, han incentivado la resistencia de las comunidades donde continúan desarrollándose procesos frágiles e imperfectos de producción de conocimientos y prácticas. Al hacerlo, estos puntos de resistencia ponen de relieve las potencialidades de crear espacios públicos significativos a nivel local basados en las experiencias, los problemas y las voces de los comunitarios. Ya que estos procesos se llevan a cabo en un contexto marcado por dinámicas coercitivas y de cooptación, el objetivo principal de estas resistencias sigue siendo el de mantener viva su «diferencia» y tratar de encontrar maneras de volver «más democrática» su vida cotidiana.

El futuro guarda grandes desafíos para las comunidades de Guatemala y es probable que la reconfiguración de las zonas rurales promovida por las élites se acelere en los próximos años. Estas dinámicas también estarán acompañadas por las persistentes estrategias coercitivas y de cooptación que buscan garantizar la implementación de estos intereses. Sin embargo, las incompatibilidades producidas por las distintas políticas estatales y proyecciones económicas a nivel de las relaciones cotidianas tienden a multiplicar la oposición y los nodos de agencia no sólo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Además, dado que las zonas indígenas y no indígenas se encuentran en el foco de los

intereses económicos por igual, habrá nuevas oportunidades para que puedan «encontrarse» resistencias.

En dicho contexto, será decisivo hasta qué punto los intentos locales de crear procesos más inclusivos y de hacer frente a la complejidad cultural logren traducirse en relaciones trans-locales. Al mismo tiempo, el desafío fundamental en estos procesos de diálogo trans-local e intercultural será el de prevenir que los procesos organizativos caigan en la trampa de un liderazgo jerárquico y protagonista o que sigan pautas procedimentales que, especialmente en el largo plazo, resulten inadecuadas para abordar o crear espacio para autonomías, complejidades y diferencias locales.

Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 85

Este texto analiza expresiones de acción colectiva que han surgido principalmente en las áreas rurales de la Guatemala de posguerra alrededor de la defensa del territorio y los recursos naturales. El argumento principal sostiene que esta forma de acción colectiva emerge en la sombra de un estado cooptado y manifiesta cualidades distintas de expresiones previas de activismo revolucionario y democrático. Estas resistencias se caracterizan por lo que defino como «diferencia», un posicionamiento antagonista que se basa en significados políticos, económicos y culturales localmente anclados que contestan el reordenamiento de relaciones y espacios promovido por las élites. Como dos estudios de caso demuestran, esta «diferencia» es puesta en práctica a través de la defensa del territorio, que expresa un apego a espacios físicos determinados y ha motivado resistencias colectivas a la implementación de proyectos vinculados a la explotación de recursos naturales.

Patrick Illmer tiene un M.Phil en Ciencias Políticas de la Universidad de Viena y ha obtenido recientemente un Ph.D del Departamento de Estudios de Paz de la Universidad de Bradford. Durante los últimos 10 años ha estado llevando a cabo investigaciones en Guatemala y trabajando con diferentes colectivos y organizaciones en temas vinculados a los derechos humanos en Centro América. Actualmente se desempeña como Investigador Asociado del Instituto de Análisis y Proyección sobre el Estado de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y está conduciendo investigaciones enfocadas principalmente en las áreas temáticas de movimientos sociales, el estado, democratización, territorio y recursos naturales.

